

Confrontación

DE IDEAS PARA UNA NUEVA SOCIEDAD

3

GUERRA

PAZ

C
O
N
O
M
I

L
I
A
N
Z
A
S

CAPITALISMO

Confrontación de ideas para una nueva sociedad
Publicación trimestral.

Año I Nº 3 MARZO 1987

Director responsable: Julián LEMOINE

Consejo editorial

Carlos Abalo
Beba Balvé
Jorge Beinstein
Carlos A. González Gartland
Julián Lemoine
Felix Marcos
Néstor Vicente
Ernesto Villanueva
Alberto Wiñazky

Redacción y administración: Avda. Belgrano 1787, 2º piso,
(1093) BUENOS AIRES, Argentina. Teléfono: 45-4756

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite
I.S.B.N.

Suscripciones:

Precio 4 australes

Argentina (4 números).....16 australes
Exterior (4 números).....20 dólares
Giros y cheques a la orden de Carlos A. González Gartland.

Con este número inauguramos una sección nueva: Documentos. Una sección ante todo informativa, dando a conocer aquellos documentos que en el plano nacional o internacional han generado nuevos campos para la reflexión y el debate, y que por distintos motivos no han sido publicados en el país por otros medios o lo han hecho en forma distorsionada o muy fragmentaria. Esto implica que CONFRONTACION no toma partido oficialmente sobre el contenido de estos y los posteriores Documentos, sino simplemente, le brinda información al lector para su propio análisis. Hemos comenzado la publicación de estos Documentos con dos trabajos que atañen al corazón de las relaciones político-militares. A saber, la unidad de los contrarios en el plano de la guerra y la paz. Los denominados por los estrategas norteamericanos "conflictos de baja intensidad" o "guerra de baja intensidad", que es sin dudas, uno de los aspectos más importantes dentro de uno de los polos de la contradicción guerra-paz, y a la vez, una forma concreta y parcial a la respuesta de su dinámica en un frente específico -por ahora el Tercer Mundo- por parte de los Estados Unidos. Un parecer específico sobre esta cuestión, fue elaborada por la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) y la brindamos en este número junto a un análisis de la norteamericana Sara Miles que originariamente fue publicado en la revista japonesa AMPO. A su vez, sobre la relación guerra-paz a escala planetaria, reproducimos otro punto de vista específico: el del historiador soviético E. Plimak bajo un artículo publicado en el diario Pravda y que fue reproducido en la Argentina por distintas agencias internacionales en forma muy fragmentada, bajo el título de "El marxismo en la era nuclear".

La cuestión del Estado argentino es abordada en varios puntos específicos en dos trabajos. Por un lado la discusión sobre la Reforma del Estado es encarada por Daniel Rodríguez, enmarcado el tema en la problemática Estado-Democracia, planteando la necesidad de una democracia participativa como alternativa a la democracia liberal. Este autor avanza sobre las cuestiones de representación-legalidad y en el carácter de la reforma administrativa de las empresas bajo el Plan Austral. Desde otro ángulo, el tema-problema de la sociedad civil-sociedad política en el Estado argentino, es tratado por Alberto Wiñazky, haciendo eje en la función mediadora del Estado entre las distintas fracciones de las clases dominantes, y particularizando que en las actuales circunstancias, una fracción determinada toma "el control directo de los aparatos del Estado".

Manuel Gaggero se interna en uno de los problemas más candentes de la actualidad política del país: las políticas de alianzas y la cuestión del Frente. Gaggero señala que "definir al enemigo a enfrentar permitirá tener perfectamente claro quienes pueden participar en un Frente que se proponga la Emancipación Nacional". Tanto este trabajo como el de Daniel Rodríguez fueron escritos en diciembre de 1986, sin embargo consideramos que mantienen buena actualidad para la discusión de los temas que tratan.

Como un avance de una investigación en marcha sobre el desarrollo del capitalismo en América Latina, Luis Vitale, aborda un punto específico de esa cuestión: el rol de las exportaciones no tradicionales como punto clave del modelo de acumulación en Latinoamérica y su caracter dentro de la nueva división internacional del trabajo en el capitalismo. Vitale aborda el tema de las exportaciones no tradicionales y su impacto sobre la estructura de la clase obrera, la ecología y la deuda externa, definiendo al impulso dado por el gobierno argentino a esas exportaciones como "la viga maestra de su política económica".

Por último un problema de estrategia. Ciertamente es, que a la revista todavía le falta precisión en definir sus ideas-fuerza. Esta es una falencia que reconocemos, sin falso pudor de ninguna índole. Pero de a poco vamos aproximándonos a esa meta, manteniendo a rajatabla el pluralismo político-ideológico en un proyecto editorial unitario. Una de las ecuaciones básicas que atraviesa a la sociedad argentina, es que la velocidad de la crisis orgánica y, simultáneamente, la recomposición de la hegemonía burguesa, se están produciendo en forma más rápida que la capacidad de recomposición del campo popular. Modificar el primer término de esta problemática está a años luz de nuestras posibilidades, ya que buena parte de su resolución depende del mercado mundial. Pero distinta es la situación en el segundo término de esa ecuación. En este sentido, creemos que vamos aportando nuestro granito de arena. La sola existencia de CONFRONTACION es una prueba concreta de que se está derrotando al sectarismo, la más infantil de las enfermedades infantiles, dentro del campo popular. Que no sólo es bien posible derrotar al sectarismo en la práctica, sino que ya estamos en una fase superior, como es impulsar ejes comunes de discusión en un ámbito unitario donde confluyen compañeros de las más distintas corrientes del campo popular. Se podrá decir que no vamos tan rápido como sería necesario. Pues bien, es verdad. Tanto, como que avanzamos despacio pero seguro. Nueve meses atrás era impensable que se ampliara la discusión, simultáneamente en distintos ámbitos bajo ejes de reflexión comunes. Hemos logrado no competir entre nosotros, criticándonos sin doble intención ni chicanas, teniendo bien presente que, ante todo, lo prioritario es fortalecer la unidad del campo popular. Solo resta nuestro férreo compromiso de seguir: ¡Adelante!

EL DIRECTOR

Marzo de 1987

ACLARACION

Agradecemos todas las críticas y elogios sobre los números 1 y 2 de *Confrontación*. Pero por favor, terminemos con la verdadera cascada de comentarios verbales, personales y telefónicos. Estimados lectores: superemos los métodos de trabajo artesanales. Escriban o en caso contrario envíen cassettes grabados. Así será posible realmente enriquecernos todos. Por otra parte, tenemos que reconocer que la distribución de la revista no ha sido precisamente una pieza de relojería. Sabemos perfectamente que mucha gente buscó la revista y, no la encontró o tardó mucho en ubicarla. Con algunos cambios que hemos introducido, este problema se subsanará rápidamente.

Sumario

ALAI (Agencia Latinoamericana de Información)	
<i>Conflictos de Baja Intensidad</i>	7
Manuel Gaggero	
<i>Alianzas de clases y fuerzas sociales.</i> <i>"De que frente hablamos"</i>	18
Sara Miles	
<i>¿Qué es el conflicto de baja intensidad?</i>	27
E. Plimak	
<i>El Marxismo-leninismo y la condición de</i> <i>revolucionario de fines del siglo XX</i>	31
Daniel Rodríguez	
<i>Argentina: Democracia, reforma del estado y política económica</i>	37
Luis Vitale	
<i>La inserción de las exportaciones no tradicionales de América</i> <i>Latina en la nueva división mundial del trabajo durante la fase superior de</i> <i>transnacionalización del capital</i>	52
Alberto Wiñazky	
<i>La clase dominante y el Estado en la República Argentina</i>	75
Julián Lemolne	
<i>In Memoriam</i>	79

Conflictos de Baja Intensidad

* ALAI (Agencia Latinoamericana de información)

Para Washington, el conflicto centroamericano se enmarca dentro de lo que los estrategas del pentágono han denominado "Conflictos de Baja Intensidad" —CBI— (Low-Intensity Conflict), para tipificar los conflictos regionales del Tercer Mundo que no llegan al punto de la guerra convencional o nuclear.

Esta nueva doctrina de intervención norteamericana cobró cuerpo tras el fracaso de las teorías clásicas de la contra-insurgencia implementada por los EEUU en el sudeste asiático. En donde se privilegió una guerra convencional contra un adversario que libraba una guerra irregular.

En base a las lecciones extraídas de Vietnam, luego de amplios y sistemáticos estudios, los estrategas militares norteamericanos introdujeron importantes modificaciones a los conceptos estratégicos y prácticos del modelo contrainsurgente, estableciendo como premisa central que los conflictos internos del Tercer Mundo deben ser encarados como una guerra política y no sólo militar, puesto que, al decir de John Marsh, secretario del ejército estadounidense, "las raíces de

las insurgencias no son de origen militar y la solución tampoco lo es".

Esto es, un tipo de guerra en donde los factores políticos, sociales, económicos y psicológicos, adquieren tanta importancia como los puramente militares en la medida que su propósito es conquistar e integrar a la población civil en la alternativa contrarrevolucionaria, para de esta manera neutralizar y desarticular la alternativa revolucionaria. En último término, los conflictos son considerados como un enfrentamiento entre dos proyectos opuestos, más que como una lucha militar entre dos ejércitos.

Este esquema más matizado de los conflictos pasó a constituir la doctrina de los Conflictos de Baja Intensidad, que engloba tres tipos de operaciones militares: la contrainsurgencia clásica, la proinsurgencia o guerra contrarrevolucionaria y la defensa "activa" contra el terrorismo. Consideradas globalmente, estas tres estrategias conllevan a un intervencionismo militar a gran escala, si bien los estrategas de esta doctrina insisten en la necesidad de que sean las fuerzas locales quienes libren la guerra, evitando al máximo

* *Servicio mensual de Información y Documentación* ; Año X, II Epoca, Nº 86; diciembre de 1986. Edición Latinoamericana (Nº6).

Los trabajos publicados son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no constituyen necesariamente la opinión de la revista. Pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente. No se devuelven originales no solicitados.

el involucramiento masivo y directo de tropas norteamericanas.

Actualmente, los conflictos en Afganistán, en Angola, en Mozambique, en Filipinas, en el Líbano y, por supuesto en América Central, han sido catalogados dentro de esta categoría. Pero todo parece indicar que esta última región constituye su laboratorio principal y "accesible", como diría Andy Messing del Consejo de Defensa Nacional. De ahí que hemos considerado pertinente reproducir el documento elaborado por el Resource Center* sobre la implementación de esta doctrina del CBI en Centroamérica, puntualizando toda vez que éste está dirigido al público norteamericano.

CBI: Un plan de guerra para América Central

Las indicaciones de la teoría del CBI que está siendo puesta en práctica incluyen:

- La expansión de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) y una mayor atención a la formación de divisiones de despliegue o de baja intensidad.
- Una mayor coordinación entre el DOD (Departamento de Defensa), el Departamento de Estado, y la AID.
- La nueva oficina del Pentágono para la asistencia humanitaria.
- La creación de una oficina de anti-terrorismo y un Programa de Asistencia Anti-terrorista en el Departamento de Estado.
- Un nuevo énfasis y una definición de la acción cívico-militar y de operaciones psicológicas.
- La reanudación del entrenamiento de la policía centroamericana por los EE.UU.
- La cooperación de DOD y AID en la formulación e implementación del plan de pacificación en El Salvador.
- El apoyo de AID para el programa de acción cívica y para los esfuerzos de pacificación del Ejército de Guatemala.
- La coordinación de los planes militares de

los EE.UU. con grupos mercenarios anti-comunistas y organizaciones privadas de derecha, tales como la Liga Mundial Anti-Comunista y los Amigos de Las Américas.

— Un papel ampliado para la guerra psicológica a través de la Agencia Estadounidense de Información, la Fundación Nacional para la Democracia, la CIA, y el Instituto Americano para el Desarrollo del Trabajo Libre (AIFLD), además de la capacidad ampliada de las operaciones psicológicas (Psyops) del ejército.

— La canalización de la ayuda económica y militar (tanto cubierta como aprobada) a fuerzas sustitutas o representantes.

Una estrategia para los años 80

La doctrina del CBI incluye muchos de los instrumentos de la estrategia contra-insurgente desarrollada en los años 1960: acción cívica, coordinación interagencial, pacificación, operaciones especiales, defensa civil interna, asistencia militar y entrenamiento. Sin embargo, existen diferencias importantes. La nueva doctrina plantea el despliegue de combate de tropas estadounidenses sólo como último recurso. Ni el público norteamericano ni el Pentágono quieren hundirse en un pantano parecido al de Vietnam. Los estrategas del CBI reconocen que el envío de tropas terrestres norteamericanas al tercer mundo tiene la probabilidad de ser contraproducente, debido a que tal intervención socava el apoyo doméstico e internacional para la política exterior de los EE.UU. y puede fomentar una mayor resistencia interna.

En lugar de mandar aviones llenos de muchachos norteamericanos a combatir en las junglas extranjeras, la nueva defensa global estadounidense en el tercer mundo se apoya más en ataques estilo Rambo, operaciones de limpieza tales como en Granada, apoyo para "luchadores de libertad" anti-comunistas, y golpes anti-terroristas. Entrar y salir es el lema de este intervencionismo nuevo.

*Documento publicado en *Dialogo Social*, N° 194, Panamá, octubre 1986. En esta versión hemos introducido algunos ajustes de traducción.

Mientras que la estrategia anterior de contra-insurgencia tenía el objetivo de contener geográficamente al mundo socialista y de impedir a los guerrilleros izquierdistas de lograr el poder en otros países, la estrategia del CBI es más ambiciosa. La contra-insurgencia mantiene un lugar destacado en la doctrina del CBI. Sin embargo, la nueva estrategia también tiene el objetivo de hacer retroceder lo que el ejército describe como "el alcance global" de la Unión Soviética. La doctrina CBI es una estrategia que tiene por meta reafirmar la hegemonía de los EE.UU., recuperando el territorio que el "mundo libre" ha perdido.

Un nuevo compromiso intervencionista

Otra característica notable de la estrategia contemporánea del CBI es su definición amplia de la seguridad naval de los EE.UU. En la visión global de los proponentes de esta doctrina, tal como el Secretario de Estado Schultz, (y todo lo que representa) está siendo atacado por fuerzas diversas y sinuosas en, virtualmente, cada lugar del planeta. Las guerras de guerrillas, los asaltos terroristas, el tráfico de drogas, la agitación doméstica en el tercer mundo, y aún la crítica de los medios sobre la política exterior de los EE.UU., todos estos son síntomas de este ataque completo contra la seguridad norteamericana y sus valores. De este punto de vista, la seguridad nacional de los EE.UU. está definida en nuevos términos ideológicos como también geopolíticos.

La doctrina del CBI ha redefinido y ampliado el concepto de guerra. Teóricos militares como el Teniente Coronel David Caldon del Comando del Sur de los EE.UU. (SOUTHCOM) expresa la naturaleza siniestra de esta guerra constante del CBI. Actualmente estamos en guerra en la Cuenca del Caribe. No es una guerra en el sentido convencional. Es inconvencional y es irregular porque no hay "líneas de batalla", donde las infraestructuras económicas, tradiciones sociales y sistemas políticos son socavados des-

de adentro, a través del apoyo externo, por medios tanto militares como paramilitares.

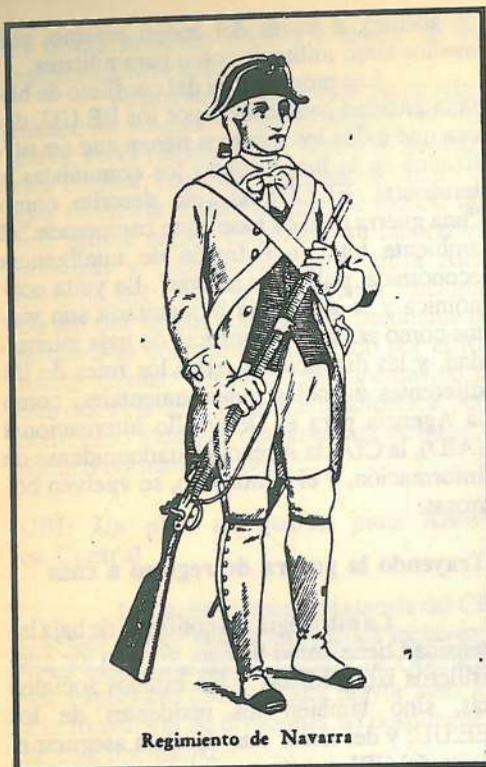
Los proponentes del conflicto de baja intensidad patrocinado por los EE.UU. dicen que todos los recursos tienen que ser utilizados en la lucha contra los comunistas y terroristas. El CBI ha sido descrito como "una guerra total de base" que comprende "el ambiente total, una fusión de inteligencia económica, política y militar". La yuda económica y la asistencia humanitaria son vistos como armas del conflicto de baja intensidad, y las distinciones entre los roles de las diferentes agencias gubernamentales, como la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), la CIA, la Agencia Estadounidense de Información, y el Pentágono, se vuelven borrosas.

Trayendo la guerra de regreso a casa

La estrategia del conflicto de baja intensidad tiene como blanco, no sólo los guerrilleros izquierdistas y los estados socialistas, sino también los residentes de los EE.UU. y del tercer mundo. Para asegurar el éxito del CBI, sus proponentes apoyan operaciones psicológicas dirigidas hacia el público estadounidense y la población de Centro América.

"Yo creo que la operación especial más crítica que tenemos hoy es de persuadir al pueblo norteamericano que los comunistas tienen la intención de fregarnos", avisa J. Michael Kelly, Asistente Vice-secretario de la Fuerza Aérea Norteamericana. "Si nosotros podemos ganar esta guerra de ideas, podemos ganar en todos los lugares". De la misma manera, George Tanham, ex-presidente de la Rand Corporation, asevera, "Nuestro problema más apremiante no está en el tercer mundo, sino aquí en casa, en la lucha por las mentes del pueblo".

Tal como decía el Dr. Sam Sarkesian, teórico del CBI: "Los líderes nacionales y el público tienen que entender que los conflictos de baja intensidad no se conforman a las nociones democráticas de estrategia o tácticas. La revolución y contrarrevolución desa-



Regimiento de Navarra

El manual de campo de 1981 destaca la necesidad de campañas nacionales de pacificación de IDAD que consoliden las instituciones civiles y militares. Estas campañas serían administradas por comités de coordinación nacionales y locales que usarían recursos militares, para-militares y económicos para fortalecer la nación. Las operaciones psicológicas "harían más aceptables para la población las medidas de control de población y de recursos". Patrullas locales de auto-defensa y otras fuerzas paramilitares deberían ser organizadas para garantizar la seguridad de las áreas pacificadas.

Es muy probable que el Manual de Conflicto de Baja Intensidad, brindó la base conceptual a las campañas actuales de pacificación en Guatemala y El Salvador. Ambos países han introducido planes de seguridad nacional y de desarrollo, adoptando programas de operaciones psicológicas y apoyando sus campañas de pacificación con la asistencia económica de la AID y de fuentes privadas estadounidenses. En Guatemala, los Comités de Coordinación Interinstitucional del ejército tienen una semejanza notable a los comités de coordinación y consolidación descritos en el manual del Ejército.

El Ejército anualmente ha puesto en circulación una nueva propuesta de definición y una nueva guía de operaciones del CBI. La nueva definición surgida del CBI es: una lucha limitada político-militar para lograr objetivos políticos, sociales, económicos, o psicológicos. Es frecuentemente prolongada y recorre desde presiones diplomáticas, económicas y sico-sociales hasta el terrorismo y la insurgencia. El conflicto de baja intensidad está generalmente limitado a una área geográfica y se caracteriza también por limitaciones sobre las armas, tácticas y nivel violencia.

Recomendaciones del CBI para el Pentágono

La doctrina del CBI es mucho más que un juego intelectual de guerra para los militaristas. En los últimos años, sus princi-

pios han sido integrados en los más altos niveles del gobierno y han sido popularizados para el consumo masivo. Un informe del DOD, preparado por cuatro destacados estrategas militares en 1984, resumió las iniciativas más grandes del LIC que actualmente están en práctica. El informe, "Conflicto de Baja Intensidad en los Años 1980: Recomendaciones de Política para los EE.UU.", aseveró que la doctrina debería abarcar tres categorías principales de acción: la contra-insurgencia, el asistir insurgencias anticomunistas y anti-terrorismo. Se sugirió que el Consejo de Seguridad Nacional formara un "grupo especial" para el CBI que sería dividido en las mismas tres categorías de operaciones.

Los autores felicitaron a la Administración Reagan por haber establecido una política que incluye estas categorías y por sacar a los EE.UU. de su posición post-Guerra de Vietnam y de no-intervención. Sin embargo, dijeron que la iniciativa tiene que continuar, y ofrecieron una serie de recomendaciones, muchas de las cuales han sido implementadas. Los estrategas de defensa afirmaron que en situaciones de contra-insurgencia, los EE.UU. deberían reanalizar las energías de las fuerzas de seguridad del tercer mundo "para brindar esfuerzos de seguridad y de autodefensa, mientras se estén emprendiendo esfuerzos de desarrollo nacional y de pacificación". Recomendaron la creación de una Fuerza de Acción Cívica dedicada al país, bajo los auspicios del propuesto "grupo especial del CBI". Esta fuerza incluiría representantes de la CIA, DIA (Agencia de Inteligencia de Defensa), DOD, Departamento de Estado, AID, y el USIA.

Para asistir a situaciones de insurgencia, el informe recomendó: 1) usar recursos paramilitares disponibles para debilitar a regímenes comunistas, 2) exacerbar disidencia en regímenes que estén en contra del gobierno de los EE.UU., 3) iniciar acciones para alentar la defenestración de un líder específico, 4) apoyar fuerzas paramilitares que aparecieron benignas y con posibilidades de desarrollo y 5) usar recursos de la CIA y del DOD para asistir a fuerzas nativas sustitutas.

En mayo de 1984, otro grupo de expertos, el Grupo Asesor de Guerra Especial, presentó al DOD sus recomendaciones sobre el CBI. Creado por Fred Ikle, el Sub-secretario de Defensa para la Política el grupo integraba estrategias de defensa, líderes de derecha y generales retirados con experiencia de acción y guerra especial. Entre los miembros destacados figuraban Andy Messing (Consejo de Defensa Nacional), General Edward Lansdale (ex-jefe de los programas de pacificación en las Filipinas y Sur Vietnam), General John Singlaub (jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta Inconventional y actual jefe de Liga Mundial Anti-Comunista), General Harry S. Aderholt (diputado de Singlaub en Vietnam y actual jefe del grupo de derecha Asociación de Comandos Aéreos), General Paul Gorman (entonces comandante del SOUTHCOM), Thomas Pickerig (Embajador Estadounidense en El Salvador), y Edward Luttwak (miembro del Centro para Estrategias y Estudios Internacionales).

El Grupo Asesor de Guerra Especial, esencialmente recomendó que el gobierno norteamericano aplicará las lecciones aprendidas en el sureste de Asia al conflicto centroamericano. En un informe de ocho páginas, exhortó a los EE.UU. a sustituir la guerra convencional por una guerra más de acción cívica y de psicología, y operaciones de pequeñas unidades; "El Ejército estadounidense es una unidad de potencia de fuego, de alta tecnología, y no es eso lo que se necesita (en América Central)", declaró Aderholt.

Fuerzas sustitutas

Las estrategias del CBI proponen un mayor uso de fuerzas sustitutas. Esta práctica de usar fuerzas sustitutas para defender los intereses de los EE.UU. no es nueva. Washington ha apoyado por mucho tiempo a gobiernos con su ayuda económica y militar para que esos regímenes lleven a cabo la política exterior de los EE.UU. El ejército norteamericano hasta tiene un nombre para esta práctica que llama "infraestructura sustituta", refiriéndose a la formación de las estructuras

rollan su propia moralidad y ética que justifican cualquier medio para lograr el éxito. La sobrevivencia es la moralidad fundamental".

Una doctrina en desarrollo

La publicación del Ejército, en 1981, de su Manual de Campo sobre Conflicto de Baja Intensidad, ubicó oficialmente por primera vez a esta estrategia dentro de las operaciones militares. Ese manual es visto actualmente como un puente entre la teoría anticuada de contra-insurgencia y las más recientes formulaciones de la teoría CBI. Presenta al CBI como una expresión de la teoría de contra-insurgencia de "La defensa y Desarrollo Interno" (IDAD), que evolucionó en los años 1970. La teoría IDAD, una extensión de la estrategia de contra-insurgencia de los años 1960, enfatizaba la organización de campañas de pacificación y de acción cívica.

locales usadas para combatir la insurgencia y hacer uso de asistencia militar estadounidense.

Los EE.UU. también han usado fuerzas guerrilleras sustitutas, notablemente el apoyo de la CIA a ciertas personas en tribus de Laos y Vietnam del Sur durante la Guerra de Vietnam y su apoyo a la invasión de Bahía de los Cochinos por exiliados Anti-Castro. Bajo la Administración Reagan, las fuerzas sustitutas anticomunistas han asumido un lugar prominente en la política nacional. En centro América, El Salvador, Honduras, y Costa Rica sirven como fuerzas representantes de los EE.UU., y los contras nicaragüenses son las fuerzas sustitutas prototípicas de los EE.UU.

Anti-terrorismo: un llamamiento para la intervención

El Departamento de Estado define al terrorismo como "la amenaza o uso de violencia para propósitos políticos". Sin embargo, el blanco de la campaña creciente de anti-terrorismo es casi exclusivamente la violencia que puede ser clasificada como revolucionaria o comunista. La Administración Reagan constantemente califica a Nicaragua como "una posta de comando para el terror internacional" y un "country club para terroristas", mientras que otros países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, donde abundan los escuadrones de la muerte y el terror militar, son alabados por sus principios democráticos. Los guerrilleros izquierdistas son calificados como terroristas, mientras que los contras son elogiados como luchadores de la libertad.

Los proponentes del CBI dicen que los EE.UU. necesitan responder de una manera ofensiva a la plaga del terrorismo. Los EE.UU. ya no deberían defender pasivamente sus instituciones y ciudadanos, de los ataques terroristas, sino más bien deberían montar una campaña en contra del terrorismo que incluiría golpes de prevención y de represalia.

Aunque el compromiso norteamericano con el antiterrorismo no ha avanzado lo

suficiente para muchos proponentes de la guerra de baja intensidad, el concepto ha cuajado rápidamente en los años recientes. En abril de 1984, el Presidente Reagan firmó un Directivo de Decisión de Seguridad Nacional (NSDD-138), que aprobaba el principio de golpes de prevención y represalias en contra de terroristas en otros países. El NSDD-138 estableció la estructura para el componente de anti-terrorismo del conflicto de baja intensidad.

El narcoterrorismo es un término usado por los funcionarios estadounidenses para describir el vínculo "terrorista/insurgente al tráfico de drogas y el uso creciente de tácticas terroristas por organizaciones de tráfico de drogas". Cuba y Nicaragua, cuyos líderes han sido calificados como negociantes de drogas por el Presidente Reagan, son blancos principales para la guerra de baja intensidad en contra del narcoterrorismo. El Director de la Oficina para el Antiterrorismo declaró en el Congreso: "Cuba y Nicaragua han estado activos en el tráfico de narcóticos como también del terrorismo, ya que ambas actividades debilitan las estructuras sociales y políticas de los gobiernos democráticos del Hemisferio de Occidente".

Como en cualquier tipo de guerra, el despliegue y la muestra de fuerza militar tiene una posición importante en el conflicto de baja intensidad. Los estrategas del CBI rechazan el uso de grandes divisiones norteamericanas en situaciones de CBI y en su lugar se apoyan en tres categorías de fuerza militar: 1) fuerzas sustitutas (tanto de los estados clientes como también guerrilleros anticomunistas), 2) fuerzas norteamericanas entrenadas para operaciones inconvencionales y despliegue rápido (en su mayoría Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses), 3) demostración de la fuerza convencional militar norteamericana, a través de juegos de guerra y una presencia naval amenazante.

Entrenando y abasteciendo a sustitutos

El entrenamiento militar de tropas extranjeras es financiada, a través del Progra-

ma de Entrenamiento Educativo Militar Internacional (IMET). El Pentágono también entrena tropas extranjeras a través de cursos dentro del país, bajo responsabilidad de los Equipos Móviles de Entrenamiento (MTT). La instrucción va más allá de temas estrictamente militares, como guerra de jungla, para incluir cursos en acción cívica, operaciones psicológicas y desarrollo nacional económico.

Las tendencias principales en el entrenamiento militar en los últimos varios años han sido:

—Uso creciente de los MTT para entrenamiento dentro del país.

—Más entrenamiento IMET para El Salvador, Honduras y Costa Rica.

—Un aumento en la proporción de estudiantes soldados de tropa, con respecto a oficiales.

—Entrenamiento, dentro del país de las Guardias Civiles y Rurales en Costa Rica.

—Más cursos en acción cívica y asistencia humanitaria.

El crecimiento militar en Centro América ha incluido un uso sin precedentes de la guardia nacional y unidades de reserva norteamericana en maniobras militares y acción cívica. Entre 1981 y finales de 1986, unidades de guardia de más de treinta y cinco estados habrán sido entrenados en la región. La participación de la Reserva del Ejército, en ejercicios de entrenamiento en Centro América, era virtualmente inaudito antes de 1983, pero en los años recientes el istmo se ha transformado en un lugar favorito de entrenamiento. A principios de 1986, el Departamento del Ejército dijo que las localidades de Centro América son usadas ahora con regularidad para entrenar a los reservistas y que "la participación de las reservas del ejército en los Ejercicios de Entrenamiento de Despliegue Ultramarino en Centro América, está proyectado para crecer".

Operaciones Especiales:

Primera línea del CBI

El propósito original de las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) era de lle-

var a cabo operaciones psicológicas y misiones inconvencionales tras de las líneas enemigas, durante el tiempo de guerra. Sin embargo, en los últimos veinticinco años, las unidades de SOF han sido también llamadas a ejecutar operaciones clandestinas durante tiempos de paz y de ayudar a campañas de contrainsurgencia. Recientemente, un nuevo uso de las SOF ha surgido: dirigir golpes antiterroristas.

Las Operaciones Especiales pueden ser usadas en cualquier nivel de la envergadura del conflicto, pero la mayoría del entrenamiento de las SOF "pueden mejorar situaciones adversas a los intereses estadounidenses, sin involucramiento norteamericano en conflicto armado a gran escala y con un costo mínimo de vida y recursos".

Operaciones autorizadas de SOF incluyen:

—Guerra inconvencional.

—Entrenar y apoyar a fuerzas militares y paramilitares extranjeras.

—Conducir operaciones humanitarias.

—Neutralización del terrorismo.

—Conducir operaciones de engaño.

—Apoyar fuerzas guerrilleras.

—Apoyar la defensa interna de países aliados.

—Brindar apoyo clandestino a otras operaciones.

—Operaciones estratégicas psicológicas.

—Iniciativas de acción cívica.

Miembros del Centro de Estrategia Nacional e Información señalan, en un nuevo libro de Operaciones Especiales en la Estrategia Estadounidense, que, "la Administración Reagan ha dado luz verde al Departamento de Estado y a la CIA para desarrollar las capacidades inconvencionales". En un pedido para más financiamiento a las SOF, el Secretario del DOD Weinberger declaró: "La alta prioridad que hemos asignado a la revitalización de las SOF refleja nuestro reconocimiento que el conflicto de baja intensidad —para el cual los SOF son incomparablemente apropiados— representa la amenaza que más probablemente encontraremos a lo largo de los fines de este siglo".

Asistencia Humanitaria y el CBI

Cuando los proponentes del conflicto de baja intensidad dicen que éste significa la "guerra total", ellos no quieren decir una guerra sin límites o un conflicto de alta intensidad. Ellos plantean un esfuerzo coordinado que junte todos los recursos militares y civiles en una ofensiva en contra del comunismo y terrorismo.

Este esfuerzo de integrar la ayuda económica y humanitaria a la estrategia del CBI está ocurriendo en tres frentes separados: 1) coordinación más estrecha entre el ejército y la CIA, y el AID en situaciones del CBI, 2) mayor involucramiento del DOD en asistencia no-militar, y 3) la obtención de recursos privados.

El AID como socia del CBI

Es la opinión de la mayoría de los proponentes del CBI que la AID ha estado afectada por el síndrome de Vietnam y que la agencia debería ser alertada a poner más recursos a disposición de las campañas de contrainsurgencia y de las insurgencias apoyadas por los Estados Unidos. En el pasado, la AID era más circunspecta en usar la ayuda económica para propósitos militares. En los años 1960, la AID financió directamente el treinta por ciento del programa de acción cívico-militar del Pentágono en América Latina. Durante la Guerra de Vietnam, la AID trabajó estrechamente con el ejército en campañas de pacificación y antiterrorismo y se juntó abiertamente con la CIA para apoyar a mercenarios anticomunistas nativos.

El empuje para involucrar a la AID más estrechamente en las operaciones militares, ha mostrado varios signos de éxito en Centro América. La dirección de la AID en programas de pacificación en El Salvador, y sus proyectos a lo largo de la frontera nicaragüense con Honduras y Costa Rica, son ejemplos de la creciente voluntad de la agencia de participar en operaciones con implicancias militares.

La parte humanitaria del CBI reci-

bió un gran empuje cuando el Informe del grupo de Trabajo del DOD sobre la Asistencia Humanitaria, fue aprobado por Gaspar Weinberger en junio de 1984. El grupo de Trabajo estableció cinco categorías posibles, donde el Pentágono podría aumentar su involucramiento en asistencia humanitaria: acción cívica, transporte, asistencia internacional en desastres, el traspaso de propiedades excesivas y programas médicos.

Debido a que no es una función regular del Pentágono, la asistencia humanitaria no está contemplada en las leyes que regulan el financiamiento y el funcionamiento del DOD. Sin embargo, a muchos en el Pentágono les gustaría que la asistencia humanitaria se convierta en una función autorizada de la estrategia norteamericana de defensa, sea introduciendo cambios legales, o bien desarrollando métodos para operar dentro del marco legislativo vigente. El informe del Grupo de Trabajo hizo notar que, "tanto dentro como fuera del DOD", está creciendo la presión para que el Pentágono pueda tomar mayor iniciativa en el área de la ayuda humanitaria. "Grupos de derecha", señaló, "han estado presionando al Pentágono para que aumente su rol no-militar en la lucha contra el comunismo".

Implementando las recomendaciones

En los dos años transcurridos desde que se dio a conocer el informe del Grupo de Trabajo, se ha registrado una serie de nuevas iniciativas del DOD en el campo de la asistencia humanitaria y de la acción cívica.

—Según las cláusulas de la Enmienda Denton, al DOD le está permitido ahora transportar gratuitamente, tomando en cuenta el espacio disponible, suministros donados por organizaciones privadas de ayuda.

—Creación de una oficina de Asistencia Humanitaria dentro del Pentágono.

—Según las cláusulas de la Enmienda Stevens de 1968, al DOD le está permitido usar sus fondos de operaciones y mantenimiento en proyectos considerados fortuitos dentro de las acciones autorizadas.

—Fondos de Apoyo Económico (ESF) y otros fondos de la AID están siendo utilizados en El Salvador y Guatemala para financiar proyectos de acción cívica, administrados por los ejércitos locales y coordinados por asesores militares norteamericanos.

Reclutando a los Filántropos de la Nueva Derecha

En 1984, el Pentágono empezó a transportar suministros recolectados por grupos de derecha tales como la Reunión Conservadora y el Consejo Nacional de Defensa a Centroamérica. La Figura congresista clave en arreglar este transporte gratis fue el senador Jeremiah Denton (R-Alabama). Denton, quien fue calificado como el senador más conservador por el National Journal en 1983, desde entonces ha logrado la aprobación del Congreso de dos proyectos de ley de "asistencia humanitaria". En 1985, Andy Messing, un proponente del CBI de mucha influencia, que encabeza el Consejo de Defensa Nacional, persuadió a Denton de introducir una inmienda al proyecto de ley del DOD para permitir al Pentágono transportar suministros humanitarios a Centroamérica (...)

La Oficina de Asistencia Humanitaria transporta estos bienes a Centroamérica, en donde por lo general están destinados a la frontera hondureña-nicaragüense o para los programas de acción cívica del gobierno salvadoreño o guatemalteco. Denton también fue la pieza clave para obtener la aprobación legislativa en 1985, que otorgó \$7.5 millones de dólares en "asistencia humanitaria" para los refugiados indígenas nicaragüenses que viven en Honduras a lo largo de la frontera nicaragüense y que están estrechamente ligados a los contras.

En 1984, ante la prohibición del Congreso respecto al apoyo de la CIA a los contras, el presidente Reagan aprobó un plan secreto para reemplazar los fondos de la CIA con la asistencia privada de ciudadanos norteamericanos y de aliados estadounidenses, como Israel. La Casa Blanca designó al Gral. Mayor retirado John Singlaub como el prin-

cipal contacto para la recaudación de fondos y coordinador para esta campaña que ha sido supervisada por el Consejo de Seguridad Nacional.

Acción Cívica: Nuevamente de Moda

Los programas de acción cívica tienen por objeto mejorar la imagen de las fuerzas armadas y ampliar su influencia. Si en alguna medida tales programas pueden ocasionar algún mejoramiento en las condiciones de vida rurales, nunca confrontan los principales problemas socioeconómicos de la sociedad.

Los programas militares de acción cívica están reapareciendo con fuerza en Centroamérica. Forman parte de la respuesta contrainsurgente a la creciente resistencia popular en la región. El nuevo interés militar de los EE.UU. por la acción cívica también es



resultado de la creciente aceptación de la doctrina del CBI, que propone medidas económicas y psicológicas, además de las militares, para combatir la insurgencia.

El SOUTHCOM es un ardiente partidario del incremento de acciones cívico-militares. Ha incluido operaciones de este tipo como parte de los ejercicios militares norteamericanos en Centroamérica, y ha instado a las fuerzas armadas de la región a ampliar sus propios programas. Las actuales operaciones de acción cívica encajan en una de estas tres grandes categorías: 1) programas llevados a cabo específicamente por personal militar estadounidense, 2) programas compartidos implementados en el marco de ejercicios conjuntos con otras naciones, y 3) programas manejados por el gobierno y ejército locales.

El Capitán Robert S. Perry de la División de Asuntos Políticos-militares del SOUTHCOM dijo que el nuevo énfasis en la acción cívica era "una de las partes integrales del programa de desarrollo y seguridad del Sur estadounidense". Es un "componente eficaz e importante en cualquier esfuerzo correctivo o de disuasión, tal como se ha demostrado en Guatemala, en sus recientes éxitos contra una insurgencia activa".

Acción Cívica en El Salvador

El inicial entusiasmo de los oficiales del ejército salvadoreño en los años 60 declinó para los años 70. El ejército encontró que tales programas no mejoraban de manera significativa su imagen pública, ni reducían la disidencia. Desde 1980, por presión de los EE.UU., puso en marcha un programa sofisticado de pacificación que incorpora acciones cívicas y operaciones psicológicas. Casi todas estas operaciones, que son en su mayoría un trabajo combinado del ejército y el gobierno civil, están financiadas por el gobierno norteamericano a través de la AID, del DOD o instituciones privadas. El oficial Ed Morrel del MilGroup estadounidense expresó su entusiasmo por el progreso de los programas de acción cívica señalando que, en la última

mitad de 1985, "ellos han tenido sesenta acciones cívicas, alcanzando un promedio de tres mil quinientas personas cada una". Morrel añadió que el MilGroup ayuda a planificar los programas, hace arreglos para materiales y brinda entrenamiento operativo al ejército salvadoreño. "Esperamos tener tres acciones cívicas por semana de ahora en adelante", dijo.

Cuando el ejército salvadoreño llega a una aldea está preparado para dar un "show". Aviones lanzan volantes de propaganda sobre el área, mientras el comandante da un discurso sobre los males del comunismo y las virtudes del régimen actual. Alimentos, juguetes, medicina y ropa son repartidos entre los habitantes de la aldea reunidos en la plaza. Algunos batallones tienen sus propios soldados-payasos que brindan diversión. Muchas veces se transforman en un asunto multifacético, cuando el equipo de Psyops del ejército presenta una película anticomunista de factura norteamericana, los barberos del ejército cortan el pelo, los médicos vacunan, los dentistas extraen muelas.

"Hemos estado promocionando la parte psicológica de la guerra durante mucho tiempo", dijo el Coronel David Steel, Jefe del MilGroup en El Salvador, añadiendo que se encontraba contento con el creciente interés del ejército salvadoreño en los aspectos no militares de la contrainsurgencia. Señaló además que el ejército está involucrado en la acción cívica para mejorar su imagen pública y porque los ministerios gubernamentales muchas veces no pueden llegar a áreas remotas.

Los EE.UU. han alentado al ejército para que compartan sus programas de acción cívica con las instituciones del gobierno. Como el ejército no puede recibir suministros directamente de la AID, al trabajar conjuntamente con los ministerios civiles que son financiados por la AID, puede aprovechar los alimentos, materiales de construcción, programas de empleo, servicios médicos que son suministrados por la AID. El ejército salvadoreño también ha recibido recursos para la acción cívica del Pentágono, vía los fondos de asis-

tencia de seguridad. (...)

La mayoría de la ropa y juguetes repartidos por el ejército es proporcionada por grupos privados estadounidenses. Entre estos se destacan los Caballeros de Malta y Ayuda Internacional, aunque el principal donador... es la Fundación Familia de América...

Acción Cívica en Honduras

La acción cívica en Honduras se realiza tanto en el marco de los ejercicios militares como parte de las operaciones de la Base Aérea de Palmerola, la principal instalación norteamericana en ese país. El Capitán Brian Mahoney, Jefe de la acción cívica de la Base Aérea de Palmerola, situada en las afueras de Comayagua, dice: "Nuestro programas son para acrecentar la seguridad estadounidense. No hay ninguna meta humanitaria. Sencillamente queremos que las personas tengan una mejor opinión nuestra".

Los proyectos de acción cívica impulsados desde Palmerola, se dan bajo la forma de proyectos de relaciones públicas. "Nosotros atendemos a la ciudad de Comayagua, porque es donde van nuestras tropas en su tiempo libre", dice Mahoney. En el Día de Acción de Gracias y el 4 de Julio (fiesta nacional de EE.UU.), la base patrocina festividades para los niños del sector. Hay planes en marcha para que los soldados reconstruyan la iglesia de la ciudad y el parque central, y cada una de las unidades de la base ha sido asignada para dar asistencia a escuelas locales y centros comunales. Uno de los mayores

problemas que Mahoney enfrenta es la vida nocturna en la zona roja que ha surgido en esta pequeña ciudad, como resultado de la presencia de las tropas norteamericanas. La prostitución es desenfrenada y también lo es la sífilis. Los médicos de Medretes en la base examinan regularmente a las prostitutas y a los soldados de Palmerola, para evitar más casos de enfermedad.

Conclusión

La aceptación creciente de la doctrina del CBI es la señal más espantosa de nuestros tiempos. Compromete a la nación a un futuro de pequeñas guerras sucias a nombre de la libertad. La estrategia del CBI tal como es practicada por la administración Reagan (y ampliamente aceptada por ambos partidos políticos) es un nuevo tipo de política arriesgada que desata una ofensiva global de antiterrorismo, contrainsurgencia y contrarrevolución, en el marco sombrío de la época nuclear.

El sentimiento anti-intervencionista que surgió durante la Guerra de Vietnam necesita despertarse nuevamente para desafiar los preceptos del conflicto de baja intensidad. La doctrina del CBI trata de evitar la desaprobación pública. Minimizando el número de bajas norteamericanas. Sin embargo, el intervencionismo a través de operaciones psicológicas, acciones encubiertas, asistencia humanitaria, entrenamiento de contrainsurgencia y fuerzas sustitutas, también tiene que ser rechazado por el pueblo norteamericano.

Alianzas de clases y fuerzas sociales.

“De que frente hablamos”**

* Manuel Gaggero

I. INTRODUCCION

Los términos Frente, Unidad Nacional y Unidad Popular son utilizados, un tanto confusamente, por ciertos sectores populares. En algunas propuestas no se definen con claridad, a nuestro juicio, los objetivos de la alianza a construir y los enemigos que se deben enfrentar.

Así, desde algunos sectores de la dirigencia peronista se plantea la construcción de un Frente nacional cuyos componentes serían, en un burdo remedo de Frente Justicialista de Liberación de 1973, el movimiento de Integración y Desarrollo que lideran Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, cuyas posiciones pronorteamericanas son bien conocidas y algunos dirigentes de la democracia cristiana. Esta propuesta centra sus ataques en el Gobierno y no oculta su clara complicidad con los sectores golpistas de la cúpula militar. Bajo ningún concepto aporta a construir un instrumento útil a nuestro pueblo para alcanzar su Liberación.

Nosotros pensamos que tampoco es correcto reducir la cuestión del Frente a una simple

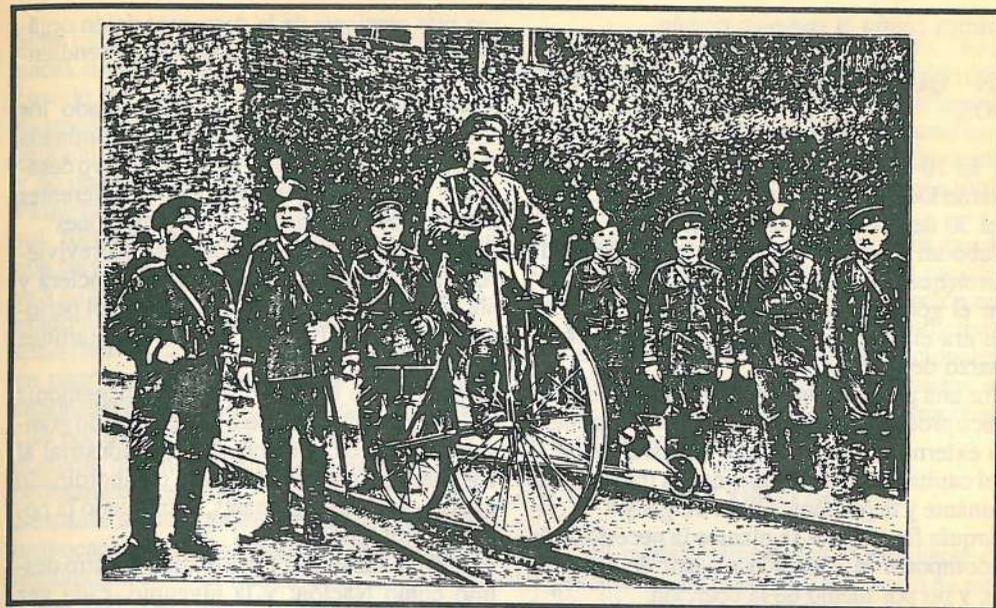
alianza electoral. No significa esto que desconozcamos los mecanismos de legitimación de una democracia constitucional, pero es evidente que un FRENTE, con mayúsculas, no puede ser una simple suma de votos y de “fichas”; tampoco una consigna que se enarbola para aumentar la clientela electoral. Por el contrario hoy, está más claro que nunca, que ninguna fuerza política por sí sola puede llevar adelante la difícil empresa de romper con la dependencia.

Ya no se puede argumentar, con seriedad, que en el peronismo están los componentes del Movimiento de Liberación, cuando se ve a sus “dirigentes oficiales” cada vez más comprometidos con el bloque histórico que encarna la dependencia en la Argentina. Decir esto no significa, de ningún modo, negar el papel decisivo que van a jugar las masas obreras peronistas y sus dirigentes combativos en el proceso de Liberación.

Asimismo no es correcto poner en la misma bolsa al Presidente Alfonsín y, a quienes, como Jorge Videla ó Alfredo Martínez de Hoz implementaron y ejecutaron, desde el Estado,

* Abogado - Periodista integrante del Centro de Investigación y Estudio de la Realidad Argentina. (CIERA)

** Trabajo presentado en el Encuentro de Intelectuales por la Democracia — Diciembre de 1986



un modelo terrorista dirigido a asegurar la dependencia y a conformar un “nueva oligarquía” íntimamente ligada a los monopolios imperialistas.

Por el contrario, quienes aspiramos a vivir en un país libre y a suprimir injusticias y desigualdades pensamos que, dada la agresividad imperial, es importante lograr que grandes sectores del radicalismo compartan el proyecto de construir un Frente de Liberación Nacional cuyo sustento sean las masas populares.

Si descartamos la idea de reducir el FRENTE a una alianza electoral; si nos negamos a ser instrumentados por la derecha integrando “acuerdos” que centran sus ataques en el gobierno alfonsinista y olvidan al imperialismo; si vemos que la lucha por la Liberación Nacional es una empresa de tal magnitud que no puede ser encarada, con perspectivas, por un sólo partido, cabe hacerse la pregunta que motiva este trabajo ¿De qué FRENTE hablamos? Cúales deben ser los componentes de una alianza social y política que se plantee liberar la Patria.

Sin perjuicio de profundizar esta temática a

lo largo de este análisis, digamos, a manera de introducción, que se trata de nuclear, tras un programa de Liberación, a todas las corrientes democráticas, progresistas y antimperialistas de nuestra sociedad, sin que las mismas deban abandonar sus identidades políticas; al contrario, que las reafirmen encontrando la síntesis en una práctica común.

Este programa debe contener objetivos a lo largo, mediano y corto plazo; la lucha independentista es un camino difícil en el que debemos sortear muchos obstáculos.

Algunas ideas dirigidas a descubrir en qué país estamos parados; a dar algunos elementos que permitan analizar el modelo que nos proponen los sectores dominantes; las bases de una propuesta alternativa del campo popular y, el proyecto frentista en la transición democrática, conforman la temática que abordaremos en este trabajo.

La Unidad verdadera y en serio es quizás el objetivo más difícil, pero valen la pena todos los esfuerzos que hagamos para lograrla. Tengamos claro que si los que nos dominan nos dividen, ganan, Demostrémosle, que en las horas difíciles, los argentinos sabemos

unirnos contra el enemigo común.

EN QUE PAIS ESTAMOS PARADOS

El 10 de diciembre de 1983 asumió el Gobierno Democrático surgido de las elecciones del 30 de octubre de ese mismo año. Hubo un sinnúmero de razones que determinaron que la cúpula militar tuviera que traspasar el gobierno a los civiles; pese a que este no era el objetivo que se planteara el 24 de marzo de 1976.

Por una parte, el deterioro del modelo económico producido por un marcado endeudamiento externo y, agravado por la crisis mundial del capitalismo, determina que la fracción dominante y hegemónica de la burguesía -la oligarquía financiera- se plantee la necesidad de recomponer la situación a partir del consenso, y no por medio de la coerción.

Por otro lado, la fallida "Operación Malvinas" generó un mayor rechazo de la población hacia la Dictadura Militar, que además estaba inhabilitada para recurrir a los mecanismos represivos que utilizó los primeros años.

Si a todo esto sumamos la creciente oposición popular y democrática; el aislamiento a nivel internacional y las fracturas existentes en el interior de las Fuerzas Armadas, comprenderemos la crisis del Terrorismo de Estado, y su reemplazo por un régimen enmarcado en las normas constitucionales, elegido por la voluntad popular.

Sin embargo, las profundas transformaciones producidas por el diseño de las Fuerzas Armadas, determinan que debamos analizar en qué marco social pretendemos plantear una opción popular.

Es indudable que estamos inmersos en una profunda crisis orgánica de nuestra sociedad que se traduce, al mismo tiempo, en una crisis de identidad nacional, de representatividad política y social; y en una incapacidad de imaginar y elaborar propuestas alternativas.

Los detonantes de esta situación crítica han sido, por una parte, la reciente experiencia dictatorial; y, por otro lado, un reflejo cada

vez más creciente de la descomposición orgánica del modelo de país capitalista dependiente.

Muy lejos en la historia han quedado los sueños de algunos sectores de la denominada "burguesía nacional" de lograr un relativo desarrollo autónomo generado en los diferentes períodos de "sustitución de importaciones". Franjas de esta fracción burguesa sobrevivieron apostando a la especulación financiera y añoran los años de la "patria dulce" del período de la "taiwanización" del plan de Martínez de Hoz.

El proceso de construcción de la hegemonía de la oligarquía financiera ha desplazado grandes sectores de la mano de obra industrial al cuentapropismo; ha destruido o subordinado a las economías regionales, y ampliado la población marginal.

En este cuadro está comprendido nuestro destino como Nación; y la juventud, cada vez en mayor número, sólo concibe el futuro abandonando el país.

QUIENES NOS REPRESENTAN

En las últimas décadas se ha ido profundizando la crisis de representatividad de la sociedad argentina. Los proyectos de autonomía nacional que, con las limitaciones de la época, encaran el irigoyenismo y el peronismo fueron sufriendo sucesivos desgastes como continentes hegemónicos del campo popular. Este proceso es acompañado por el ocaso de sus grandes caudillos.

Es que dichas propuestas, al margen de la valoración crítica que tengamos de ellas, de alguna forma fueron convocantes. Concitaron la adhesión de importantes sectores de nuestra sociedad que aspiraban a revertir el destino dependiente a que nos había condenado la franja de clases dominantes.

Sin embargo dichas opciones no están a tono con las exigencias y desafíos que plantea una circunstancia histórica diferente como la que atravesamos.

Por otro lado, sus dirigencias actuales, salvo excepciones que tratan de rescatar los contenidos populares de estas corrientes, no han sa-

bido interpretar el momento, ni han sido capaces de reactualizar sus discursos. Incluso, cuando lo han hecho, los contenidos de los mismos se han dirigido a explicitar una concepción de "modernización" de la dependencia y no de ruptura de la misma.

Paralelamente, la llamada izquierda -tanto en sus formaciones tradicionales como en las que surgieron en las dos últimas décadas- pese a su generoso sacrificio humano, no ha logrado estructurar una alternativa que concite entusiasmo y adhesión popular. Una lectura, un tanto incorrecta del país, la sumió en posiciones teñidas de ideologismo; y sus urgencias por transformar la sociedad la llevaron a posturas distantes del camino que el pueblo penosamente recorría.

Se suma a este cuadro la desestructuración provocada por la Dictadura Militar genocida implantada el 24 de marzo de 1976. El Terrorismo de Estado afectó a los valores y a las ideas -fuerza que conformaban el ser nacional.

La masacre de millares de cuadros políticos, sindicales, estudiantiles y organizaciones sociales; el profundo desvastamiento del aparato productivo con su secuela en la estructuración de clases; la complicidad de vastos estamentos directrices del país con el régimen militar, y el naufragio de las propuestas organizativas militantes que mostraron su debilidad estructural, generaron una crisis en la representatividad social y política, que intenta ser mediatizada por los partidos políticos pero que, de ninguna manera, es resuelta por los mismos.

Efectivamente, los partidos políticos no han logrado revertir este cuadro crítico en la medida en que no han sido capaces de generar canales de participación, y de que sólo han recreado el esquema de la democracia formal, de por sí incapaz de superar esta contingencia.

El dilema de la representatividad e irrepresentatividad se traduce en una búsqueda permanente, en algunos casos -la mayoría- ó en el desarrollo de representaciones sociales que no logran traducirse en una expresión política compatible con aquella.

El refugiarse en lo conocido, que son los mo-

vimientos sectoriales, reivindicativos, hace que el campo popular transite por diferentes andariveles sin encontrar una síntesis que le permita elaborar una opción válida para la sociedad en su conjunto y que, al mismo tiempo, rompa con la dependencia y avance hacia un proyecto de país posible.

La fragmentación de la sociedad civil que se expresa en múltiples organizaciones sociales y reivindicativas, carentes de articulación entre sí y que, pese a la unidad de objetivos frente a los grandes problemas nacionales, no poseen un marco político aglutinador, es una de los síntomas más serios de una crisis que necesitamos revertir.

QUE NACION COMPONEMOS

El modelo oligárquico -dependiente de la generación del ochenta y su intento de modernización está en total descomposición. Por otra parte, las tentativas de sectores no monopolísticos de la burguesía industrial de elaborar una propuesta alternativa entran en colisión con la transnacionalización de la economía, la interdependencia, y la incapacidad de sus impulsores de presentar un proyecto de país alternativo y viable.

En estas condiciones el campo nacional, en tanto confluencia de intereses sectoriales diferentes, con un proyecto en común, padece de una profunda desarticulación.

El argentino "blanco y casi europeo" que imaginaban e imaginan los sectores dominantes se contrasta con una creciente miseria; un incremento del sector no productivo, y una cada vez mayor distancia tecnológica de los países centrales.

Esta no asunción de nuestro carácter de "latinoamericanos en desgracia" nos impide redefinir nuestro ser nacional, que es algo más que la visión folklórica del mate, el fútbol y Gardel.

Por otra parte, la "taiwanización" que experimentó el equipo de economistas de la dictadura profundizó la atracción "por lo que se produce afuera" y el rechazo a nuestra producción interna. Este experimento nos mostró nuestro subdesarrollo pero, al mismo tiempo,



Guardia provincial de Buenos Aires

po, alentó las ideas más negativas al suponer que aquel se superaba importando equipos electrónicos japoneses.

Es común hablar de la "indolencia criolla"; a nuestros trabajadores "no les gusta el trabajo", consecuente con esta manera de pensar es la profunda admiración que sienten estos sectores por la superioridad imperial. Todo esto combinado, con un total desconocimiento del mundo y sus diferentes experiencias sociales y políticas.

En estas condiciones es complejo, pero necesario, redefinir el campo de la Nación y plantearse como objetivo, el de su reconstrucción.

En otro orden de cosas, y más aún en el plano jurídico-institucional, la disgregación es más evidente.

Los constituyentes del '53, al margen de cualquier valoración crítica que nos merezca su enfoque, trataron de elaborar un marco jurídi-

co para una Nación Federal, con un Poder Ejecutivo acotado por la "división de poderes".

Se trataba de una Constitución para un país dependiente, agroexportador, que de alguna forma diera un perfil al Estado Oligárquico.

El proceso de desintegración también ha afectado, como no podía ser otra forma, dicho encuadre normativo y, así hoy, no sin sorpresa, vemos que las provincias, como una consecuencia lógica de la defensa de sus economías regionales desvastadas, han reasumido, en los hechos, el ejercicio de las relaciones exteriores; al mismo tiempo que emiten bonos, que colocan en la bolsa para su cotización.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo, que supuestamente debería ejercer su actividad con el "control" de los otros dos poderes -Legislativo y Judicial- y que, dada la situación de crisis, debería consultar cada medida de fondo que adopte a los gobiernos provinciales, no sólo que renegocia la deuda externa, contrayendo nuevas obligaciones; sino que, al mismo tiempo, elabora un Plan Económico -El Austral- sin consulta alguna.

En síntesis, en lo institucional, también se tiende a disgregar al campo nacional. De ninguna forma este diagnóstico está dirigido a criticar las medidas defensistas de los gobiernos provinciales. Se trata de presentar los hechos, para que los mismos, enriquecidos por el debate, puedan ser valorados en su exacta dimensión.

Finalmente, y como un elemento que profundiza la dispersión de la Nación, están las vicencias de los últimos 30 años de historia. La falta de estabilidad constitucional, la permanente presencia en el escenario nacional del golpe militar como posibilidad siempre presente; la imposibilidad, por falta de práctica democrática, de resolver las diferencias, muchas veces secundarias, entre diferentes expresiones sociales y políticas, son algunas de las razones que contribuyen a la desarticulación nacional, al "canibalismo" político, a la falta de confianza en el futuro y a la tendencia a no planificar el porvenir.

QUIENES NOS MANDAN

Sin perjuicio de tener presente al imperialismo norteamericano, dado el carácter de país dependiente y periférico, es preciso definir, con claridad, cuál es el nuevo sujeto hegemónico; es decir que fracción de las clases sociales ejerce el dominio —valga la redundancia— y a la vez intermedia en la relación con el imperio.

Veamos. La dictadura militar o el Estado Terrorista, que fue la forma que adoptó el aparato estatal a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, tenía como meta central la consolidación de un nuevo poder económico basado en una franja de capital nacional —las grandes corporaciones económicas— y otra del capital extranjero —las transnacionales o empresas diversificadas.

En este modelo, diseñado por Alfredo Martínez de Hoz, el Estado debía "auxiliar" a las grandes corporaciones. Se trataba de imitar a Japón, pero en el subdesarrollo. Es por eso que cuando se produce el agotamiento de la política de apertura externa con la subdevaluación del dólar, se empieza a producir una masiva fuga de capitales al exterior.

Las corporaciones y las empresas transnacionales van construyendo su hegemonía mediante la concentración en sus manos de los resortes financieros sobredimensionados por la especulación. Además, se dictan una serie de disposiciones jurídicas que favorecen este proceso de concentración económica.

Esta etapa de consolidación del "nuevo poder" genera una serie de problemas al conjunto de la Nación de una magnitud inédita.

El peso de la deuda externa, la marginación, la desocupación creciente, el nivel de los ingresos de los asalariados, la estructura del Estado, el grado de destrucción del aparato productivo, el rol del sistema financiero, son algunas de las consecuencias de este diseño de país que nos ofrecen los sectores dominantes.

Esta nueva fracción hegemónica, descripta concienzudamente por Aspiazú, Basualdo y Khavise en su trabajo "El nuevo Poder Económico en la Argentina de los Años '80" se

apoya en una serie de "complicidades" que abarcan, incluso, a dirigentes de los llamados "partidos populares".

Definir el enemigo a enfrentar permitirá, a su vez, tener perfectamente claro quienes pueden participar en un Frente que se proponga la Emancipación Nacional.

II. FRENTE: PARA QUE Y CON QUIEN

Hemos tratado de hacer, en el capítulo anterior, un diagnóstico de la situación nacional, por supuesto que sujeto a rectificaciones, ya que es un aporte modesto a un debate que está abierto en el conjunto del campo popular.

En esta parte trataremos de reflexionar sobre el carácter del Frente; sus componentes y por qué pensamos que constituye un instrumento indispensable para gestar un proyecto alternativo de país.

Uno de los temas que está en discusión es si se debe hablar de un Frente de Liberación Nacional, ó por el contrario hay que generar, primero, una alianza de todas las fuerzas de izquierda para garantizar de esa forma la hegemonía del proletariado y desde allí, llamar a otras capas sociales a sumarse al emprendimiento.

A fin de aportar en esta confrontación de ideas que, lógicamente, no debe antagonizarse, creemos necesario hacer una breve referencia al surgimiento del capitalismo en la Argentina y a su directo enlazamiento con la dominación imperialista.

Es evidente, y una mirada retrospectiva nos permitirá confirmarlo, que las relaciones capitalistas de producción surgen y se desarrollan en nuestro continente, y con sus matices en nuestro país, como un producto de la incorporación de América Latina al mercado internacional.

Es por eso que, como acertadamente lo señala Carlos Vilas, "siendo un modo de producción, se desarrolló en la esfera de la circulación más que en el de la producción misma". Esto explica que, en todo un período, la frac-

ción dominante fuera la burguesía comercial ligada al sector agrario, ya que la actividad principal era de carácter agroexportador.

Por otro lado, estos sectores dominantes estaban directamente subordinados a los capitales extranjeros que monopolizaban la actividad de exportación de productos primarios.

De esta forma la penetración imperialista fue la que generó la base material que sirvió de sustento a ciertos grupos locales que se fueron constituyendo en clases dominantes.

De esta forma la franja dominante local, no sólo en sus comienzos, sino ahora en que se ha constituido un nuevo sujeto hegemónico, es la franja burguesa que logra asegurarse el papel de asociado privilegiado de la dominación externa en su propia sociedad.

La Nación, en consecuencia, es la expresión institucional de la hegemonía imperial en el marco geográfico en el que la misma se asienta.

Por supuesto, que todo esto no es mecánico. Estuvo signado por múltiples contradicciones, que permitieron un relativo desarrollo autónomo de una franja industrial de la burguesía. Sin embargo, rápidamente, los mecanismos de la dominación imperialista recompusieron este "desorden" apelando a golpes militares, ó al Terrorismo de Estado.

"Producto de esta alianza de intereses dominantes, el Estado Nacional nació y se desarrolló con un vicio original, fue soberano hacia adentro, esto es, como capacidad de coacción de las clases populares en primer lugar, y también, respecto de las amenazas de reproducción de grupos particulares como aliados privilegiados de la dominación externa. No fue soberano hacia afuera, es decir como expresión y garantía de la independencia y la autonomía de la comunidad política nacional".

Frente a esta No Nación de la burguesía, que hoy está hegemónizada por el sector financiero, las luchas populares para emanciparse de la dominación imperial integran, al mismo tiempo, el anhelo de profundas transformaciones sociales con el objetivo de construir una

Patria para Todos.

En consecuencia la contradicción nacional es objetivamente, pero las masas populares, una manifestación de la confrontación por una sociedad más fraterna y humana.

La dominación del imperialismo no es algo ajeno o distinto a la explotación que sufren en la sociedad los sectores subordinados, sino que está entrelazada.

En América Latina el imperialismo no es sólo "la fase superior del capitalismo", sino que es, al mismo tiempo, la base material de la que surgen las formas de dominación hacia el interior de las sociedades nacionales.

En conclusión, cualquier proyecto que pretenda generar una opción alternativa para el campo popular tiene que plantearse la emancipación nacional, sería más apropiado decir la construcción de la Nación. Este objetivo lleva implícitas las necesarias transformaciones sociales, en un marco democrático y de autonomía plena.

Pensamos que es más apropiado hablar de la necesidad de un Frente de Liberación Nacional, cuyo sujeto hegemónico sea el pueblo. Lo que de alguna forma modifica algunas consideraciones, a nuestro juicio demasiado dogmáticas, que sustentan algunos sectores que adhieren al marxismo clásico.

El concepto de pueblo abarca una multiplicidad multiforme y dinámica de clases, fracciones y capas subordinadas, e incluso, algunas absolutamente marginadas.

De hecho este concepto es más bien político en cuanto tiende a identificar al actor del enfrentamiento contra la opresión.

Por supuesto que esto no significa negar el rol histórico estratégico que le corresponde a la clase obrera; pero sí supone impedir que una concepción aislacionista de la misma, nos lleve a nuevas frustraciones.

En esta reflexión que hacemos tenemos presente que la lucha por la Liberación Nacional es una empresa muy difícil y compleja. Se trata de construir la Nación, democratizar la sociedad en un sentido amplio, y llevar a ca-

bo transformaciones sociales profundas. Todo esto es posible intentarlo, con un pueblo movilizado y protagonizando su propia historia.

En la alianza que concebimos se integran diferentes fracciones y clases, con intereses muchas veces contradictorios, que tienen en común su situación de subordinación y su deseo de terminar con la dependencia. Resuelven sus diferencias democráticamente, confrontando ideas, despojándose del "canibalismo" que caracteriza a algunos sectores de la izquierda argentina y de las tendencias sectarias y esquemáticas.

La lucha que debe protagonizar este Frente convoca a un amplio espectro de fuerzas sociales; articula un complejo tejido de grupos políticos que pugnan entre sí por la conducción del proceso; discuten la profundidad del mismo y sus alcances.

Estos enfrentamientos no nos deben preocupar en la medida que estén signados por el carácter democrático de la confrontación. Cada uno de estos sectores debe tener siempre presente al enemigo a enfrentar, para no transformar una contradicción secundaria en principal.

Concebimos al Frente como una confluencia de peronistas, radicales, cristianos y marxistas, trabajadores, empresarios, profesionales, pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo, cuentrapopistas, etc. Lo intuimos, en esta etapa, como una convergencia sectorial y política que diseña una estrategia para defender y profundizar la democracia y al mismo tiempo caminar hacia una Patria Liberada.

Este instrumento se construye en una práctica común, sintetiza experiencias, recupera la memoria histórica y no se agota en una práctica comicial.

EL TEMA DE LAS "VANGUARDIAS"

En algunos sectores, que nos merecen todo

el respeto por el sacrificio cotidiano de su militancia y de su dirigencia, se plantea la necesidad, como decíamos antes, de que previo a construir el Frente Amplio, se articule una alianza de los "revolucionarios".

Nosotros diferimos con esta postura, ya que nos parece totalmente incorrecto partir de una autosumisión de "revolucionarios". ¿Quién otorga este carácter? Cabría preguntarse.

Acaso la adhesión a una determinada postura ideológica? Una vida consecuente? Una práctica junto al pueblo? En definitiva, qué?

Todos estos elementos podrían servir para caracterizar a un luchador popular; más aun, con el grado de desestructuración que observamos en nuestra sociedad, la honestidad adquiere un valor "revolucionario".

Es por eso que nos parece una concepción un tanto elitista definir, de antemano, una presunta "vanguardia". Nos resulta más coherente pensar que será en la lucha cotidiana, en el esfuerzo que hagamos para superar la soberbia y el sectarismo, en el aprendizaje junto al pueblo, como iremos forjando el amplio Frente que ambiciosamente nos planteamos.

La ruptura de la dependencia y las profundas transformaciones sociales que debemos proponernos, en el marco de la democracia participativa y plural, no son objetivos fáciles de alcanzar —lo volvemos a repetir—. Se trata de resolver un conflicto histórico y para su resolución debemos enfrentar enemigos muy poderosos que constituyen el bloque dominante y su apoyo externo: el imperialismo.

En esta construcción no tratemos de poner "el carro delante de los caballos".

Cerremos filas, imaginemos una nueva manera de hacer política y así recuperaremos la utopía por la que dieron su vida muchos miles de compatriotas.

CONCLUSION

Este aporte, desde nuestra pequeña trinchera —el Centro de Investigación y Estudio de

la Realidad Argentina (CIERA)— sólo está inspirado en el deseo de contribuir, de la mejor manera posible, a hacer realidad este emprendimiento: UNA PATRIA LIBRE, UNA

SOCIEDAD FRATERNAL, HUMANA, DEMOCRÁTICA Y PLURALISTA Y UN GRAN FRENTE DE TODO NUESTRO PUEBLO.

BIBLIOGRAFIA

- VILAS, Carlos M. "La Nación como atributo del Pueblo" —Revista "Casa de las Américas" —julio-agosto 1985.
- NOMEÑO, Néstor; Ernesto Villanueva y Manuel Gaggero —La Deuda Externa y el Campo Nacional y Popular— Cuadernos del CIERA — octubre de 1985.
- DUHALDE, Eduardo —El Estado Terrorista Argentino— Argos Vergara, octubre de 1983.
- GAGGERO, Manuel "Los Movimientos de Liberación en la Transición Democrática" — Revista Confrontación: N°1.

¿Qué es el conflicto de baja intensidad?*

*Sara Miles

La verdadera guerra está ocurriendo en diversos lugares del Tercer Mundo. Es una guerra no convencional, no declarada y probablemente permanente. Las "pequeñas guerras sucias", tales como se desarrollan en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas, Angola o Irlanda del Norte están entre sus manifestaciones corrientes. Se trata de un tipo de guerra diferente —llamado "conflicto de baja intensidad" por los estrategas militares norteamericanos— y los Estados Unidos están totalmente decididos a ganarla.

Para los estrategas norteamericanos, la actual guerra en Centroamérica se ha convertido en el laboratorio más importante para poner a prueba los modelos más avanzados de conflictos de baja intensidad. Tal experimentación no es, ciertamente, de "baja" intensidad desde el punto de vista de las víctimas. En América Central, la guerra ha matado más de 120.000 centroamericanos, ha desarraigado uno de cada cinco habitantes de la región y ha involucrado más de 70.000 soldados de

EE.UU.

Los centroamericanos están enfrentando una guerra que se verán obligados a pelear por un tiempo muy largo. Los pueblos de otros países del Tercer Mundo se enfrentarán crecientemente al mismo tipo de lucha.

El conflicto de baja intensidad no es simplemente una versión "rebajada" de la guerra convencional. "Este tipo de conflicto es descrito con más precisión como guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria", explica el Cnel. John Waghelstein, actual Comandante de las Séptimas Fuerzas Especiales del Ejército Norteamericano. Waghelstein alerta acerca de que el término "baja intensidad" despista, ya que describe el nivel de violencia estrictamente desde un punto de vista militar, cuando de hecho, involucra la "guerra política, económica y psicológica, con lo militar ubicado, en muchos casos, en un distante cuarto lugar". En la que es quizás la definición más honesta dada por un oficial norteamericano, Waghelstein declara: "Es la guerra total a ni-

* Extracto del artículo de Sara Miles que trata acerca de la naturaleza del Conflicto de Baja Intensidad, un nuevo concepto estratégico de EEUU aplicado a los movimientos de liberación en el Tercer Mundo.

** Traducido de AMPO: JAPAN — ASIA QUARTELY REVIEW; vol. 18, N°1 (serie N° 67); Publicado por Pacific — Asia Resource Center; Tokio, Japón, 1986.

vel de base”.

Un estudio estratégico encargado por el Pentágono encuentra que no existe la victoria por la fuerza de las armas en un conflicto de baja intensidad. Sugiere que en un contexto tal, la victoria puede ser medida mejor por “evitar ciertos resultados, o por cambios de actitud en un grupo señalado como blanco”.

La doctrina del conflicto de baja intensidad se ha desarrollado como respuesta de los Estados Unidos a los crecientes “problemas” de movimientos populares en el Tercer Mundo —lo que el Secretario de Defensa Caspar Weinberger llama ahora la “amenaza más inmediata a la seguridad del mundo libre en lo que queda del siglo. Como explica John Marsh, Secretario del Ejército norteamericano, “Las raíces de la insurgencia no son militares en su origen, y tampoco será militar su resolución”. Los proponentes llaman a repensar las tácticas tradicionales e implementar la “guerra total” en los frentes económico, social, político y psicológico, en lugar de depender de ejércitos convencionales para tratar con conflictos no convencionales y revolucionarios.

Lecciones de Vietnam:

Después de Vietnam, el “establishment” militar había retornado, en gran medida, a aprestos para la ortodoxia en Europa y para la batalla nuclear. Pero el triunfo de los sandinistas en Nicaragua en 1979 hizo sonar la alarma para los EEUU. Para la derecha anticomunista y para los no reconstruidos halcones de la guerra política, significó un aterrante nuevo desarrollo cerca de casa. Nicaragua, combinada con el resurgimiento de movimientos revolucionarios y nacionalistas en otros lugares del Tercer Mundo, significó que la estrategia contrarrevolucionaria de Estados Unidos tenía que ser completamente revaluada.

Durante la administración Ford —Carter la derecha estaba en rebelión. La derecha, conducida en gran medida por miembros de la comunidad de inteligencia, lanzó un asalto a escala total contra la estrategia de “detente” con la Unión Soviética y sus “apo-



Blandengues de la frontera

derados” en el Tercer Mundo. En su lugar, llamaron a recomenzar el militarismo de la guerra fría, con una torsión contemporánea. Su perspectiva no era simplemente el militarismo anticuado, y su objeción no era a la “guerra política”, como tal. La derecha presionó más bien, con lo que vieron como una perspectiva insuficientemente anticomunista por parte de los trilateralistas y de la administración Carter, lo que resultaba en una “pérdida” de países del Tercer Mundo. La seguridad nacional de Estados Unidos, argumentaban, requería no sólo un robustecimiento principal de las fuerzas convencionales y nucleares de Estados Unidos, sino también el desarrollo de una nueva capacidad y una estrategia efectiva para luchar contra las fuerzas revolucionarias del tercer Mundo.

Uniendo los fragmentos:

El conflicto de baja intensidad es un concep-

to radical de la guerra en parte porque el problema reclama cambios internos, dentro del sistema mismo: significa integrar la ciencia militar con todos los otros aspectos de la política gubernamental, implicando una nueva forma de coordinación entre el Pentágono y el departamento de Estado, la CIA, el Consejo de Seguridad nacional, y otras agencias civiles. Significa desarrollar “terceros” países —incluyendo a Israel, Taiwán y Corea del Sur— como instrumentos confiables para proporcionar tanto material como entrenamiento en el extranjero. Además, el conflicto de baja intensidad, tal como se desarrolló desde Vietnam, extrae los recursos, las convicciones ideológicas y el poder del “sector privado” para ayudar al aparato gubernamental completo.

Pero la idea es también radical porque su enfoque comprensivo refleja un estudio amplio de los diferentes elementos del conflicto —y muy pocos de ellos son estrictamente militares—. Muchos investigadores de los “think-tanks” y universidades intentan analizar e imitar las estructuras político militares de los movimientos revolucionarios. Algunos de los proponentes estudian las tácticas “de repliegue” de la guerra de guerrillas o ahondan en la antropología y psicología social. Otros, como el coronel británico Frank Kiston, hacen hincapié en las experiencias de las potencias coloniales como Inglaterra y Francia, proponiendo sofisticados estados policiales como manera de prevenir las insurgencias. Edward Lansdale, el legendario experto en contrainsurgencia cuyas hazañas en la era Kenedy lo convierten ahora en un héroe para una nueva generación de halcones de baja intensidad, pasa revista a sus experiencias en guerra psicológica y operaciones encubiertas en las Filipinas y el sudeste asiático. Dice Lansdale, “Pienso que nos van a escuchar esta vez”.

La manifestación pública más visible de todo este nuevo interés en conflictos de baja intensidad ha sido la promoción de “fuerzas de operaciones especiales”—un concepto que se construyó sobre la misión de contrainsurgencia de la Fuerzas Especiales

del Ejército de EEUU, el SEALs de la Marina, y las unidades de guerra irregular de otros servicios. Desde 1981, las viejas unidades habían sido revitalizadas y expandidas en por lo menos un tercio; estas “fuerzas de operaciones especiales” suman ahora 14.900 efectivos (32.000 incluyendo las reservas). Igualmente, propuestas en favor de una “infantería ligera” son una manera de involucrar al Pentágono en el respaldo al conflicto de baja intensidad. Mientras tanto, la comunidad de inteligencia ha reemplazado a cientos de expertos en acciones encubiertas (covert actions) perdidos para la CIA durante los años de Carter. La CIA también ha desarrollado lo que es prácticamente un ejército secreto, no convencional de soldados y especialistas en guerra de guerrillas, expandiendo vastamente sus propios activos paramilitares. Estos activos, junto con recursos de terceros países provenientes



Artillería de Río Grande
(1767)

tes de aliados "amistosos", permitió a la CIA ir mucho más allá de la recolección de inteligencia u operaciones tácticas limitadas.

Doctrina Reagan:

Todos estos elementos han sido combinados en un instrumentos para restablecer el control político de Estados Unidos en el Tercer Mundo; A nivel nacional, están apoyados por lo que se llama la Doctrina Reagan, que proclama una "ofensiva global contra el comunismo en los bordes del Imperio Soviético". La administración Reagan, enfrentaba una declinación real en la hegemonía de Estados Unidos sobre las sociedades del tercer Mundo, está determinada a reafirmarse mediante "la proyección del poder de EEUU en el extranjero". Está preparada para quitar el control de la vida diaria en el tercer Mundo a los modelos de desarrollo basados en la decisión pópular existentes o potenciales, e imponer estructuras sustitutivas respaldadas por EEUU.

La Doctrina Reagan intenta fundir en un todo nuevo aproximaciones más viejas y a menudo conflictivas acerca de los movimientos populares del Tercer Mundo. Administraciones anteriores promovieron interpretaciones diferenciadas de las causas de las revoluciones: algunos pensaban que las causas eran internas (desigualdad social y económica, pobreza, etc.) y otros insistían en que eran externas (comunismo mundial o agitación soviético-cubana). Bajo Kennedy se dió

la primera estocada en ocuparse de los dos aspectos: la Alianza para el Progreso se combinó con agresivos movimientos militares anti-comunistas. Pero, a pesar de ello, "soluciones" tales carecían de una trama ideológica consistente, y eran capaces de consolidar el apoyo institucional necesario para llevar adelante en forma efectiva programas de acción múltiple. Siendo así, el tercer Mundo nunca fue convenientemente "estabilizado" por las administraciones anteriores.

La síntesis ofrecida por la administración Reagan comienza, en cierto sentido, donde dejaron los experimentos Kennedy. Reitera que las causas de revolución en el Tercer Mundo son internas y externas: y con la emergente doctrina del conflicto de baja intensidad, propone una metodología que pretende poder hacerse cargo de ambas.

Junto con la gama de elementos tomados de experimentos previos, la Doctrina Reagan hace de la actual teoría de la baja intensidad, algo tanto cualitativa como cuantitativamente diferente de sus predecesores. La innovación de Reagan respaldando abiertamente insurrecciones paramilitares para atacar gobiernos del Tercer Mundo, mientras simultáneamente pagó campañas de contrainsurgencia contra movimientos populares incipientes —otorga una nueva dimensión a la "guerra política". Esto es "democracia revolucionaria": una lucha ideológica diseñada para demostrar que EE.UU. es capaz de exportar la contrarrevolución— y que tiene los medios, la voluntad y el derecho moral y legal de hacerlo.

EL MARXISMO-LENINISMO Y LA CONDICION DE REVOLUCIONARIO A FINES DEL SIGLO XX *

Los éxitos de la lucha liberadora del proletariado son inseparables del progreso de la ciencia social, del desarrollo de la teoría revolucionaria. V.I. Lenin escribía que "no se la puede inventar... ésta brota del conjunto de la experiencia revolucionaria y del pensamiento revolucionario de todos los países del mundo" (O. comp. en ruso, T. 27, p.11).

La actividad de los líderes del proletariado Marx, Engels, Lenin confirmó que la ciencia que ellos crearon constituye un inmenso campo permanentemente abierto para su ulterior perfeccionamiento. Y ello es comprensible ya que estudia la sociedad, un objeto al cual son inherentes como carácter inagotable, una gigantesca complejidad y dinamismo.

El sucesivo desarrollo creador de la doctrina marxista-leninista, como se señala en los documentos del XXVII Congreso del PCUS, es considerado por el Partido como su obligación más importante.

El triunfo de Octubre (1917) dio comienzo al reemplazo del capitalismo por una formación socioeconómica nueva, el comunismo. Luego de la derrota del fascismo, el socialismo

hizo retroceder sustancialmente el capitalismo y se convirtió en un sistema mundial. Se desmembró el sistema colonial del imperialismo.

Pero el capitalismo no abandonó la arena histórica. Los países con elevado desarrollo capitalista no se encuentran por el momento en el umbral de la revolución proletaria. Con frecuencia los críticos del marxismo aluden a este hecho para argumentar sobre su "inconsistencia". En realidad fue precisamente el marxismo el que ya a comienzos del siglo XIX comenzó a esclarecer las causas de "la dificultad" del surgimiento de profundos movimientos revolucionarios precisamente en los estados más desarrollados industrialmente, que se caracterizan por la madurez de las premisas materiales objetivas del socialismo. C. Marx, escribió en 1850 sobre la diferencia entre la situación de Inglaterra y en los países de Europa continental: "En las extremidades del organismo burgués las conmociones violentas deberán producirse naturalmente en las extremidades del organismo burgués, antes que en su corazón, donde las posibilidades de

* Traducción del texto completo del artículo publicado en el diario PRAVDA el 14 de noviembre de 1986 en la sección PROBLEMAS DE TEORIA y firmado por E. Plimak, Candidato en Ciencias Históricas.

comprensión son mayores". F. Engels señaló al mismo tiempo los procesos de aburguesamiento del proletariado inglés. Los vinculaba con la situación monopólica de la Inglaterra capitalista en el mundo de aquel entonces, con el aumento del nacionalismo que se percibía allí (ver C. Marx y F. Engels. Obras, T.7, pág. 100; T.28, pág. 122; T.29, pág.213). V.I. Lenin en 1917 separó "un grupo de países imperialistas más ricos" cuyas clases dirigentes convierten a la mayor parte de su población (comparativamente) en partícipes del reparto de la ganancia imperialista. En sus últimos trabajos señaló que en una serie de estados de occidente se podría llegar a una cierta "paz social" (ver T.34, pág.371; T.45, pág.403).

Al mismo tiempo, los fundadores del marxismo señalaron también un importante avance del proletariado en los marcos de la democracia burguesa. C. Marx en 1864 valoró muy altamente las conquistas del proletariado inglés en su más obstinada lucha de 30 años por la "jornada de diez horas de trabajo". F. Engels, al final de su vida, se volcó al estudio de las "revoluciones desde arriba", de las posibilidades que ellas abrían al proletariado. V.I. Lenin en 1922 llegó hasta señalar una de las pocas posibilidades de evolución pacífica del capitalismo hacia el nuevo régimen, "a lo que nosotros, como comunistas, no tenemos mucha confianza, pero estamos dispuestos a colaborar en la prueba". Vinculaba la posibilidad de realización de ésta hipótesis con la actividad de la socialdemocracia, como también de una democracia del "tipo Keynes" (ver T. 44, pág. 407).

Desde aquel momento ha pasado mucho tiempo. Como se señala en la nueva redacción del Programa del PCUS intentando adaptarse a la cambiante situación, el capitalismo maniobra permanentemente. La lucha con el socialismo y la virulencia de la lucha de clases lo obligaron a cambiar. Y el capitalismo supo poner en acción no pocas reservas. Realizó un salto tecnológico (la última fase es la así llamada revolución de los microprocesadores). Se intensificaron al máximo las tendencias monopolistas estatales, y

de la economía en general, que ahora incluso, sin una regulación estatal "sería imposible la actual producción capitalista". El sistema colonial del imperialismo se desmoronó pero la pérdida la "compensaron" mediante los métodos del neocolonialismo. Aparecieron las corporaciones transnacionales que ensancharon su esfera de influencia a regiones enteras del planeta. En los decenios de la postguerra se puso de manifiesto un importante crecimiento del producto bruto nacional por persona. La socialdemocracia (lo mismo que la "democracia a lo Keynes") contribuyó a la creación y perfeccionamiento del propio mecanismo de evolución de la sociedad burguesa.

Surge la pregunta: ¿cómo hay que evaluar semejantes modificaciones? Ante todo subrayar que ellas no han tocado la propia esencia del capitalismo. El estímulo de la producción en los países de Occidente sigue siendo la obtención de las máximas ganancias. Pero la explotación de la clase obrera ha adquirido formas más refinadas, apunta cada vez más a aumentar el rendimiento de la ener-



Regimiento de la plaza de la Colonia (1767)

gía nerviosa e intelectual del trabajador. Como antes, la economía de la sociedad burguesa es desestabilizada por numerosas crisis. Es elevado el nivel de desocupación. Sigue la polarización de la pobreza y la riqueza. Las conquistas económicas y sociales de los trabajadores, logradas en agudísimos combates de clase, son sumamente precarias. Las socavan el desempleo y la inflación crónica y para peor las nuevas autoridades neoconservadoras llegadas al gobierno en Estados Unidos, la República Federal Alemana, Inglaterra y Francia arrasaron gran parte de los programas sociales. Aumentaron considerablemente las exigencias de la clase obrera, pero éstas en gran medida son canalizadas por las clases dirigentes hacia la "carrera consumista" y van acompañadas de un empobrecimiento espiritual del individuo. Es cada vez más amplia y diversa la expresión de descontento de las masas por el modo de vida bajo el capitalismo. También se agudizan en extremo los problemas del desarrollo mundial. Todo eso obliga a los partidos comunistas de los países capitalistas a buscar el camino de ruptura total con el capitalismo. Esta ruptura es encarada ante todo como vía pacífica de la revolución socialista.

La vía pacífica de la revolución es imposible sin que se observen una serie de condiciones insoslayables. Se trata de la creación de una alianza sólida y amplia de clases y política de las fuerzas que llevan a cabo la revolución bajo la dirección de la vanguardia proletaria revolucionaria. Es la transformación de los organismos representativos existentes del poder estatal en organismos de transformaciones revolucionarias, combinando las formas de lucha parlamentarias y no parlamentarias, con el máximo de flexibilidad por parte de los partidos que encabezan la revolución, lo que los preservará tanto de adelantarse como de rezagarse de los acontecimientos. De igual forma es inconcebible la vía pacífica de la revolución sin contener el extremismo, tanto de "izquierda" como de derecha, y aplastar la contrarrevolución abierta. La experiencia de Chile (y, en parte, de Portugal) de los años '70 demostró que por aho-

ra no se ha logrado cumplir esas condiciones.

Se ha puesto de manifiesto también la complejidad de conducir a las masas por la vía pacífica de la revolución socialista en países capitalistas más desarrollados que Chile y Portugal. Aceptando en una serie de casos la alternativa democrática del capitalismo, las masas en su mayoría no están dispuestas a asumir la alternativa socialista. Además, la alianza de los partidos comunistas con partidos socialistas, allí donde estos últimos (como por ej. en Francia) estaban dispuestos a ello, se realizó bajo la dirección de los socialistas y como éstos tenían la mayoría parlamentaria, fue poco lo que se modificó. Prácticamente, los socialistas, especialmente su ala derecha, se planteaban como tarea garantizar el "normal" funcionamiento del organismo burgués, pese a que llevaban a cabo conversaciones sobre la necesidad de su reestructuración radical.

Conviene señalar también el hecho de que el modo de llevar a cabo la revolución no puede dejar de influir en el carácter del nuevo poder. Grandes debates tuvieron lugar durante los últimos decenios en algunos partidos comunistas en torno al concepto de "dictadura del proletariado". Son diversas las consideraciones que se traen a colación para renunciar a ésta. Pero lo fundamental no reside en las discusiones alrededor del término sino en la esencia del asunto: no se pueden ignorar las lecciones de la historia.

La revolución no pacífica se diferencia sustancialmente de la pacífica: ésta última utiliza muchas instituciones políticas creadas por la burguesía, la primera las destruye. A raíz de ello se modifican las formas mismas de la lucha de las fuerzas que se contraponen, la envergadura de la intromisión del nuevo poder en las relaciones existentes. Pero la revolución es siempre coacción, es inconcebible sin determinadas formas de dictado. La vía pacífica de la revolución no implica rechazo de la lucha de clases sino su puesta en práctica en formas especiales. La revolución no puede limitarse a las paredes del Parlamento: las acciones "desde arriba" deben

consolidarse por acciones desde abajo, sin ello el triunfo logrado sería inevitablemente reducido a la nada. No puede haber una revolución pacífica absolutamente "pura". La revolución tiene por lo visto tanto más posibilidades de seguir siendo pacífica cuanto mayores sean las masas que conquiste a su favor. Tampoco puede ser una revolución socialista "pura" porque presupone mucha mayor disposición a los compromisos con las fuerzas no proletarias, un curso de transformaciones mucho más prolongado, más gradual (con posibles repliegues).

Las ideas de los fundadores del marxismo fueron confirmadas brillantemente en el curso de la lucha revolucionaria de los pueblos de los países coloniales y semicoloniales. En suma, el Oriente demostró la perspectiva del camino histórico que abriera la Revolución Socialista en Rusia: la creación de formas de vanguardia de poder estatal para, con su ayuda, hacer avanzar a los países relativamente atrasados hasta las alturas de la cultura y de la producción mundial. Al mismo tiempo, precisamente el Oriente del último medio siglo brindó multiplicidad de formas de lucha que habían sido previstas por V.I. Lenin. Con una orientación general antiimperialista y el predominio de momentos nacionales, hubo aquí movimientos pacíficos y no pacíficos, lucha guerrillera y parlamentaria, movimientos "antibélicos" de resistencia antiimperialista y guerra antiimperialista. Aquí tuvieron lugar y siguen teniendo virajes superficiales, profundos saltos hacia adelante y retrocesos. Original resultó el contingente de fuerzas que integró el movimiento, se puso de relieve el papel especial del ejército y la intelectualidad de tipo populista y los líderes religiosos. La conformación de diverso tipo de simbiosis variables de nacionalismo y socialismo, es en general característico para muchos países liberados.

En Oriente se confirmó también la circunstancia a que hacía referencia V.I. Lenin aplicada a Rusia: si en Europa es "incalculablemente más difícil comenzar" en cambio en Rusia "será mucho más difícil que

allí continuar la revolución" (T.35, pág. 10). Los jóvenes estados que adoptan la vía capitalista de desarrollo por lo visto no pueden ya repetir el tipo de desarrollo burgués clásico. Por otro lado, también a los países de tendencia socialista les resulta enormemente difícil colocar las premisas del socialismo. Para unos y otros resultan un obstáculo las arcaicas estructuras tradicionales, el atraso económico acumulado durante siglos, las dificultades para crear el nuevo Estado. Es enorme el grado en que frena el desarrollo de los países liberados el neocolonialismo. Entre estos países son frecuentes los conflictos bélicos, se producen divergencias internas entre grupos de revolucionarios. Pero en general los países liberados se han transformado en factor de enorme importancia positiva en el mundo contemporáneo.

En el siglo XX y especialmente a fines del siglo, se puso de relieve una circunstancia totalmente nueva consistente en la globalización de la multicomplejidad y diversidad de formas de la lucha revolucionaria.

Ya durante la primera guerra mundial las fuerzas de la destrucción asestaron un enorme golpe a la civilización humana. La Segunda Guerra Mundial, desatada por el fascismo, no fue una simple repetición de la primera y condujo a un salto cualitativo en el desarrollo de las fuerzas de destrucción. Los siniestros hongos sobre Hiroshima y Nagasaki marcaron la entrada de la humanidad en la era atómica. El uso de la superpoderosa arma contra las dos ciudades japonesas no era militarmente imprescindible. Con este acto el imperialismo estadounidense subrayaba sus pretensiones a la hegemonía en las relaciones internacionales. A tales pretensiones no renuncia tampoco ahora. Las consecuencias de su demencial política son conocidas por todos. En el mundo se han acumulado tal cantidad de medios de destrucción masiva que se puede destruir más de una vez todo lo vivo sobre la tierra. El peligro mortal que pende sobre la humanidad ha aumentado en muchas veces a causas de la guerra de galaxias, planeada por la administración Reagan.



Regimiento de Mallorca

Todo esto promueve a primer plano la lucha por la paz, por garantías reales del derecho de las personas a la vida. Si éstas no son aseguradas, no habrá nada que transformar, ni mejorar, ni corregir.

La teoría de la coexistencia pacíficas entre Estados con diferentes regímenes sociales, elaborada por V.I. Lenin, adquiere hoy una importancia invalorable. Elevada por el PCUS a un nuevo nivel teórico y práctico permite alejar a la humanidad del precipicio del peligro atómico. En este sentido están orientadas las nuevas grandes acciones de carácter de principio de la Unión Soviética en política exterior. Están inspiradas en que es imprescindible superar las tendencias negativas de confrontación que han aumentado durante los últimos años, desbrozar el camino hacia la completa disminución de la carrera de armamentos atómicos sobre la tierra y evitarla en el espacio cósmico, a la disminución general del peligro bélico, a organizar una

interacción creadora y constructiva entre los Estados a nivel de todo el planeta. No es que la distensión abra "una calle con tráfico de una sola mano". Es el camino para una restructuración del mundo en los marcos del cual cada pueblo construirá su vida de la forma que considere necesario, sin temer a la intromisión desde afuera, garantizando una vida pacífica no mediante la carrera armamentista suicida sino en base a la seguridad colectiva, resolviendo los problemas nacionales y tendiendo a la mutua solución de los problemas mundiales (y, en este sentido, además de frenar el militarismo existen otros problemas globales).

Una humanidad unificada fue pensada por C. Marx como basada en un fundamento comunista. La aparición de problemas globales plantea la tarea de crear una vida íntegra, interdependiente y pacífica de la Humanidad, aún en las condiciones de un mundo socialmente diverso.

El momento exige una nueva forma de pensar, ha sido subrayado durante el encuentro de M.S. Gorbachov con los participantes del foro Issik-Kul. "...El nuevo pensamiento político acorde con la realidad del siglo atómico -señalaba M.S. Gorbachov- es condición indispensable para salir de esta situación crítica en que la humanidad se encuentra en las postrimerías del siglo XX. Son necesarios profundos cambios en pensamiento político de toda la comunidad humana". La demanda de "profundos cambios", aplicable también a la teoría marxista de la lucha de clases, deberá ser la que ayude a encontrar la salida de la situación crítica, elaborar el problema de las vías de la renovación del mundo en la complicadísima nueva situación.

"...En nuestro ideal no hay lugar para la violencia sobre las personas" escribió V.I. Lenin sobre el objetivo supremo de la política del proletariado (T.30, pág.122). Hoy los éxitos del socialismo y de las formas democráticas son tales que permiten plantear el problema de la expulsión de la violencia de la arena de la historia como tarea práctica inmediata; la tendencia humanista

de la política proletaria es verdaderamente salvadora en el actual momento crítico para la humanidad.

Todavía F. Engels decía a fines del siglo XIX: "Si se modifican las condiciones para la guerra entre los pueblos, no en menor grado cambian para la lucha de clases" (C. Marx y F. Engels, T.22, pág.544). A fines del siglo XX esta relación adquiere especial importancia y sentido. En la era nuclear, en las condiciones de un mundo saturado y sobresaturado de armas "convencionales" y "no convencionales", enredado todo el globo terrestre en alianzas y bloques militares, la violencia puede fácilmente convertirse de "partera" de la historia en su "sepulturera". Los partos sociales podrían transformarse en muerte social. Esta circunstancia no puede dejar de influir en las acciones de las fuerzas revolucionarias y no sólo en ellas. Los países socialistas, muchos países liberados y una serie de países capitalistas ya hoy se plantean el problema de alejar definitivamente la violencia del campo de las relaciones internacionales.

En la década de los años '70 el pensamiento marxista colectivo hizo una importantísima advertencia: el problema de la elección de las formas correctas de lucha se transforma hoy en el problema de la existencia misma de la humanidad. Consideramos que esta tesis apunta mucho más lejos que los marcos de las búsquedas puramente tácticas. La lucha entre las fuerzas de clase contrapuestas no desaparece, tampoco en la era nuclear. Pero nuestra época enseña a elaborar y a practicar ampliamente también formas de lucha de compromiso. Y en esto no hay ninguna desviación del marxismo revolucionario. Precisamente el marxismo practicó un brusco viraje en las formas de lucha al modificarse las condiciones históricas.

Es cierto, el mundo es heterogéneo. Las condiciones de lucha revolucionaria son diversas. Es más: precisamente la lucha arma-

da garantizó el triunfo de países anteriormente oprimidos (pese a que no pocos países liberados conquistaron su independencia por vía pacífica). La permanencia en una serie de países de regímenes dictatoriales, la creciente exportación de la contrarrevolución, no permiten tampoco en nuestros días retirar del orden del día las formas de "lucha armada". Y pese a todo hay que comprender que determinada "exclusión" de algunos países de las condiciones generales de la era nuclear, lo mismo que la posibilidad de repetir los modelos de la era prenuclear, es relativa si se tiene en cuenta que cualquier conflicto local tiende a transformarse en conflicto regional y aún mundial. La era nuclear exige de las fuerzas revolucionarias la máxima reflexión antes de adoptar resoluciones sobre la lucha armada, el rechazo de principio de las diferentes manifestaciones de extremismo izquierdista. Por otro lado, esta era de modo alguno niega la necesidad de oponer decidida resistencia a la reacción y a la contrarrevolución allí donde ellos traten de liquidar por la fuerza las conquistas democráticas y socialistas, en un volver atrás el progreso histórico.

Puesto que en el mundo existe aún el capitalismo, la era nuclear no ha anulado sino que agudizó más el empuje, el desarrollo a saltos, lo desigual y contradictorio del desarrollo social. Ella misma, empero, hizo extremadamente peligroso su grado de conflictuosidad, obligado a poner todas las fuerzas para evitar que llegue la hecatombe. El camino para una paz sin mutua desconfianza, sin montañas de armas nucleares, sin amenaza de autodestrucción por ahora aún está obstruido por un montón de obstáculos, ante todo la IDE (guerra de las galaxias) y de ello son prueba los resultados del encuentro en Reykjavik. Pero los obstáculos deben ser alejados. La humanidad no tiene otra elección, no tiene otro camino. Los hilos del pasado llegan hasta el presente. Y hay que hacer lo imposible para que no se rompan en el futuro.

ARGENTINA: DEMOCRACIA, REFORMA DEL ESTADO Y POLITICA ECONOMICA

* Daniel Rodríguez

LA TEMATICA DE LA REFORMA DEL ESTADO

A mediados de los años setenta, las economías de los países capitalistas centrales entraron en crisis. El sostenido crecimiento económico a que las políticas de corte keynesiano habían dado lugar desde la segunda postguerra devino en estancamiento, desocupación, crisis monetarias y comerciales. La creciente intervención del Estado en la economía y los mecanismos políticos de articulación entre corporaciones típicos del Estado de Bienestar fueron cuestionados desde distintos ángulos. Sin embargo, dado el carácter reactivo de dicho cuestionamiento, predominó un discurso neoliberal que en sus versiones más extremas revitalizaba el paradigma del *laissez-faire* y la smithiana mano invisible del mercado.

Los triunfos electorales de Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Gran Bretaña, respectivamente, simbolizan este revival. En América Latina, ésta era la concepción de sectores muy minoritarios de la población sin ninguna posibilidad de acceso al poder político por

vías democráticas. Las dictaduras militares fueron las encargadas de implantar el monopolio del discurso neoliberal. Se comenzó por achacar al tamaño, a la ineficiencia y a la creciente intervención del Estado en los campos social y económicos de ser las principales causas de todos los males que afectan a nuestros países. Inmediatamente y, como consecuencia lógica, se generalizó la temática de la necesidad de la reforma del Estado. Básicamente se trataba de postular el achicamiento del estado, disminuir su inserción en la economía, incrementar su eficiencia en el sentido de la maximización capitalista de los beneficios y reducir su rol al de asegurar las condiciones para la libre reproducción del capital. La concepción quedó sintetizada en el lema: "Achicar el Estado es agrandar la Nación".

Las características más notorias del "discurso mítico" sobre el Estado al que el neoliberalismo dio lugar y las consecuencias prácticas de sus políticas ya han sido detalladas en otra oportunidad¹ y además han abundado con suficiencia sobre el tema varios autores.

* Economista. Profesor de Economía (UBA). Técnico Investigador del CONICET. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (FCE. UBA) Miembro del Instituto de Estudios Sociopolíticos y Acción Comunitaria (DONAC).

Para los fines de este trabajo, solamente interesa destacar algunos aspectos:

En primer término está el hecho de que en realidad el tema de la Reforma del Estado no se ha generalizado a partir del advenimiento de las nuevas democracias latinoamericanas, sino —como ha quedado dicho— a partir de la crisis de los años 70 en Europa y la instalación de las dictaduras militares en Latinoamérica. De ahí que desde el principio haya predominado un discurso antiestatista y privatista de neto corte liberal.

Por otra parte, las condiciones materiales en las que en uno y otro lado se recibía el emerger (o reemerger) del discurso neoliberal eran en muchos sentidos cualitativamente diferentes. Mientras que en Europa y los EEUU las políticas de tipo keynesiano predominantes desde la segunda postguerra habían logrado fomentar el desarrollo económico y la elevación sustancial de los niveles de vida de la población creando condiciones materiales para la perdurabilidad de sistemas democráticos de gobierno basados en la negociación, la participación y el consenso; en América Latina, las políticas nacionalistas impulsoras de la intervención del Estado en la economía que habían generado procesos de industrialización, crecimiento económico y una distribución progresiva de los ingresos nacionales, ya habían quedado atrás. Ya sea que se haga hincapié en sus propias limitaciones, en el accionar imperialista o en la reacción de los sectores oligárquicos afectados, lo cierto es que hacia los años setenta una buena parte de sus logros habían sido revertidos. Es decir que en América Latina, la situación de crisis económica aguda que ya por entonces se vivía creaba condiciones más favorables para la permeabilidad del discurso "anti-populista" y antiestatista entre los sectores medios y altos de la población. A esta circunstancia se agrega aquella otra por la cual los discursos generados en los centros imperialistas adquieren características de esquemáticos dogmas y tremendos fanatismos cuando son apropiados por las mentalidades cipayas de los países dependientes. Las dictaduras militares impusieron el monopo-

lio del discurso neoliberal en América latina acallando mediante múltiples y expeditivas formas a las opiniones opuestas. Así es que la crisis económica, el discurso monocorde y la volubilidad de las clases medias, muchas veces se han conjugado para popularizar una visión liberal y retrógrada sobre el Estado.

Actualmente, las democracias que han sucedido a las dictaduras militares en nuestra región, retoman la temática de la reforma del Estado. Los motivos que las impulsan son los mismos? Si no lo son, por qué y para qué se requiere de la reforma del Estado en el nuevo contexto democrático?, si lo son, es ello compatible con la consolidación y el desarrollo de la democracia? cómo, de qué forma, encararán las nuevas democracias los procesos de reforma del Estado que se plantean? Sobre estos interrogantes pretende avanzar este trabajo.

REFORMA DEL ESTADO Y DEMOCRACIA

El contexto:

Referido a la temática de la reforma del Estado, son varias las características que interesan destacar de la etapa histórica en que se inscriben los nuevos procesos de redemocratización en América Latina.

—En primer término, se ha dicho en muchas oportunidades y por los más variados autores que la crisis económica que afecta a la región es la más grave de su historia. Esta crisis está signada por la magnitud del endeudamiento externo, las restricciones al comercio internacional impuestos por las economías centrales, la recesión que afecta a muchos de los países, la caída de los productos brutos internos, las profundas desigualdades en la distribución de los ingresos nacionales, el nivel de los reclamos populares tantas veces postergados, etc.

—En esta situación, por demás desfavorable, no sólo resulta de estricta urgencia dar respuesta a las demandas de la población por un nivel de vida más digno, sino que de ello de-

pende en buena medida las posibilidades de consolidación de los procesos democráticos en marcha.

—Dado la debilidad de los sectores privados internos de la economía y la imposibilidad de contar con que el capital extranjero pueda venir a cumplir la tarea de promover el desarrollo económico necesario, el papel del Estado en un proceso tendiente al crecimiento económico y al aumento del bienestar general es de vital importancia.

Sin embargo, se da la paradoja que en esta coyuntura crítica, el mismo discurso mítico sobre el Estado, a la que las concepciones liberales dieron lugar, después de haber servido a las dictaduras militares para destruir y endeudar al Estado, ha sido asumido como propio en su totalidad o parcialmente, por buena parte de la opinión pública, ámbitos académicos e intelectuales, políticos y funcionarios de las nuevas democracias.

Sin embargo, en nuestra opinión, el tipo de reforma del Estado que se deriva del discurso neo-liberal, si bien tiene su correlato en los planes de ajuste económico, a los que la deuda externa sirve de pretexto, es incompatible con las reformas del Estado que las nuevas democracias latinoamericanas requieren.

Para decirlo de un modo más contundente, se parte de la convicción de que algunas de las nuevas democracias latinoamericanas, viven una peligrosa contradicción en la siguiente circunstancia: por un lado, el discurso neoliberal acerca del Estado ha penetrado en distintos sectores sociales de nuestros países, e incluso, continúa siendo difundido desde el propio seno de los gobiernos democráticos atados a políticas pautadas en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, organismo que es uno de los principales impulsores de estas concepciones en Latinoamérica.

Por otra parte, está el dramático hecho de que la reforma del Estado es una condición indispensable para la consolidación democrática, pero la reforma que la democracia requiere es contradictoria con los postulados

y las políticas neoliberales.

La reforma del Estado en las democracias, necesita de la creación de condiciones materiales capaces de permitir una amplia participación popular en la reforma que ponga al Estado en condiciones de servir eficientemente a las necesidades de las amplias mayorías populares.

Por aquí pasa a nuestro juicio, el aspecto clave de la discusión general acerca de la reforma del Estado en las actuales circunstancias.

El para qué de la reforma.

A grandes rasgos, deberían destacarse dos motivos básicos que originan la necesidad de la reforma del Estado en las nuevas democracias latinoamericanas:

Por un lado, la cuestión del poder propiamente político de la sociedad, la gobernabilidad de la misma, la consolidación democrática, la participación propiamente política de las masas en el gobierno de la sociedad, etc. Es decir, todos aquellos aspectos que hacen al Estado en su faz de dominación. Por otra parte, la necesidad de cubrir la brecha existente entre las demandas de la sociedad hacia el Estado y la capacidad de éste de dar una respuesta a las mismas eficientemente. Es decir, en todos aquellos aspectos que hacen a la faz administrativa.

Están más referidas a lo primero los planteos acerca de democratización política del Estado, la creación de nuevas instancias de Poder, las reformas constitucionales, aspectos políticos de descentralización de las decisiones, la reforma militar, etc. Se refieren más a lo segundo las reformas planteadas en la administración pública, la gestión del sector público de la economía, las empresas del Estado, etc.

Obviamente, uno y otro aspecto están íntimamente ligados ya que ambos hacen a la esencia del Estado en sus roles de dominación y administración, sin los cuales no puede aprehenderse como tal. Empíricamente, en las sociedades de clases, estas funciones no son separables. En lo concreto, lo político y lo administrativo son dos y una cosa al mismo

tiempo; sólo un alto nivel de abstracción permite (y obliga) una diferenciación analítica.*

REFORMA Y POLITICA

En la medida en que el proceso de la reforma del Estado se inscribe en un proceso social y político más general; es obvio, que la discusión política acerca de la reforma del Estado conduce inmediatamente al modelo de sociedad, al tipo de concepciones político-ideológicas que son hegemónicas en una sociedad específicamente determinada. En este caso surge la obligación de referirse a la concepción predominante acerca del tipo de democracia que se piense construir.

En otra oportunidad ya se ha hecho referencia al tema². Allí se decía:

“Cuando se habla de las ‘nuevas democracias’ latinoamericanas suele usarse el plural en referencia a varios países, pero en realidad se está pensando en un exclusivo modelo de democracia. Rápidamente y con explicaciones por lo menos insuficientes, se eliminan a diestra y siniestra tipos democráticos que no se ajustan al modelo en cuestión. Queda en pie, entonces, en un solo tipo de democracia que, como veremos luego, nosotros hemos llamado ‘democracia consensual’. En esta visión estrecha de la democracia (...) cualquier sistema de gobierno que cuestione el régimen de propiedad de los medios de producción queda fuera de la definición de democracia por siniestra (...)

Si se concibe a todas las nuevas democracias latinoamericanas como esencialmente iguales

(y si no no son democracias), teóricamente se deriva que cada una de ellas deberían apuntar hacia objetivos similares y, en este contexto, la reforma del Estado que deberían plantearse responde a un mismo modelo. Esta concepción desde ya nos parece muy estrecha.”

En consecuencia, desde este punto de vista, se considera que en América Latina han surgido distintos tipos de gobiernos democráticos con proyectos de fondo y límites de avance autoimpuestos relativamente distintos, o cualitativamente diferentes según los casos. Por los aspectos sustantivos de sus propuestas y los límites autoimpuestos a su accionar existen en la región distintos tipos de democracias que van desde aquellas que se plantean la transformación cualitativa de los regímenes de propiedad de los medios de producción hasta aquellas otras democracias puramente formales y las falsas democracias. En todas ellas está presente el tema de la reforma del Estado, pero en cada una el tipo de reforma que se plantea no puede ser el mismo. En todos los casos se trata de consolidar los procesos políticos iniciados y de lograr una mayor capacidad de gestión; pero mientras en las “democracias revolucionarias” los esfuerzos están orientados en realidad hacia la construcción de un nuevo Estado, en el caso de las “democracias formales” y las “falsas democracias” se trata principalmente de que las cuentas cierren.

Ahora bien, en este trabajo sólo se discutirá acerca de la reforma del Estado en el marco del proceso argentino y sus conclusiones tal vez puedan ser extensivas a procesos similares.

SOBRE LA LLAMADA NUEVA IDEOLOGIA DEMOCRATICA

A principios de la década de los 70, existía en la Argentina una tendencia fuerte arraigada entre los intelectuales que acompañaron al movimiento de masas en ascenso a otorgarle una exagerada prioridad valorativa a los aspectos sustantivos de la democracia por sobre los aspectos formales. Tal vez ello había ori-

ginado por varios motivos que operaron conjuntamente con más o menos énfasis.

Por un lado, estaban los planteamientos generales de la década de los sesenta de la Alianza para el Progreso con su combinación de Desarrollo + Democracia como reactivo del gobierno de los EEUU con motivo de la Revolución Cubana. Contra esta combinación ideológica estuvo centrada buena parte de la lucha de los movimientos populares latinoamericanos en esa época.

En segundo término, el auge de las posturas que reivindicaban la instauración del socialismo como única solución a los problemas de nuestros pueblos veía en la “democracia demoliberal” o en la “democracia burguesa” un freno formalista a la transición hacia la construcción de la nueva sociedad.

Por otra parte, es probable que la incapacidad de ciertos sectores políticos de izquierda para ganarse la voluntad de las masas mediante los mecanismos tradicionales del voto y del sistema tradicional de partidos, los hayan llevado a desconocer las ventajas relativas del sistema democrático en sus aspectos legales. De todos modos, sea como sea, es indudable que en importantes sectores intelectuales primaba la idea de que los aspectos formales de la democracia de ninguna manera podían obrar como freno en el avance de la resolución sustantiva de las necesidades e intereses de las masas populares.

En otra oportunidad, tendrán que analizarse con más detenimiento, y teniendo en cuenta la coyuntura histórica, los aciertos y los déficits de aquellas concepciones y de los hechos políticos a que dieron lugar. Por el momento, lo que interesa destacar es que a 15 años de entonces emerge un paradigma sobre la democracia cuyas características centrales y sus rasgos sobresalientes invierten absolutamente la valoración entre los aspectos sustantivos y los formales de la democracia.

No es que el nuevo paradigma haya revalorizado los aspectos formales de la democracia de tal forma de considerarlos tan importantes como los sustantivos.

Lo que sucede es que el énfasis puesto en los aspectos formales de la democracia ha termi-

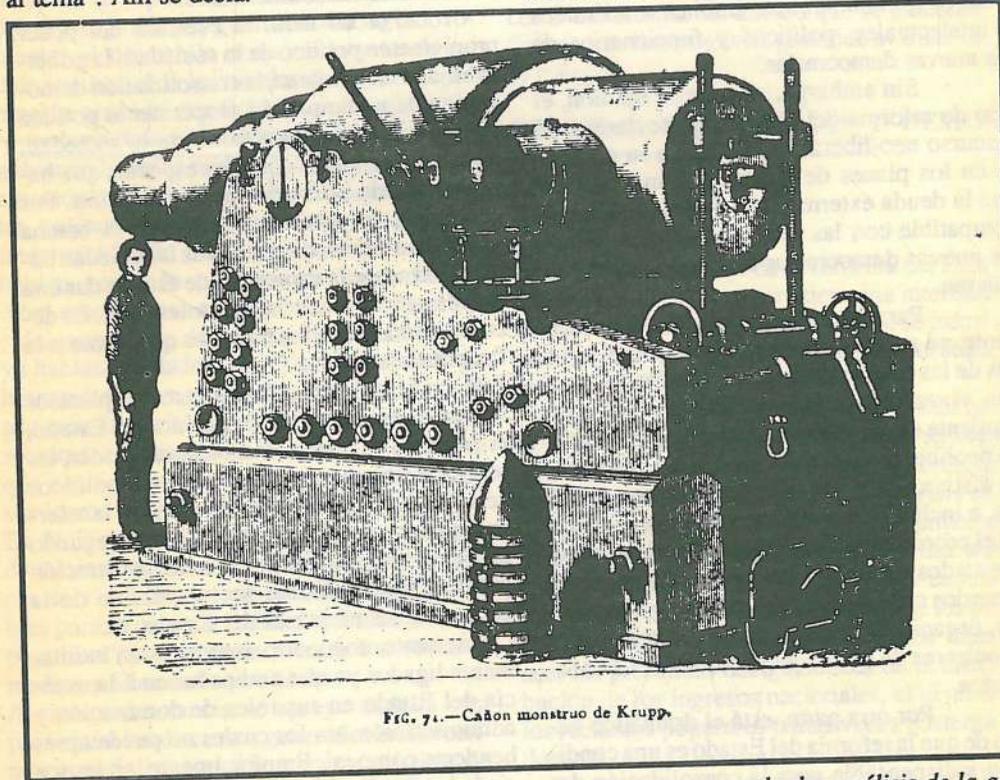


FIG. 71.—Cañon monstruo de Krupp.

* Esta prevención debería ser tomada muy en cuenta ya que a menudo, los análisis de la administración pública están sesgados fuertemente hacia las consideraciones de tipo técnico-administrativo, desconociendo las formas políticas concretas y las funciones de dominación del Estado, o introduciéndolas luego como una variable exógena al modelo.

nado por otorgarles un carácter fuertemente subalterno a los aspectos sustantivos. Sin temor a exageraciones, podría afirmarse que cualquier mención a las condiciones materiales de las masas, a las demandas no atendidas, a las desigualdades sociales manifiestas, etc. suele provocar irritación y hasta desprecio en el contexto de análisis sociológicos acerca de los mecanismos propiamente políticos a los que debieran tender las nuevas democracias latinoamericanas. Las propuestas que hacen hincapié en la necesidad de producir transformaciones en las condiciones materiales de vida de las masas como condición para la concertación política, la convergencia o los pactos democráticos, son proclives a ser olímpicamente ignoradas o a hacerse sospechosas de encubrir fines desestabilizadores. De lo anterior se deduce que son numerosos los actores sociales, los planteos políticos y los proyectos que por uno u otro motivo no pueden ser aceptados como democráticos. En algunos casos se llega al extremo de considerar a la democracia participativa como el único modelo verdaderamente democrático y al actual gobierno argentino como el más democrático de todos.

Por otra parte, se tiende a prejuzgar de que los cambios sustantivos en la sociedad conducen necesariamente hacia el totalitarismo. Por ejemplo, haciendo implícita referencia a la Revolución Nicaragüense, Juan C. Portantiero dice:

“Mientras algunas sociedades viven la decadencia del estado social como momento culminante de la larga historia del estado centralizado, otras pugnan, en sentido contrario, por construir sus estados desde las ruinas de un aparato administrativo más cercano a las formas patrimoniales de la dominación, tal cual las describió Weber, que a las del estado burgués, para resolver situaciones de pobreza extrema y de atraso económico. Está claro que en estos casos no es la construcción de un escenario democrático lo que se plantea, sino revolucionario. El objetivo transformador no se orienta a ampliar el autogobierno social —aunque esa retórica sea abundantemente utilizada— sino a construir un estado



Infantería de Buenos Aires
(1772)

centralizado, planificador, que se proponga medidas tendientes a que una élite político-militar controle el excedente y resuelva, con métodos más parecidos al despotismo ilustrado que a los de la democracia participativa, los problemas de la miseria.”³

Esta presunción tan severa acerca de la revolución, obliga a llamar la atención sobre el paradójico hecho de que algunos de los principales teóricos del nuevo paradigma son los mismos que en la década del 70 sostenían con más énfasis la posición contraria.

Tal vez sea el mismo Ángel Flisfish quien al analizar las causas que dieron origen al surgimiento de este nuevo paradigma desgrane los hilos que permiten dilucidar algunos de los motivos que explican tan significativa evolución, dice:

“La nueva ideología democrática es una respuesta a las condiciones autoritarias prevalentes en las últimas dos décadas en los paí-

ses del sur de América Latina. No se la puede comprender ni explicar si no es contra el transfondo de esas experiencias.

Las circunstancias que rodean su origen nos dicen ya bastante acerca de la identidad de sus autores. Obviamente, se trata de intelectuales, en un sentido amplio. La materia prima para la elaboración ideológica proviene de dos vertientes: por una parte experiencias sociales más exclusivas. En esto, no escapa a las condiciones que rigen toda producción ideológica. En todo caso, tanto las experiencias personales como las sociales más exclusivas lo son de perdedores. Es decir, se trata de personas y grupos sociales que fueron políticamente derrotados al advenir el autoritarismo, y han seguido en calidad de perdedores posteriormente. El ulterior desarrollo ideológico llevado a cabo es una reacción a esa derrota, y a la opresión obsecuente que han padecido.”⁴

Por otra parte, otra característica de la nueva ideología democrática es la de ser una construcción teórica que se ha comenzado a edificar en el exilio.

Estas características pueden explicar parte de las causas motivacionales de los autores de la nueva ideología democrática; aunque de la derrota, de la opresión y del exilio han derivado posturas teóricas y políticas radicalmente distintas.

En cuanto a los rasgos del modelo, Flisfish hace referencia a:

“1) La idea de una difusión y consolidación de prácticas efectivas de autogobierno;

2) la idea de un proceso de expansión de los ámbitos de vida sometidos a control personal;

3) la idea de la necesidad de un proceso de fragmentación o socialización del poder;

4) la idea de una restitución (que es a la vez superación) a la colectividad de capacidades y potencialidades personales, que se encuentran perdidas en el juego de las estructu-

ras sociales, autonomizadas en relación con las mujeres y hombres que las padecen.”⁴

Tendencia hacia el antiestatismo, socialización de la política, preeminencia de lo político sobre lo económico hasta el punto de restringir la transformación posible del orden económico al normal funcionamiento de la democracia planteada.

Esta “democracia mixta” que “se presenta como el resultado de un pluralismo conflictivo” que debe contrarrestarse permanentemente con un “pluralismo corporativo”, marcando la tensión productiva entre movimientos sociales y orden político tiene como desideratum el “pacto democrático” que viene a zanjar las tensiones entre la “espontaneidad caótica” y el “orden excluyente.”⁵

La democracia participativa no debería entenderse como un tránsito hacia..., sino como un proceso en continua construcción. Se ubica fuera tanto de un “escenario socialista” cuanto de un “escenario liberal”.

Se llega hasta aquí, luego que la crisis del Estado Social en Europa y de los “populismos” y “desarrollismos” en América Latina derivó en propuestas neoconservadoras de derecha o estatistas revolucionarias de izquierda, ambas también fracasadas.

Es de observarse a esta altura, que la construcción de una democracia de ese tipo requiere de varios supuestos. Explícitamente se reconoce que se necesita de la autolimitación de los actores en el marco de un reconocimiento del Otro con quien se tiene conflicto. Esa limitación es la que determina la resolución de los conflictos por mecanismos propios de la política en las que rigen las reglas del diálogo y no las posturas de guerra. Pero lo que la nueva ideología democrática no parece tener en cuenta es que ello implica claramente dos cosas:

Por un lado, determinadas condiciones materiales que garanticen a todos los actores un poder más o menos equitativo a la hora de sentarse a la mesa. Por otra parte, que

no haya ningún cuestionamiento serio al régimen de propiedad de los medios de producción pues, como lo indica la experiencia, ello deriva inmediatamente en procesos de enfrentamientos violentos entre clases. Es decir, la no existencia de ningún cambio cualitativo en el sistema de explotación.

O sea que cuando se niega la posibilidad de la revolución y se la sustituye por los cambios en el margen expresados en los mecanismos de "rupturas pactadas", en realidad se están pensando mecanismos más o menos novedosos de mantenimiento del statu quo. En este sentido se empieza por negar la posibilidad del pueblo de cuestionar al mismísimo sistema social.

En cuanto a las condiciones materiales de equidad que el pacto democrático requiere, no tienen reconocimiento por los teóricos de la nueva ideología democrática.

Portantiero dice:

"... la democracia como objetivo es independiente del ordenamiento económico-social que la contiene; no deriva de él, aunque pueda postularse una mayor simpatía entre la participación democrática y las formas igualitarias de producción y distribución del excedente".⁶

Esta posición ha sido fuertemente criticada. Luego de advertir sobre la "trampa" de una defensa a ultranza de la intervención estatal en la economía a cualquier costo, Przeworsky y Wallerstein dicen:

"La otra trampa es desestimar las limitaciones (a la soberanía popular y a la democracia) originadas en la propiedad privada: una nueva moda entre los intelectuales de izquierda. El argumento común es el siguiente: 1) La "naturaleza clasista" del estado capitalista no es algo dado; 2) la izquierda tradicionalmente ha subestimado, si no ignorado, la importancia de las instituciones democráticas, por lo tanto, 3) las limitaciones reales a la soberanía popular descansan en imperfecciones del proceso democrático. Una vez que se descubre la im-

portancia de la democracia, retornamos sin trabas al siglo dieciocho.

(...) Las cuestiones de representación, legalidad, procedimiento y responsabilidad tradicionalmente han sido realmente descuidadas y aun tal vez rechazadas por varias corrientes de izquierda. La postura tradicional ha sido mantener que, por un lado, bajo el capitalismo la democracia es a lo sumo uno entre los, instrumentos de lucha por el socialismo mientras, por otro lado, la nacionalización de los medios de producción resolvería autónomamente toda clase de problemas, incluso problemas resultantes de conflictos de intereses y, por tanto, políticos. (...) De esta forma no es accidental que muchos de los nuevos análisis se originen en Argentina y Chile, donde la cuestión de la democracia resulta central a causa de las trágicas experiencias de regímenes autoritarios.

Sin embargo, esta posición es demasiado fácil, pues la cuestión central que se ignora es si resulta probable que los ciudadanos puedan disfrutar de una seguridad básica en el Estado liberal democrático. Al menos hasta ahora no hay razones persuasivas para rechazar la presunción central de la posición marxista ortodoxa, es decir, que la propiedad privada de los medios de producción constituye una restricción efectiva sobre las factibles asignaciones de recursos, y, por lo tanto, una limitación de la soberanía popular.

No estamos sosteniendo que se haya demostrado que esta presunción sea verdadera: nuestro estudio está ampliamente motivado por la creencia que tanto los análisis teóricos como la experiencia histórica están ahora inconclusos. Pero la presunción es fuerte: es fuerte porque la experiencia diaria demuestra que la libertad y la democracia pueden, y de hecho coexisten, con la pobreza y la opresión. Discutir la democracia sin considerar la sociedad en la cual esta democracia funciona es una operación digna de un avestruz."⁷

EL PROCESO POLITICO EN LA ARGENTINA

Una vez descriptos los rasgos más notorios de la nueva ideología democrática y arimado el calor de la crítica, es hora de ocuparse de la hipótesis de que el actual proceso político argentino está fuertemente influenciado por dichas concepciones. De ninguna manera es posible en este trabajo atar todos los cabos entre teoría y práctica para demostrar fehacientemente esta idea, incluso es probable que nadie discuta la notable influencia que estos planteamientos teóricos tienen en la propuesta política y el accionar del gobierno de Raúl Alfonsín. Si alguna duda cabe, por ahora no queda más que remitir al lector a la comparación reflexiva entre los escritos aquí citados y los discursos de Parque Norte, el mensaje al Parlamento con respecto al proyecto del traslado de la Capital Federal o el mensaje a los partidos políticos en el llamado a la convergencia democrática.⁸

Si ha sido demasiado extenso el tratamiento acerca de la nueva ideología democrática es porque lo que se pretende es hacer explícito que, desde un punto de vista meramente político, los proyectos de reforma del Estado tienen como marco de referencia el intento de consolidar una "nueva forma de hacer política" dentro de un sistema de Democracia Participativa, que se considera como un objetivo social en sí misma, como el mejor si no el único sistema verdaderamente democrático, en el que priman los aspectos formales y propiamente políticos sobre los aspectos sustantivos y económicos y del que se deriva la imposibilidad explícita de un cuestionamiento a las bases materiales de reproducción y explotación en los que se asienta el sistema.

En ese contexto se inscriben los planteos de reformas político institucionales. Más específicamente, la reforma constitucional con su intención de fortalecer el rol del Parlamento, el traslado de la Capital a una de las zonas

más despobladas del país, los intentos de establecer una relación entre el Estado y representantes de intereses sectoriales al margen de las corporaciones tradicionales, las reformas educativas y militar y los aspectos de la modernización referidos a una nueva forma de hacer política. (participación, descentralización, consenso).

LA REFORMA ADMINISTRATIVA

Definimos, desde un punto de vista estrictamente político, los argumentos que explican la necesidad de reforma del Estado, veamos ahora la cuestión desde otro ángulo referido específicamente a la administración y a la capacidad de gestión propiamente dicha.

Es importante tener en cuenta que los aspectos administrativos y de gestión también hacen a las posibilidades de consolidación democrática.

Desde el Estado no sólo se gobierna políticamente la sociedad, en realidad, este cumple múltiples funciones que hacen a las más variadas facetas de la vida de los habitantes de un país. La credibilidad de un gobierno democrático depende en el mediano plazo no tanto de su discurso, sino de sus posibilidades de implementar políticas y dar satisfacción a las múltiples demandas sociales a las que se halla sometido.

Joan Prats I Catalá lo explica con meridiana claridad al referirse a la transición democrática española:

"El Estado no se agota con los mecanismos políticos y constitucionales.

Nunca ha sido así; y hoy lo es menos que nunca. El Estado ha cobrado por doquier dimensiones en otro tiempo insospechadas; pero la base de estos icebergs que son los Estados modernos, lo que se encuentra bajo la línea de flotación de la política, la legislación y el Gobierno, son las Administraciones Públicas, es decir, esos aparatos ejecutivos profesionalizados, que en democracia están some-

tidos a la ley y han sido creados para servir a los intereses generales bajo la dirección del Gobierno, pero que de hecho condicionan a éste tanto como lo sirven."

"...de que los ciudadanos perciban que esa Administración que gasta una parte tan importante del PIB sirve con objetividad y eficacia a los intereses generales, bajo la dirección de un gobierno legítimo porque emana de ellos, depende nada menos que la consolidación del propio Estado democrático.

... toda democracia cuya administración es sospechada de clientelismo, corrupción o ineficacia ve resquebrajada su legitimidad: los ciudadanos podrán emitir libremente su voto; pero faltos de evidencia de que la Administración funciona a su servicio, ante cualquier crisis grave serán presa fácil del autoritarismo pseudogeneracionista."⁹

Por lo tanto la cuestión de la Administración Pública nos remite inmediatamente a la problemática de la ineficiencia del Sector Público.

Ya hemos visto que el discurso neoliberal se refiere a la eficiencia o ineficiencia del Estado bajo la óptica de la maximización de beneficios de la economía privada del capitalismo. Sin embargo, siguiendo a Bernardo Kliksberg, parece más plausible considerar la eficiencia del sector público según la magnitud de la brecha existente entre la capacidad de gestión del Estado y la magnitud de las necesidades sociales a las que ese Estado debe dar respuesta.¹⁰

De aceptarse esa idea, la reforma Administrativa consistiría en un proceso gradual, continuo y permanente tendiente a cerrar la brecha entre capacidad de gestión y necesidades sociales. Y justamente, el proceso es permanente porque la brecha nunca termina de cerrarse por el continuo escape hacia adelante de las demandas sociales.

De todos modos, el problema inicial consiste en determinar cuáles son los indicadores apropiados para medir la magnitud de la brecha.

No pueden adoptarse para ello criterios universales ya que la capacidad de gestión del Estado es una variable dependiente del para qué del Estado y ello a su vez está determinado por las demandas sociales que son función del proyecto político y de las concepciones político-ideológicas dominantes.

"Asuntos tan sencillos y a la vez dramáticos como si un nivel mínimo de alimentación, una vivienda digna para todos, etc., constituyen demandas que deben ser atendidas por la sociedad (demandas sociales) o no, dependen exclusivamente de concepciones político-ideológicas imperantes, por lo tanto no pueden ser respondidas fuera de contexto"¹¹

Pero en este caso el contexto ya lo tenemos determinado: La Democracia Participativa, en la cual, al menos en teoría, el Estado tiende a ejercer cierta "discriminación positiva" para compensar la crítica situación heredada de las dictaduras militares.

Reformar al Estado para dar satisfacción eficientemente a una demanda del tipo "la tierra para el que la trabaja", está absolutamente fuera de contexto en este caso; cumplir eficientemente con el P.A.N. se corresponde perfectamente con el marco aludido.

REFORMA ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS DEL ESTADO: DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA

Al referirse a la "reforma del Sector Estatal" el llamado presidencial a la convergencia democrática¹² destaca que "El Estado debe tener un rol orientador, organizador y dinamizador fundamental en la economía argentina". En la medida que ello no es posible por la situación actual en que se encuentra el Estado se determina que las prioridades presupuestarias deben ser dos: la inversión que asegure el desarrollo y el financiamiento de una política social. Sin embargo, dado el carácter fuertemente centralizado de la Administración Pública en Buenos Aires y la magnitud de las

empresas públicas se requiere: una reforma en la administración pública y la reforma de las empresas del Estado.

En cuanto a la Administración Pública, el diagnóstico se centra en tres elementos:

*"El carácter clientelístico de nuestra administración, que afecta a sus pautas valorativas y compromete su autoestima",

*"la rigidez que la traba y le impide ser eficiente",

*"el atraso tecnológico".

Por lo tanto, las grandes líneas deberían tender a crear una verdadera carrera administrativa con todos los elementos de transparencia que ello significa, modificar la normativa y modernizar estructuras y procedimientos incorporando la tecnología de avanzada fundamentalmente en el rubro de la informática.

Cuáles son los lineamientos básicos para llevar a cabo este aspecto de la reforma? El documento es explícito al respecto:

"Una reforma administrativa como la que se pretende no puede ser un logro instantáneo ni exclusiva responsabilidad gubernamental. Requiere discusión, investigación y experimentación. Puede lograr sus objetivos si se apoya en el consenso y a este se llega a través del diálogo abierto y la participación".

Con respecto a las empresas públicas se estima que se requieren estructuras ágiles, capaces de ejercer iniciativa, "utilizar adecuadamente sus recursos, de convertirse en impulsores del desarrollo y de la satisfacción de los requerimientos básicos de la sociedad".

Los objetivos son mejorar la capacidad de gestión de las empresas públicas, ampliar su capacidad ejecutiva, descentralizar y consolidar la participación social. En definitiva:

*Se privatizará lo que no debe estar en manos del Estado.

*Se fomentará la formación de cooperativas de usuarios o de trabajadores.

*Se provincializará y municipalizarán unidades.

*Se democratizará la gestión en todos los niveles posibles.

Entonces, sintéticamente, tenemos aquí la propuesta del gobierno democrático argentino respecto a la reforma propiamente administrativa del Estado. Al respecto, nos interesa hacer hincapié en los siguientes aspectos:

La prioridad presupuestaria debe ser la inversión para el desarrollo y el financiamiento de una política social. La reforma debe ser gradual y, tanto en lo que hace a la administración como a las empresas públicas se establece que la participación democrática es una condición sine qua non para el éxito de la reforma. No se habla sólo de privatizaciones, sino de la formación de cooperativas de usuarios y trabajadores, la descentralización y la democratización en todos los niveles de la gestión.

REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICA ECONOMICA

En el proceso previo a la asunción del gobierno democrático y en los primeros días de su gestión, era materia común de la euforia reinstauradora, la convicción de que con la democracia se solucionarían los males económicos que afectaban al país. Lo había proclamado el candidato presidencial luego presidente, lo había reiterado fuera del país al afirmar que un gobierno democrático podría lograr de los acreedores mejores condiciones para afrontar la gravosa carga de la deuda externa, había quedado asentado en la plataforma electoral, así también lo sentía el primer ministro de economía de la democracia en su negociación con los acreedores y, con mucha más razón, aquella gran masa de jóvenes que se habían apropiado del discurso de la campaña electoral y que cuando esta concluyó en triunfo, puso todo su empeño —con el ímpetu que suele hacerlo la juventud— en la construcción de un nuevo orden democrático. Verdaderamente, el slogan de que "con la Democracia se come, se cura y se educa" se transformó rápidamente en mito.

Es que las nuevas concepciones llevaban a la

idea de que si hay participación y si hay diálogo, hay consenso y hay pacto. Tanto en lo interno como en lo externo. Pues si las clases sociales ya no son clases sino grupos más o menos difusos, y si el imperialismo antes que imperialista es democrático y si su contradicción es con el autoritarismo y/o comunismo; se deduce lógicamente que, tanto en lo interno como en lo externo, los "intereses generalizables" deben primar sobre los "intereses particulares". Sólo hace falta el diálogo. Un diálogo entre casi iguales. Imperialismo, dependencia, clases sociales, oligarquía, revolución, fueron conceptos destruidos al arcón de los trastos viejos. Jorge Schvarzer, pasado el tiempo, va a decir: "El 10 de diciembre de 1983 la sociedad saludaba con alegría el advenimiento del nuevo gobierno democrático. (...) El optimismo generalizado se apoyaba más en razones políticas que en argumentos económicos. En cierta forma, si bien ese optimismo resultaba exagerado en vista de la formidable conjunción de problemas estructurales que se presentaban, en el corto plazo cumplía un rol funcional en lo que respecta a la estabilidad de las formas políticas en el país. Las dificultades del período de pos-guerra y de transición a la democracia ayudaron a tender un velo sobre el crecimiento exponencial de los problemas económicos; ellos se presentaron después del cambio de gobierno con toda su crudeza."¹³ Cuando el gobierno fue ampliamente derrotado en la puja por modificar la relación de fuerzas en el interior de los sindicatos, se encontró con su primer gran escollo interno para su esquema de participación democrática. Esta circunstancia signaría toda la relación entre gobierno y el grueso de la oposición. Luego que los acreedores externos mostraron toda su "insensibilidad" ante la nueva democracia y en lo interno se reavivó la disputa por la distribución del ingreso nacional, el gobierno se autocrítico por no haber informado fehacientemente a la población sobre la gravísima situación. Cuando la concertación fracasó el gobierno culpó a las corporaciones por su espíritu anti-

democrático y por sus inclinaciones desestabilizadoras. La realidad de los hechos se alejaba cada vez más de la construcción epistemológica de la nueva ideología democrática. Tal vez, ahora el proceso transite por la etapa —medio oculta tras los avatares de la oposición— de la disputa interna en el gobierno. En el tema que nos ocupa (la reforma del Estado) ello podría expresarse así: Ante la crisis económica, la agudización de los conflictos por la apropiación del excedente, el crecimiento en los niveles de inflación, los fracasos de las políticas de concertación, el gobierno pegó un salto hacia adelante: implementó el Plan Austral y lanzó el proyecto de la Segunda República. Las políticas acerca de la reforma del Estado deben inscribirse dentro de este contexto.

Partiendo de suponer que los efectos del Plan Austral sobre el proceso económico y político argentino son conocidos, ha llegado la hora de preguntarse si es compatible la reforma del Estado según los requerimientos propiamente políticos o los administrativos y de gestión anteriormente detallados y el tipo de ajuste que la política económica ha provocado.

Por una parte, parecería contradictorio el intento de fomentar la participación y el consenso como condición sine qua non de la reforma en un marco democrático mientras la política económica agudiza la situación material adversa a esa intención. Entre diciembre de 1983 (cuando asumió el gobierno democrático) y agosto de 1986 el salario real del Sector Público vuyó un 47,5%.¹⁴

Por otra parte, mientras se habla de darle una prioridad presupuestaria a la inversión pública la inversión real del sector público en lo que va de 1986 está por debajo de lo presupuestado en un 2,80%; siendo que lo presupuestado suponía una tasa inflacionaria para todo el año de 28%.

Simultáneamente, la política económica ha elevado las cifras de desocupación abierta y subempleo al 12% de la población económicamente activa, mientras se impulsa la emigración de la mano de obra desde el sector público al privado.

Por último, las cooperativas de usuarios y trabajadores de las que habla el llamado a la convergencia parecen no tener nada que ver con las privatizaciones concretas fomentadas desde el Ministerio de Economía.

Es decir que el Plan Austral ha ido generando en los hechos una creciente separación entre las intenciones de los teóricos de la reforma del Estado y la masa de empleados públicos que reclaman constantemente por un nivel de vida más digno.

En esta diferencia entre el discurso y la práctica política, no debieran verse intentos deliberados de engaño a la población ni fines de corte electoralistas. Más allá de las intenciones subalternas, la limitación fundamental se encuentra en las propias concepciones que sustenta la nueva ideología democrática. Su preocupación por difundir una visión mítica acerca de las ventajas de la democracia, el pacto y el consenso; su ocultamiento —a veces hasta deliberado— de las contradicciones materiales sobre las que se desenvuelven los aspectos superestructurales de las sociedades latinoamericanas; no le permite hacer una interpretación cabal de la compleja realidad histórica heredada de las dictaduras militares signada por la internacionalización del capital, el endeudamiento del Tercer Mundo y notorias desigualdades sociales.

El temor al conflicto ha llevado a su negación teórica; pero el Imperialismo, la Dependencia, las Clases Sociales, la Explotación y la Miseria de las más amplias masas constituyen elementos categoriales de fundamental importancia para aprehender las situaciones históricas concretas en que pueden desarrollarse —o no— el diálogo, las convergencias, la participación, el consenso, el pacto democrático.

Por otra parte, específicamente en el tema de la reforma del Estado, el gobierno se inspira en por lo menos tres fuentes de ideas con concepciones contradictorias:

—En primer lugar, los teóricos de la nueva ideología democrática.

—En segundo término, los técnicos en administración pública en los que predomina una orientación cepalina.

—Por último, el equipo económico imbuído de las ideas neoliberales. En sus contradicciones pueden rastrearse las contradicciones existentes en las propuestas del gobierno acerca de la reforma del Estado.

ANEXO

SOBRE LA ANUNCIADA REFORMA DEL ESTADO

Cuando este trabajo ya había concluido, el gobierno democrático anunció públicamente una serie de medidas presentadas como la "Reforma del Estado". La acumulación de erróneas interpretaciones periodísticas, despididas declaraciones, e interrogantes, que el cúmulo de palabras ha dado lugar, crean los impulsos para describir sintéticamente en que consiste —a nuestro entender— el meollo de las políticas anunciadas.

En primer término La Forma: Habíamos visto hasta aquí que para los teóricos de la llamada nueva ideología democrática las formas de la democracia constituyen los aspectos definitorios de su aceptación o no como tales.

Se trataría de construir una democracia participativa, donde mediante el diálogo y el consenso se va conformando, permanentemente el orden deseado y nunca del todo acabado. Para ellos y para los teóricos de la Administración Pública, ubicados en los contextos de las asesorías presidenciales, secretarías de la función públicas, el INAP, etc. La participación, el gradualismo, la más amplia discusión democrática entre los interesados, los patrones de eficiencia distintos para el sector público respecto del privado, etc. constituyen el ABC de la reforma del Estado. Es obvio, que el paquete de medidas presentado como la "reforma del Estado" no cumple ninguno de esos requisitos tantas veces enunciados. Casi todos los técnicos en administración, funcionarios públicos, políticos oficialistas o no, se enteraron por los diarios de las resoluciones implementadas. Nuevamente ha sido el equipo económico —esta vez de

acuerdo con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos— el principal gestor político del gobierno.

A las Instituciones de la Democracia sólo le quedará convalidar ex post, como ya sucedió con el Plan Austral y la elección del lugar de asentamiento de la futura nueva Capital lo que ya ha sido decidido en ámbitos reducidos. En segundo término El Contenido:

Hasta el momento la llamada "Reforma del Estado" consta de una serie de medidas referidas a tres diferentes áreas de problemas:

1) Problemas derivados de la crisis en que se encuentra el Sistema de Previsión Social.

2) Las Empresas Públicas.

3) La intención de disminuir el Déficit Fiscal según las pautas fijadas por el Fondo Monetario Internacional vía la reducción de personal y la modificación de la política salarial en el Sector Público.

El sistema previsional: El Sistema Previsional argentino se encuentra en crisis ya que el achicamiento de la economía, la tercerización y la fuerte evasión han provocado que el aporte a las cajas previsionales no cubra los requerimientos originados en el pago a los jubilados y pensionados. Es decir que los ingresos son menores que los egresos. Por lo tanto, en el contexto de la actual política económica el Estado no puede hacer frente al pago del 82% del salario activo que por ley le corresponde a los jubilados. La corte suprema en pronunciamiento reciente, ha dictaminado contra el Estado y a favor de la pretensión de los jubilados que pretenden cobrar el 82% que hasta el momento no se paga. Para salir del paso, el gobierno ha declarado la Emergencia Previsional que suspende los juicios contra el Estado y promete un incremento de las jubilaciones en un 40 a 80% en términos reales para el año próximo.

Obviamente, la medida es claramente ilegal y es de esperarse un nuevo pronunciamiento del poder judicial contra el Estado; por otra parte, suponiendo un salario mínimo de 110 australes para el conjunto de los dos millones de jubilados existentes en el país, un in-

cremento promedio del 50% en términos reales para 1987, significan unos 1400 millones de australes en el año, es decir unos 1160 millones de dólares que no se ha explicado cómo se van a obtener (paridad a diciembre de 1986).

Las Empresas Públicas: En reiteradas declaraciones de los ministros Trucco y Sorrouille, y del flamante Director de Empresas Públicas Enrique Olivera, se ha anunciado que la intención en esta área es que las empresas públicas den ganancias. La maximización de beneficios del capitalismo privado irrumpe así como patrón de medida de la eficiencia en el sector público de la economía. Por otra parte, la entrega de una alta cuota del poder decisorio sobre las empresas públicas a representantes de los grandes Grupos Económicos privados que operan en el país, permite que los sectores sociales del gran capital supuestamente desplazados del poder con el advenimiento democrático vuelvan a ocupar ahora formalmente buena parte de él. Por ahora sólo se trata de la creación de una superestructura más; sin embargo debería reflexionarse sobre algunos aspectos:

a) Las empresas públicas prestan un servicio social. Ahora son los llamados "capitanes de la industria" los que determinarán qué son y qué no son servicios sociales y a qué sectores deberá satisfacerse prioritariamente.

b) Para que una empresa pública maximice sus ganancias sus productos o sus servicios deberán venderse sólo a quien puedan pagarlos.

c) El Sector Público es el principal demandante del Sector Privado, a qué empresas beneficiará su demanda será determinado por su nivel gerencial.

d) Para los empleados de las empresas públicas no se aplica la indemnización extraordinaria. Para ellos rige la Ley de Contrato de Trabajo; es decir que pueden ser despedidos como cualquier empleado del sector privado con la indemnización normal.

Sobre el personal de la Administración Pública: Los empleados del Estado

suman 1.837.000 en todo el país. 996 mil dependen de la Nación, 757 mil de las provincias y 84 mil de la municipalidad de Buenos Aires.

De los 996 mil dependientes del Estado Nacional, 647 mil pertenecen a la Administración Nacional, 313 mil a las empresas públicas y 36 mil al sistema bancario oficial.

Nos hemos detenido en estas cifras para significar que de los empleados de la Administración Nacional, sólo 183 mil constituyen el universo de los que dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo y no entran en las convenciones colectivas de trabajo. En tres años se busca reducir este número en 20% (36 mil personas) mediante la indemnización extraordinaria y selectiva de los que piden la baja voluntaria. Es decir que lo que se ha presentado como una extraordinaria indemnización para el retiro gradual de empleados del sector público afecta sólo a una ínfima parte del total de los empleados del sector.

Con la modificación de los horarios de trabajo, las indemnizaciones, etc., es de esperar cierta disminución en el número de empleados

públicos que irán a engrosar la oferta de mano de obra en el sector privado de la economía.

Por otra parte, la política salarial tiende a suavizar los costos sociales de la reducción de personal. Para ello se ha promovido un atraso relativo de los sueldos del sector público respecto a los privados en el segundo semestre del año y por esa razón se explica la tosudez del equipo económico en negar cualquier aumento de salarios en el sector público hasta el primer mes de 1987.

Debe recordarse que antes del lanzamiento del Plan Austral se produjo un avance relativo de las tarifas del Sector Público antes del anuncio del congelamiento de precios, también se acumuló emisión preventiva.

Por último, en esta apretada síntesis final, sólo quedaría realizar una afirmación sobre la que no será posible extenderse en fundamentaciones: Estas medidas no constituyen en sí una reforma. Ni siquiera la sociedad argentina ha empezado a discutir el para qué de la reforma del Estado, es dudoso que siquiera se haya avanzado sobre un modelo de sociedad. Ello es aún una tarea pendiente.

diciembre de 1986

Notas:

- 1 Rodríguez, Daniel: "Nuevas Democracias latinoamericanas, Reforma del Estado y Crisis Económica", Bs.As. 1986, DONAC- CINAP-CEDNA.
- 2 Rodríguez, Daniel; op. cit.
- 3 Portantiero, Juan Carlos: "La democratización del Estado".
- 4 Filsfisch, Angel: "El surgimiento de una nueva ideología democrática en América Latina"; en Crítica y Utopía.
- 5 Portantiero, J. C. op. cit.
- 6 Portantiero, J. C. op. cit.
- 7 Przeworsky, A. y Wallerstein, M.: "Soberanía popular, autonomía estatal y propiedad privada"; en "Crisis y regulación Estatal: Dilemas de política en América Latina y Europa"; EURAL.
- 8 Alfonsín, Raúl: "Convocatoria para una convergencia democrática" 1-12-85. Discurso de Parque Norte; Senado de la Nación: "Diario de Asuntos Entrados; Año II N° 41, 14-7-86; y La Nación; viernes 3-10-86: "El Llamado presidencial a la convergencia".
- 9 Joan Prats I Catalá: "Transición democrática y Administración Pública en España". Congreso Iberoamericano sobre Democracia, Sociedad y Administración Pública, España, 1984.
- 10 Para un desarrollo más extenso de este punto ver D. Rodríguez, op. cit.
- 11 Rodríguez, D. op. cit.
- 12 La Nación; "El Llamado Presidencial a la Convergencia".
- 13 Schaverzer, Jorge: "De la deuda externa al Plan Austral"; en "Crisis y Regulación Estatal, dilemas de política en América Latina y Europa".
- 14 Carta Económica, en base a datos del INDEC.
- 15 INDEC.

La Inserción de las Exportaciones no Tradicionales de América Latina En La Nueva División Mundial del Trabajo Durante La Fase Superior de Transnacionalización del Capital

* Luis Vitale

A modo de justificación del tema

Nos hemos decidido a publicar estas notas ahora, antes de terminar una investigación más global y totalizadora del desarrollo del capital latinoamericano, porque estimamos que debe socializarse lo más pronto posible la discusión sobre la tendencia principal del proceso productivo latinoamericano en los años que restan de este siglo: el desarrollo de las exportaciones no tradicionales.

Nos preocupa que esta tendencia central del proceso no haya sido advertida en toda su magnitud por la mayoría de los analistas, políticos y dirigentes de los movimientos sociales. Sus reiterados llamados a replantear el modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones, que caracterizó el despegue industrial de América Latina hasta la década de 1960, demuestran que no se ha tomado plena conciencia del salto cualitativo producido por el nuevo modelo de explotación-importación impuesto por las transnacionales, de acuerdo al reajuste de la división mundial del trabajo promovido desde la década del 70.

Las corrientes de centro-izquierda y de izquierda, al igual que los sindicatos, siguen postulando como uno de los puntos claves de su programa el fomento de la industria manufacturera liviana, que trabaja con el mercado interno, como si esa perspectiva de desarrollo tuviera alguna factibilidad en la actual fase de mundialización de la economía. Parecen no advertir que el capital financiero ha dejado de interesarse por ese tipo de industrialización en el "tercer mundo" y que su principal interés reside en promover las industrias de exportación no tradicionales, obviamente asociado al capital criollo privado y estatal.

En rigor, este modelo es uno de los puntales de la llamada "modernización" y está estrechamente ligado al crecimiento exponencial de la deuda externa porque, en primer lugar ciertos préstamos fueron utilizados para estimular ese tipo de industria y, en segundo lugar, porque el pago de la deuda externa está relacionado con el crecimiento de las industrias de exportación no tradicionales, según el plan Baker y los propios gobiernos latinoamericanos.

La falta de comprensión de este proceso de industrialización insertado en la nueva división internacional del trabajo y del papel que le toca a nuestra América Latina en el reparto del mercado mundial, bloquea la realización de análisis omnicomprendivos sobre las líneas gruesas de la política económica de los actuales gobiernos latinoamericanos. A modo de ejemplo, recordamos que las corrientes del centro y de la izquierda venezolana tardaron bastante tiempo en percibir que la orientación básica del gobierno demócrata-cristiano de Luis Herrera Campíns era promover las industrias de exportación no tradicionales; más aún, llegaron a criticarlo porque su administración "no arrancaba", dada la escasa atención que prestaba al desarrollo de la industria manufacturera que trabajaba con el mercado interno.

Otro caso es el argentino: la oposición burguesa mayoritaria, constituida fundamentalmente por el peronismo, y también por los partidos de izquierda parecen no haber comprendido que la viga maestra de la política económica del gobierno de Alfonsín es promover a fondo el desarrollo de las industrias de exportación no tradicionales. La CGT sigue postulando el fomento a la industria manufacturera, como si ello fuera posible bajo la actual fase de evolución del capital financiero.

La oposición chilena critica a la dictadura militar pinochetista por haber provocado la quiebra de la industria, sin darse cuenta de la emergencia de las industrias de exportación tradicionales, que han crecido en proporción similar a la disminución y crisis de la manufactura tradicional, en consonancia con el nuevo modelo de exportación-importación.

Lo que más llama la atención es que quienes luchan por cambiar el sistema global de dominación tampoco se hayan dado cuenta de que en las fábricas y agroindustrias de exportación no tradicional está concentrándose un sector clave del moderno proletariado, con fuerte composición femenina, que será decisivo a la hora de las grandes movilizaciones por el cambio de sistema y el ulterior inicio

de la fase de transición al socialismo.

Es probable que esta falta de comprensión sea producto de una sobreideologización, ajena a los procesos reales. La ideología, en el sentido que la entendía Marx, es decir inversión o deformación de la realidad al servicio de un esquema aprorístico de clase, no es buena consejera para analizar objetivamente los fenómenos de la realidad. Detrás de esta forma de ideologización estarían —para no ser malpensados— buenos deseos de que nuestros países marcharan por la senda de una industrialización de carácter nacional, capaz de abrir nuevas fuentes de trabajo y ensanchar el mercado interno. En rigor, en la actual etapa de evolución de la humanidad dicha industrialización sólo será factible implementarla en una sociedad alternativa al capitalismo. Lo demás es utopía y no de la mejor, porque su proyecto de desarrollo constituye un "ritornello" a viejos tiempos teñidos de populismo.

Estas notas son un adelanto de una investigación en marcha sobre el desarrollo del capitalismo en América Latina en el último medio siglo.

¿Agotamiento del proceso de sustitución de importaciones o abandono del modelo por las transnacionales?

A fines de la década de 1960, los ideólogos del desarrollismo comenzaron a hablar de un agotamiento del proceso de sustitución de importaciones. En realidad, no se trataba de un "agotamiento" sino de la implantación de un nuevo modelo económico por parte del capital monopolístico. La definición de agotamiento era en el fondo falaz, porque en América Latina y el Caribe nunca hubo un pleno desarrollo de la industria de sustitución de importaciones, ya que nuestra industria surgió desde los inicios con evidentes signos de dependencia respecto de la importación de máquinas-herramientas o bienes de capital.

Este auge relativo de la industria liviana, lejos de afectar al imperialismo, como suponían algunos, favoreció al capital monopolístico que estaba más interesado en vender

*Historiador y Economista.

C.E.C.F.I.L. (Centro de Estudios sobre el Capital Financiero en Latinoamérica).

sus máquinas-herramientas que artículos manufacturados de consumo popular. Así lo manifestaron sin rodeos las Cámaras de la Producción y el Comercio de Estados Unidos a través del "New York Times": "No es posible mantener indefinidamente, ni con América Latina ni con el Oriente, el viejo sistema colonial de venderles artículos semifabricados a precios reducidos. debemos esperar la industrialización de los países no desarrollados".*

Era entonces evidente que no existía ninguna contradicción entre el imperialismo y el desarrollo de la llamada industria nacional, elaboradora de productos de consumo no durables. Constituía una expresión más de la relación de dependencia entre la burguesía latinoamericana y el capital monopólico extranjero, y de su capacidad congénita para enfrentar al imperialismo, para frustración de aquellos que alentaron ilusiones en la burguesía "progresista" industrial.

Esta fase de industrialización temprana —atravesada por México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y, en cierta medida Colombia— sufrió un primer cambio significativa-

Inversiones de Estados Unidos en América Latina

	1951-52	1965
Petróleo	1.912 mill. de dólar.	3.034 mill. de dólares
Manufacturas	1.774 mill. de dólar.	2.741 mill. de dólares
Comercio y varios	1.393 mill. de dólar.	1.600 mill. de dólares
Minería y Fundición	686 mill. de dólar.	1.114 mill. de dólares

En 1967, estas inversiones en la industria alcanzan ya al 32,3% del total del capital estadounidense en América Latina y el Caribe, según el estudio de la OEA: "El financiamiento externo para el Desarrollo en América Latina", Washington, 1969, p. 3.

En México, el capital norteamericano

controlaba en 1972 el 45% de los activos industriales en general, y el 87% en ciertas ramas de bienes de capital e industrias de consumo durable. En Brasil, en dicho año, Estados Unidos controlaba más del 50% de la industria en general, y el 74% de las industrias de punta, especialmente petroquímica y auto-

motriz. Este fenómeno fue analizado por Aníbal Quijano en una investigación sobre el Perú: "mientras que en el período anterior, el imperialismo radicaba fundamentalmente en la propiedad y el control de la producción extractiva minera-agropecuaria, en 'enclaves' que sólo geográficamente pueden ser considerados parte de la economía nacional, en la actualidad tiende a desplazar el énfasis de su penetración y de su control en los sectores manufactureros urbanos y en el comercio, sin que ello signifique el abandono de sus sectores tradicionales de control".*

Las inversiones norteamericanas en la industria chilena, que alcanzaban solamente a 6 millones de dólares en 1940, aumentaron notoriamente a partir de 1960. Algunos autores han estimado esta inversión en cerca de 100 millones de dólares. Es difícil cuantificar el total, porque se formaron empresas "nacionales" que eran subsidiarias o estaban controladas por firmas extranjeras, que penetraron sigilosamente a través de estas sociedades "nacionales" para aprovechar las franquicias y extensiones a las industrias del país.

Como resultado de la tendencia del imperialismo a invertir capitales en las áreas fundamentales de la industria, se produjo un gradual desplazamiento de la manufactura de bienes de consumo no durables por las industrias dinámicas e intermedias, que crecieron a un ritmo dos o tres veces más que las tradicionales. Este fenómeno se reflejó en el número de obreros y de empleados ocupados en las diferentes ramas de la producción industrial. Mientras el proletariado de las industrias dinámicas se duplicó e inclusive se triplicó en ciertos países, la clase obrera de la industria ligera o liviana se estancó. El ritmo de aumento del número de obreros en la industria metal-mecánica y, en general, en la industria dinámica aumentó durante las décadas de 1950 y 60, pero comenzó a estacionarse en la década del 70 a medida que aumenta-

ba la composición orgánica del capital en favor del capital constante, que era la base para la expansión monopólica de este tipo de industria. El ritmo de crecimiento industrial entre 1960 y 1970 fue de 6,9% como promedio anual, según estadísticas de la CEPAL, 1972: en particular, se desarrolló impetuosamente la industria metalmecánica, duplicándose entre 1950 y 1978, mientras "la producción de acero aumentó 15 veces durante el mismo período".** La producción de bienes intermedios aumentó en el mismo lapso del 22 al 39% y la de bienes de capital y productos de consumo durable del 8 al 21% en los países más industrializados de América Latina y al 17% en el resto.***

La inversión de capital monopólico extranjero en la industria dio un nuevo carácter al proceso de la dependencia. Ya no se trataba solamente de que el imperialismo se apropiara de las materias primas básicas, sino de que también pasaba a ser dueño de las ramas fundamentales de nuestra industria. La burguesía industrial latinoamericana, dependiente desde sus inicios de la importación de maquinaria extranjera, se asoció al capital monopólico internacional que no solamente se conformaba con la venta de maquinaria sino que también pasó a controlar directamente la industria, a través de una inversión masiva de capitales. El imperialismo aprovechó la infraestructura energética y de transporte que habían creado los Estados latinoamericanos, a costa del sacrificio de nuestros pueblos, y las extenciones tributarias concedidas a la industria para instalarse sin mayores problemas en sus planes de expansión e internacionalización del capital, expresada ya en ese momento por un grado avanzado de transnacionalización de la economía. De hecho se dio una internacionalización del mercado interno de cada uno de los países latinoamericanos, acelerando nuestra integración forzada a la economía mundial. Este tipo de internacionaliza-

* ANIBAL QUIJANO: *Naturaleza, situación y tendencias de la sociedad peruana contemporánea*, mimeo, 1967.

** CEPAL: *Informe de 1979 del Secretario Ejecutivo Enrique Iglesias publicado en Revista "HOY"*, Santiago de Chile, 8 de enero de 1980, p. 38.

*** Cuadernos de la CEPAL, Santiago de Chile, 1973.

* "New York Times", 25-7-1942, citado por SILVIO FRONDIZI: "La realidad argentina", p. 137, Ed Ciencias Políticas, Buenos Aires, 1973.

ción del mercado interno, integrado al mundial, cuestionó de hecho la fórmula tan trajinada de centro-periferia.

Los países latinoamericanos de industrialización tardía —como Venezuela, Perú, Paraguay, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, con excepción de Cuba— iniciaron su proceso de sustitución de algunas importaciones en el momento en que el capital monopolístico internacional comenzaba a desplazar capitales a la industria. Por consiguiente, la burguesía nativa nació asociada al capital industrial foráneo. Si en los casos de industrialización temprana, donde había surgido una burguesía industrial con capitales criollos, se podía dudar de su carácter nacional, en los países de industrialización tardía no quedó ninguna duda acerca del carácter proimperialista de esta burguesía nativa. Por lo demás, la burguesía de los países de industrialización temprana estaba asociada desde hacía muchas décadas con el capital monopolístico internacional. A esa real expresión quedaba reducido el papel “progresista” que el reformismo le había asignado a la burguesía industrial latinoamericana.

Esta agudización de la dependencia se dio también en el plano político, al transformarse la O.E.A. en una especie de ministerio de semicolonias del Departamento de Estado Norteamericano, poco después del triunfo de la Revolución Cubana. No por azar, se trató de implementar la “Alianza para el Progreso”, a principios de la década del 60, por intermedio de la administración Kennedy, prometiendo 20.000 millones de dólares que, en definitiva, ni siquiera alcanzaron a generar el “colchón social” que se propiciaba para amortiguar la rebelión del campesinado.

América Latina se hizo más semicolonial-dependiente que nunca, porque el imperialismo no sólo siguió controlando las materias primas y la industria, sino que también logró, a través de los pactos militares y del estatuto supranacional de la OEA, alienar gran parte de nuestra soberanía nacional, como lo hemos señalado en nuestro libro “La Formación Social Latinoamericana

(1930-1978).

La actividad industrial pasó a convertirse en la base principal de la acumulación de capital, constituyendo una nueva forma de realización de la plusvalía en América Latina, distinta a la del anterior período agro-minero exportador. Como esta actividad fue implementada tanto por la burguesía criolla como por el capital monopolístico internacional, América Latina y el Caribe se convirtieron no sólo en proveedores de materias primas, sino también en mercado para la expansión de bienes de capital de las empresas multinacionales en las áreas más importantes de la industria.

De este modo quedaba cancelado el proceso de industrialización por sustitución limitada de importaciones, estimulado por la burguesía criolla, el Estado y los ideólogos cepalinos del desarrollismo. Como puede apreciarse, dicho proceso no sufrió el tantamentado “agotamiento” porque hubo una decisión de llevarlo hasta su plenitud por la clase dominante de nuestros países. Sin embargo, todavía subsistían en la década del 70 numerosas industrias livianas dedicadas a la elaboración de manufacturas para el mercado interno. Su crisis definitiva se iba pronto a producir con el nuevo modelo de exportación-importación impuesto por las transnacionales

El nuevo modelo de exportación-importación

Esta fase, que comienza aproximadamente a mediados de la década del setenta y se prolonga hasta la actualidad, se caracteriza por la abrupta implantación del modelo de exportación-importación, impuesto por la nueva división internacional del trabajo, y por el crecimiento cuanti-cualitativo de la deuda externa, problemas centrales que no fueron previstos por los ideólogos del desarrollismo, cuya teoría de hecho ha entrado en acelerada crisis.

El nuevo reajuste económico, dictado por las “necesidades” de la “lógica” del capital transnacional determinó, por un lado,

que la mayoría de los países latinoamericanos debía estimular el desarrollo de las industrias de exportación no tradicionales y, por otro, importar masivamente artículos manufacturados, aunque ello significara la quiebra de la industria liviana, que desde hacía décadas trabajaba para el mercado interno.

La aplicación de la nueva política económica de exportación-importación condujo a que una parte sustancial de los préstamos se invirtiera en importar artículos que bien pudieran fabricarse en nuestros países. Es decir que la “ayuda” en préstamos —que hizo crecer vertiginosamente la deuda externa latinoamericana— sirvió para amortiguar la crisis de sobreproducción, que durante la década del 70 tuvieron las naciones altamente industrializadas. De ahí la estrecha relación entre expansión crediticia-importaciones-acumulación capitalista multinacional, como expresión de la transferencia de valor de los países semicoloniales dependientes hacia los metropolitanos.

La CEPAL —que no previó este proceso, ya que afincaba su modelo de desarrollo en la sustitución de importaciones— tuvo que reconocer que en 1978 se incrementa en América Latina “el valor de las importaciones de 14.442 millones de dólares para los combustibles y de 25.304 millones de dólares para las importaciones de manufactura con respecto al valor que hubieran tenido a precios de 1970”*

Para ilustrar la trascendencia del monto de las importaciones mencionaremos por el momento sólo los casos de Argentina y Chile. En el primero, la importación de artículos manufacturados, bajo la dictadura de Videla, creció un 46,5% en 1979 y 41,5% en 1980. “De importar consumos —dice Antonio Elio Brailovsky— necesarios por la falta de una adecuada industria de base, el país pasó a importar bienes de consumo prescindibles: grabadores de Taiwan, juguetes de Hog-

* Cuadernos de CEPAL, Santiago de Chile, noviembre de 1981.

** ANTONIO ELIO BRAILOVSKY: *Historia de las crisis argentinas*, Ed. Belgrano, Buenos Aires, 1982, p. 197.

*** “ECO-SURVEY; Carta semanal, N° 976, 27 de octubre de 1980.

*** *CEPAL: *Las relaciones económicas externas de América Latina en los años 80*, Santiago de Chile, 1981, p. 36.

Kong, quesos de Holanda, galletitas de Alemania Federal, jamones de Suecia, arvejas de Canadá, tomates de España. Se pretendió que la industria argentina tenía que ser tan eficiente como para poder competir en condiciones ventajosas con todos los productos que se fabricaran en el mundo, los que, además, ingresaban a la Argentina con un doble subsidio: el de su propio gobierno —otorgado en todo el mundo a las exportaciones— y el que le proporcionaba nuestra país al mantener artificialmente sobrevaluado el peso.**

En Chile país utilizado como “conejiillo de Indias” para el experimento tanto monetarista de los “Chicago boys” como del modelo de exportación-importación las compras de artículos industriales foráneos aumentaron de 2.758 millones de dólares en 1974 a 5.680 millones en 1980***, tendencia que se ha mantenido en los trece años de dictadura militar pinochetista. Este ingreso masivo de manufacturas extranjeras aceleró la crisis de la industria llamada “nacional”. De ahí las protestas de los industriales que trabajaban con el mercado interno, quienes desde 1976, por boca de Orlando Sáez, presidente entonces de la Sociedad de Fomento Fabril, hicieron público su malestar por la entrada indiscriminada de manufacturas que hacían competencia a las elaboradas en el país. Impotentes para oponerse a la nueva relocalización industrial y al redespigüe de las transnacionales, los empresarios chilenos de la industria liviana optaron por convertirse, en buena medida, en importadores de artículos manufacturados, como los antiguos textiles Yarur y Sumar, y/o desplazar capitales a la industria de exportación no tradicional.

La CEPAL admitió que un porcentaje de las importaciones —a nivel de toda América Latina y el Caribe— “sobrepasa las necesidades efectivas y favorece los intereses generales y la rentabilidad de la empresa matriz”.****



Infantería de Río Grande
(1767)

Este modelo, generalizado a mediados de la década del 70, de acuerdo a la nueva división mundial del trabajo —probada con “éxito” en Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, etc.— provocó en casi todos los países de América Latina y el Caribe la quiebra de parte de la industria ligada al mercado interno, aunque en menor medida en países como Brasil, México y Argentina. De todos modos, se produjo una mayor concentración monopólica en el área de la industria liviana.

Paralelamente emergieron las industrias de exportación no tradicionales básicamente en el sector de la metalmecánica, petroquímica, agroindustria, minerales procesados, productos alimenticios elaborados. Por ejemplo, las industrias de exportación no tradicionales en México son las maquiladoras y la petroquímica; en Chile la metalmecánica, el óxido de molibdeno, la fruticultura las conservas, la petroquímica; en Venezuela, el

* Informe de la Sociedad de Fomento Fabril, Santiago, 1980.

aluminio y la metalmecánica; en Colombia, las flores y el carbón; en Costa Rica las maquiladoras del área de la electrónica, química y agroindustria; en Brasil las ramas electrónica, automotriz y metalmecánica; en Argentina también la automotriz, la petroquímica, agroindustria, alimentos procesados, curtiembre, material de transporte.

En estas industrias de exportación no tradicional se incrementó de manera decisiva la injerencia del capital monopólico extranjero, que en 1980 controlaba en América Latina más del 50% del capital industrial en general, y casi la totalidad de las industrias dinámicas de punta en particular.

Las inversiones directas norteamericanas en América Latina aumentaron de 13.811 millones de dólares en 1969 a 22.211 millones en 1975, según la CEPAL: “Estudio Económico de América Latina, New York, 1975”.

Esta variante de “crecimiento hacia afuera” es obviamente distinta a la del siglo pasado y primeras décadas del presente, fundamentada en la exportación de productos agropecuarios y mineros.

Con el fin de ilustrar el impetuoso avance de las industrias de exportación no tradicionales, nos permitimos señalar que en Brasil su porcentaje en el total de las exportaciones subió de 15,2% en 1970 a 29,9% en 1975. En Chile las exportaciones no tradicionales aumentaron de 750 millones de dólares en 1974 a 1.619 en 1980, es decir más del 35% del total, mientras las exportaciones tradicionales, constituidas básicamente por el cobre, crecieron sólo en un 18%. Este aumento de las exportaciones no tradicionales se ha expresado en el crecimiento del índice de producción industrial, sobre todo a partir de 1979 con un 124%, tomando como base 100 el año 1973.* En Venezuela, ingresaron entre 1975 y 1983 más de 5.000 millones de dólares por concepto de ventas de las industrias de exportación no tradicionales. Estos ingresos han aumentado notablemente en el último trienio debido al incremento de la producción de aluminio, que ha pasado a ser el

segundo rubro de exportación de Venezuela, con más de 2.000 millones de dólares al año,* vale decir más del 15% del total de las exportaciones, que básicamente están constituidos por el petróleo. La empresa estatal “VENALUM”, asociada con la multinacional Reynolds, donde laboran más de 2.500 obreros, es altamente competitiva en los mercados internacionales porque la clave para producir aluminio a bajo costo es la disponibilidad de energía. Venezuela tiene recursos fundamentales para tales efectos: bauxita, coque petrolero y energía eléctrica, como lo señalamos en nuestro opúsculo “Estado y estructura de Clases en la Venezuela contemporánea”. Otras industrias de exportación no tradicionales, como la petroquímica y algunas ramas de metal-mecánica, fueron estimuladas por el proyecto de desarrollo industrial aprobado por el gobierno venezolano el 28 de abril de 1981, condensado en 13 puntos “que servirán de base para la implementación de la segunda etapa industrial que se desarrollará a lo largo de los próximos 20 años, hasta el inicio del año 2.000”.*

Tanto en Venezuela, como en México y Brasil se ha acelerado la asociación del capital monopólico con el estatal a fin de desarrollar las industrias de exportación no tradicionales. Estos proyectos marcan la tendencia central del desarrollo industrial latinoamericano en los años que restan del siglo XX, estrechando así la relación entre la corporación transnacional, las burguesías criollas y el Estado llamado nacional.

Sin embargo, el incremento de las industrias de exportación no tradicionales en América Latina y el Caribe choca con las barreras proteccionistas establecidas por los Estados Unidos y Europa Occidental, luego del período más liberal de apertura de 1982 a 1984, que respondió a necesidades coyunturales del capital financiero. Precisamente, una de las principales peticiones de los presidentes latinoamericanos es que se abran esos mercados, señalando que no será posible pa-

* CODIPLAN, Revista Número, ver ejemplares de 1981 a 1986.

**Diario “El Nacional”, 29 de abril de 1981.

*** CEPAL; INFORME DE 1979, OP. CIT., PP. 33 Y 38.

gar los servicios de la deuda externa si no se obtienen más divisas a través del crecimiento de las industrias de exportación no tradicionales, hecho que no podrá efectivizarse si se mantienen las trabas aduaneras impuestas por el neoproteccionismo de los países altamente industrializados.

En el informe rendido por Enrique Iglesias a la CEPAL, como balance de la economía latinoamericana en 1979, se alertaba sobre el proteccionismo que estaban practicando los países denominados centrales. Así “tendería a limitarse la expansión de las exportaciones latinoamericanas y, en especial, la de algunas manufacturas en cuya producción ciertos países de la región han llegado a adquirir evidentes ventajas comparativas (...) hay riesgos en nuestras nuevas formas de inserción externa. Estos riesgos se manifiestan en los condicionamientos que tal vinculación impone a nuestro desarrollo, en el cambiante impacto del ciclo externo sobre la evolución de nuestras economías y en las políticas restrictivas y proteccionistas empleadas por los países industriales como una manera de defenderse frente a las tendencias recesivas e inflacionarias que han caracterizado a la economía mundial durante el último período”. **El neoproteccionismo se ha agravado en 1986 con las medidas adoptadas por la administración Reagan, que torpedean el desarrollo de las industrias de exportación de los países del “tercer mundo”, estimuladas en su momento por las propias transnacionales.

Como expresión del grado de dependencia, la producción y los precios de las materias primas se vieron constreñidos por la recesión económica mundial de mediados de la década del 70. Los precios de las exportaciones bajaron un 7% en 1975, mientras se elevaban geométricamente los de las maquinarias, bienes de capital e insumos. El descenso del valor unitario de las exportaciones y el alza de los precios de las importaciones causaron un deterioro del 16% en las relaciones de intercambio.

Los aumentos de los precios del petróleo también fueron un factor agravante de la crisis de los países latinoamericanos, con excepción de Venezuela, México y Ecuador. Por eso, a partir de la década del 70 y hasta 1982, en que bajan esos precios, hay que distinguir entre las naciones latinoamericanas productoras de petróleo y las importadoras del mismo, además de las que alcanzan sólo a autoabastecerse, como Argentina. Eso explica el auge económico transitorio de Venezuela y México, países que pudieron amortiguar hasta 1982, mejor que otros, la recesión económica de los años setenta. En Venezuela, por ejemplo, de 1975 a 1982, ingresaron más de 100.000 millones de dólares por la venta del petróleo, nacionalizado bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La renta petrolera evitó la crisis de coyuntura, pero dialécticamente agravó la crisis crónica de estructura de una economía basada en la explotación de un recurso no renovable. La baja de los precios del petróleo en 1982 puso de manifiesto las febles bases en que descansaba la economía de México, Venezuela y Ecuador.

El capitalismo agrario experimentó un notable impulso con el crecimiento de la industrialización, especialmente en el área de la agroindustria, elaboradora de materias primas del campo. Se dio, así, una integración de los procesos productivos agropecuario e industrial bajo el comando del capital industrial, que adquirió un carácter francamente oligopólico, predominando las empresas transnacionales, asociadas al capital criollo. Se entremezclaron entonces la burguesía agroindustrial con la agrocomercial y con la burguesía agropecuaria propiamente tal, controlando desde la producción hasta la elaboración y comercialización de los productos del campo.

Si bien es cierto que el proceso de sustitución limitada de importaciones dio un importante impulso a la agricultura, en los hechos ésta ha quedado subordinada a las áreas más dinámicas de la economía, en particular a los oligopolios agroindustriales, subordinación que también se expresa en el régimen desigual de transacciones y compraventas entre el sector agrícola y el industrial, determinando una mayor transferencia de va-

lor, que en el pasado, del área rural al sector financiero e industrial exportador.

Este desarrollo del capitalismo agrario ha cambiado en parte sustancial las relaciones de producción. La concentración del proletariado y semiproletariado rural en aumento impetuoso se da tanto en las grandes haciendas como en las medianas, a través de un nuevo sujeto social: el contratista, que se hace cargo -con su propio personal- de la siembra, arado y recolección de la cosecha. En algunos países, como Venezuela, el Estado tiene una participación decisiva en el "área reformada", es decir la afectada por la reforma agraria, proporcionando a los pequeños propietarios tractores, semillas y créditos con la condición de que toda la producción sea destinada a la empresa agroindustrial.

Aparece como contradictorio que un continente apto para la agricultura haya incrementado en términos globales la importación de productos alimenticios, lo que hace muy vulnerable a varios países latinoamericanos en materia de alimentación cuando baja el ingreso de divisas, debido al descenso de la demanda y los precios de las exportaciones. La especialización en monocultivos dedicados a las empresas exportadoras agroindustriales, descuidando la producción agrícola para el consumo popular, se presentará con gravedad a corto plazo ya que nuestra población se duplicará hacia el año 2.000, bordeando los 600 millones de personas.

Industrias de Exportación no Tradicionales y Crisis Ecológica.

La puesta en marcha de la industrialización asociada al capital financiero internacional fue uno de los principales desencadenantes de la crisis ecológica de América Latina y el Caribe.

El proceso de urbanización significó un aumento de las actividades no sólo industriales sino también comerciales, bancarias y de la construcción, generando graves problemas de transporte, comunicaciones y vivienda. Los ruidos, la basura y la contaminación del aire y de las aguas fueron la expresión de un proceso profundo de crisis ambiental. Las

nuevas pautas del consumismo, impuestas por la transnacionalización de la economía, aceleraron el gasto energético, promoviendo la adquisición de los más variados y superfluos artefactos eléctricos, como lo hemos demostrado en nuestro libro "Hacia una Historia del Ambiente en América Latina".

La crisis ambiental se ha agravado durante la última década a raíz de la instalación de industrias altamente contaminantes y de reactores nucleares por parte de las transnacionales, que desplazan dichas industrias de las metrópolis imperialistas a las naciones del "tercer mundo", con el fin de obtener mejores tasas de ganancia y, al mismo tiempo, acallar en esos países los movimientos ecologistas de protesta.

Se ha producido así un redespiegue o relocalización de industrias contaminantes, aprovechando que en nuestros países no existen reglamentaciones precisas como en Europa y Estados Unidos. "Para muchas industrias resulta ya más fácil y barato trasladarse a los países en desarrollo, que instalar el costoso equipo para controlar la contaminación, que sería necesario de continuar en sus países de origen". * Calcagno y Jakobowicz sostienen que en los países altamente industrializados "en el período 1973-79 el 6% de las inversiones en el sector industrial estaban destinadas a luchar contra la contaminación. Este porcentaje era de 22% para los metales no ferrosos, 17% para los metales primarios, 14% para el acero y 16% para el papel (...). Las empresas que actúan como productores en los países subdesarrollados evitan tales gastos al precio de un deterioro del medio ambiente en esos países. **

Las naciones altamente industrializadas están convirtiendo a nuestros países en depósitos de productos tóxicos sólidos y en basureros nucleares. Asimismo, se ha iniciado en varias naciones latinoamericanas la instalación de reactores nucleares por parte de

* A.E. Brailovsky y Dina Foguelman: "Corporaciones multinacionales y medio ambiente", ponencia al Seminario organizado por PNUMA, ILDIS, CLACSO y MNRNR, Cumaná (Venezuela), octubre 1980, p.19.

** A.E. Calcagno y J.M. Jakobowicz: *El monólogo Norte-Sur y la explotación de los países subdesarrollados, Siglo XXI editores, México, 1981, p. 89.*

Alemania Federal, a pesar de la oposición de Estados Unidos. Una importante respuesta ecológica protagonizaron los trabajadores mejicanos del Centro Nuclear de Salazar al condensar en un documento de 1980 los peligros radiactivos que estaban sufriendo.

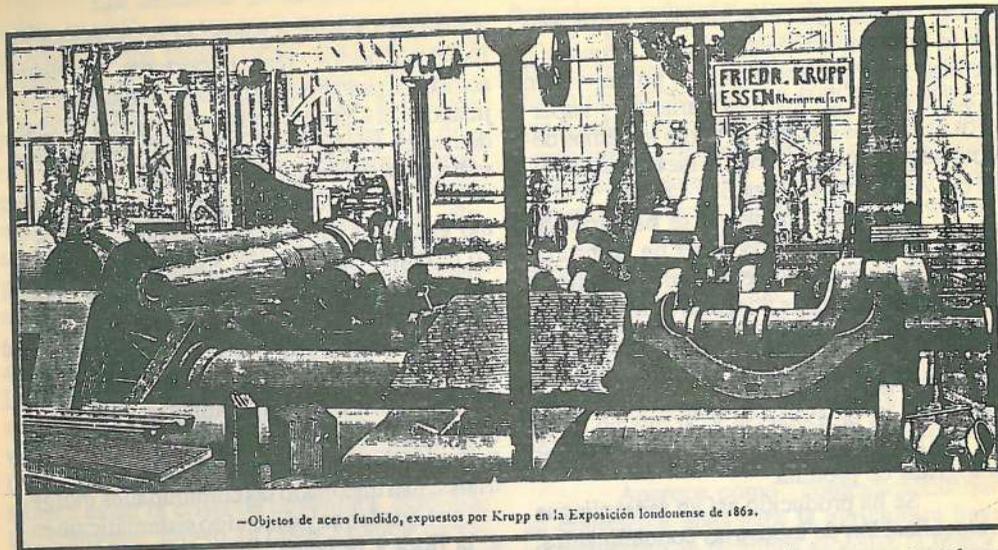
La deforestación continúa a un ritmo galopante en nuestra América: entre 5 y 10 millones de hectáreas anuales. Uno de los mayores ecocidios es la devastación de la selva amazónica, el principal abastecedor de oxígeno del mundo. Las transnacionales, asociadas a las burguesía local, han invadido la selva amazónica en busca de minerales, de madera y de nueva tierras para la explotación y exportación de productos ganaderos y agroindustriales; han diezmado las comunidades indígenas que quedaban y destruido sistemáticamente la flora y la fauna. Esta devastación -que ha dado al "desierto rojo del Amazona"- ha modificado el funcionamiento de los ecosistemas, cambiando sustancialmente el régimen de lluvias, al punto que el desbordamiento de los ríos alcanza al noreste argentino.

Al mismo tiempo, la contaminación del aire ha llegado a un punto crítico en la mayoría de las grandes ciudades, algunas de las cuales, como San Paulo, han sido declaradas en estado de emergencia por miles de toneladas de gases de monóxido de carbono expedido por millones de vehículos y miles de industrias. En 1985, destacados investigadores mejicanos advirtieron que las posibilidades de vivir en ciudad de México no pasarán más allá del año 2.000.

A este deterioro han "contribuido" de manera exponencial las industrias de exportación no tradicionales.

Las Exportaciones no Tradicionales y la Deuda Externa

La llamada "modernización", fundamentada en el estímulo a las industrias de ex-



—Objetos de acero fundido, expuestos por Krupp en la Exposición londinense de 1862.

portación, está íntimamente ligada al crecimiento cuanti-cualitativo de la deuda externa porque, por un lado, ciertos préstamos fueron empleados para promover este tipo de industria y, por otro lado, se está presionando el pago de los intereses y amortizaciones a las posibilidades de crecimiento de las industrias de exportación no tradicionales.

Esta relación entre deuda externa y desarrollo de las industrias de exportación no fue advertida a tiempo por aquellos sectores económicos y políticos que basaban su modelo de desarrollo en la industrialización por sustitución limitada de importaciones. Parece increíble, pero es cierto: los ideólogos del desarrollismo no tomaron en cuenta en sus planes el proceso acelerado de endeudamiento externo, que además está decir no era un fenómeno nuevo.

Durante toda nuestra historia republicana hemos tenido que soportar el peso de una deuda externa, cuyos servicios se llevaron en el siglo pasado entre el 20 y el 30 por ciento de las exportaciones, porcentaje que subió al 40 en el siglo XX y a más de 60 en el decenio 1975-85, como creemos haberlo probado en nuestro trabajo: "Historia de la Deu-

da Externa Latinoamericana y entretelones del endeudamiento argentino". Es decir, toda la historia latinoamericana está cruzada por la variable principal de la deuda externa, como factor mediatizador del proceso de acumulación interna. En 1955 su monto ascendía a 4.036 millones de dólares, cifra que subió a 12.000 millones en 1965*. El servicio de la deuda externa aumentó de 454 millones de dólares en 1956 a 1.980 millones en 1967, totalizándose en dicho período 8.578 millones de dólares por dicho concepto.

La deuda externa siguió aumentando de manera exponencial, de 107.280 millones de dólares en 1977 a 389.216 millones a fines de 1985. No obstante haberse pagado intereses por un 57% de la deuda en ese lapso, la misma aumentó en un 34%. En 1969 se pagaban 2.500 millones de dólares de intereses; en 1985, la sideral cifra de 32.400 millones.

Los servicios de la deuda externa, las importaciones indiscriminadas, las remesas enviadas al exterior por las multinacionales y la fuga masiva de capitales de la burguesía criolla convirtieron a nuestros países en retroalimentadores de la economía imperialista. La Reserva Federal de los Estados Unidos

reconoció en 1985 que los capitales depositados por los latinoamericanos en los bancos de ese país alcanzaban a 208.000 millones de dólares y cerca de 90.000 millones en bancos europeos, es decir más de los 2/3 de la deuda externa de América Latina y el Caribe.

Desde mediados de 1986 se ha comenzado a implementar la denominada "capitalización de la deuda", según la cual los bancos acreedores se harían cargo de la deuda externa, exigiendo en cambio que los activos de las principales empresas del Estado pasen a manos del capital financiero internacional; ni qué decir de la estafa que significa la compra de bonos de la deuda externa a menos de la mitad de su valor. De este modo, se está consumando la desnacionalización casi total de las riquezas de nuestra América.

El salto cuanti-cualitativo de la deuda externa ha determinado un cambio significativo en el carácter de la dependencia. A la enajenación de gran parte de nuestras riquezas, que desde fines del siglo pasado comenzaron a ser copadas por el capital monopólico extranjero, se suma ahora una deuda, de por sí impagable, que refuerza las relaciones de dependencia y nos subordina de un modo nuevo al capital financiero. La dependencia actual no se reduce al intercambio desigual del comercio de exportación e importación y al control de las materias primas e industrias, sino que también se expresa en la alienación de las monedas nacionales, al servicio de una economía mundial "dolarizada" y en una deuda tan fabulosa que compromete la soberanía nacional, hipotecando indefinidamente nuestras exportaciones y riquezas básicas. Actualmente, el capital transnacional se lleva más dólares por concepto de servicios de la deuda externa que lo remesado por ganancias de su capital invertido en el área productiva.

Las implicancias enajenantes provocadas por el proceso de endeudamiento replantean en un nuevo contexto la Cuestión Nacional. Se impone, por consiguiente, superar esquemas tradicionales de análisis y agitación —que sólo ponían el énfasis en la nacionalización de las empresas extranjeras— incorporando la deuda externa a la cuestión nacional. Habría que buscar las razones por las

cuales la deuda externa nunca fue integrada por la izquierda latinoamericana a la cuestión nacional, siendo que durante el siglo pasado sus servicios de amortización e intereses ya demandaban entre el 25% y el 30% de las exportaciones y en la primeras décadas del presente más del 40%. Quizá una de las razones fundamentales haya sido su concepción eurocéntrica, expresada en la copia del esquema europeo de formación y desarrollo del Estado Nacional, sin advertir que en nuestra América Latina la cuestión Nacional está planteada ya con la ruptura del nexo colonial hispanolusitano. Fuimos desde entonces naciones con historia, mal que le pese a los neohegelianos, con una historia y un Estado particulares, aunque sin mercado interno integrador de la economía nacional durante el siglo pasado ni "cultura única", requisitos que además de la lengua y el territorio se exigen de modo formal para considerar un país como Estado-Nación. El desarrollo multilineal de la historia muestra que no siempre una nación tiene una misma cultura; en un Estado pueden coexistir varias culturas paralelas a la oficial, como las de los indígenas y negros de América Latina y el Caribe.

Superviven corrientes de pensamiento que siguen considerando la cuestión nacional desde un punto de vista psicológico cultural o de una controvertida identidad nacional. Algunos de estos aspectos parciales deben ser integrados a una concepción global del problema nacional, con un enfoque de clase. Esta perspectiva política no significa diluir la cuestión nacional en los problemas de clase —como ocurrió con los anarquistas y marxistas latinoamericanos de las primeras décadas del siglo XX— sino que la lucha de clases, y no la unidad nacional en abstracto, es la única posibilidad de solucionar los problemas de las minorías oprimidas y la dominación colonial. Si es un error caer en el reduccionismo de clase, subestimando el problema nacional, más grave es aún contemplar sólo la variable nación, ignorando las contradicciones de clase.

La Cuestión Nacional en América Latina y caribeña ha cobrado en el presente siglo una dimensión nueva con el crecimen-

* Dragoslav Avramovic: *Economic Growth and External Debt*, John Hopkins Press, USA, 1964, p. 104. Además, ver BIRF: *External Public Debt, Past and Projected Amounts Outstanding. Transactions and Payments*, USA, enero 1969.

to cuanti-cualitativo de la deuda externa. No basta con repetir viejos dogmas, sino que es necesario comprender la incidencia de la internacionalización del capital y de la transnacionalización bancaria en los países dependientes semicoloniales para abordar de manera creadora la cuestión nacional. A las antiguas y siempre permanentes consignas de nacionalización de las empresas extranjeras y ruptura de los pactos económicos y militares, alienantes de la soberanía nacional, se suma ahora una tarea antiimperialista nueva: el no reconocimiento de la deuda externa.

El Estado llamado Nacional es cómplice de este proceso de enajenación de las riquezas de nuestros países. Sin dejar de ser distribuidor de la renta nacional en beneficio de las diversas fracciones de la clase dominante, se ha convertido no sólo en "empresario" y organizador de la producción, sino también en el único aval ante la banca transnacional, llegando a hacerse cargo de los préstamos otorgados a las empresas privadas latinoamericanas.

La "contribución" de América Latina a la acumulación capitalista mundial —que se remonta a la época colonial— adquiere nuevas características con la agudización de la deuda externa. Las remesas de utilidades enviadas por las transnacionales a sus casas matrices, la especulación monetaria sin precedentes en la historia, los servicios fabulosos de la deuda externa y la fuga de capitales criollos juegan más que en pasado el papel de retroalimentadores de la economía norteamericana, japonesa y de Europa occidental, "contribuyendo" una vez más, de manera forzada, a la acumulación originaria permanente en esta historia de cinco siglos de colonialismo. Estos hechos objetivos constituyen un rotundo mentís a quienes teorizaron con vana suficiencia sobre el origen y desarrollo básicamente endógeno y autónomo del capitalismo europeo y norteamericano, ocultando de manera mistificadora la magnitud del aporte de los países coloniales y semicoloniales a la acumulación constante de capital. Sin esa "contribución", el capitalismo de los países metropolitanos no habría esta-

do en condiciones de consumir tan rápidamente sus tres revoluciones industriales. Tampoco habría podido remontar sus crisis económicas sin la explotación de su propio proletariado y la de los pueblos asiáticos, africanos y latinoamericanos. Como decía Marx en su estudio sobre la acumulación originaria: el capital prosigue su conquista del mundo "chorreando sangre y lodo por todos los poros, de la cabeza a los pies".

La magnitud de la deuda externa en la última década y su impacto en la economía de nuestros pueblos ha motivado ya importantes reflexiones teóricas. Sin embargo, carecemos aún de una teoría propia de la Economía Política Latinoamericana que pueda dar cuenta de la especificidad de este subcontinente.

Así como no tenemos una teoría de la historia de nuestras sociedades, de sus períodos de transición, de las particularidades de la relación etnia-clase en estas tierras indioafro-latinas, de los particulares modos de producción y formaciones sociales, del origen y desarrollo de las clases, de la conciencia de clase y de la especificidad de nuestra lucha de clases, de la formación y desarrollo del Estado Nacional, tampoco contamos con una Economía Política capaz de analizar el complejo y multifacético desarrollo de América Latina y el Caribe, en especial la importancia de la deuda externa como factor permanente obstaculizador del cambio y mediatizador del despegue económico.

La reiterada "inspiración" en el modelo europeo de desarrollo ha bloqueado a la mayoría de nuestros investigadores, impidiendo la formulación de un análisis teórico de las especificidades de nuestra América. Y si no ¿cómo explicarse el fenómeno insólito de haber ignorado durante un siglo la importancia del endeudamiento mundial como uno de los factores clave del proceso de acumulación de capital y la deuda externa latinoamericana como uno de los principales obstáculos al avance de nuestra economía?. "Ni calco ni copia", aconsejaba Mariátegui. debemos asumir el desafío de generar hipótesis de trabajo nuevas que permitan analizar en profundidad

las especificidades de América Latina y el Caribe.

Cambios en la estructura de clases provocados por el nuevo modelo de importación-exportación.

El desarrollo de las industrias de exportación no tradicionales, bajo el control del capital financiero transnacional, ha provocado importantes transformaciones en la estructura de clases de América Latina y el Caribe, tanto en el sector dominante como en el explotado.

En el bloque de poder de la clase dominante han pasado a ser hegemónicos dos sectores claves: la burguesía emergente ligada a las exportaciones no tradicionales y el sector financiero asociado a la banca transnacional. La redistribución de los créditos en favor de la burguesía promotora de las industrias de exportación no tradicionales ha provocado roces intra-clase entre este sector y los dueños de las empresas manufactureras que desde hace décadas vienen trabajando con el mercado interno. Esta fracción de la burguesía industrial también protesta por la entrada indiscriminada de artículos manufacturados extranjeros que hacen competencia a los que ella tradicionalmente fabricaba. A la base de los roces interburgueses producidos últimamente en la mayoría de los países latinoamericanos está, sin duda, el acelerado proceso de implementación del nuevo modelo exportación-importación.

También se han registrado choques entre los exportadores agropecuarios tradicionales y la burguesía industrial y agroindustrial exportadora, no sólo por el reparto de los créditos sino también por la retención de un porcentaje de las exportaciones que sufre por parte de los gobiernos el sector agroexportador tradicional, mientras que los nuevos sectores industriales gozan del privilegio tanto de aranceles como de la no retención de porcentaje alguno de sus exportaciones.

En síntesis, la hegemonía que ha pasado a tener la burguesía financiera e industrial ligada a las exportaciones no tradicionales —y ambas fusionadas con las multinacio-

nales— cambió la correlación de fuerzas en el bloque de poder de la clase dominante, fenómeno que plantea un nuevo tipo de contradicción secundaria interburguesa, distinta a la del anterior período de emergencia de la industria de sustitución limitada de importaciones. Procesar adecuadamente el alcance de estos roces, agudizados por el peso específico de la oligarquía financiera, facilitará la comprensión de las polémicas y disputas por el poder entre las tendencias que se están dando, tanto en los partidos burgueses como en las Asociaciones patronales, e inclusive en otras instituciones de gran peso corporativo: la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas.

Paralelamente se han producido significativos cambios en la composición del proletariado latinoamericano. El número de obreros de la industria liviana ha disminuido, mientras ha crecido el de la industria dinámica y de punta, especialmente el del sector de las industrias de exportación no tradicionales. La cantidad de trabajadores aumentó en estas ramas durante el último decenio, pero la tendencia indica que no se mantendrá ese ritmo de crecimiento, dada la composición orgánica del capital en favor cada día más creciente del capital constante.

El correlato político que tiene esta modificación en la composición del proletariado industrial para cualquier estrategia de cambio social revolucionario es fundamental. Por eso llama la atención que los partidos de izquierda no hayan calibrado la importancia que tiene el moderno proletariado de las industrias de exportación no tradicional. La movilización de dicho sector será clave no sólo para un eventual proceso de cambio del sistema capitalista sino también para el inicio del período de transición al socialismo.

Otro notorio cambio se ha producido en el sector de los trabajadores del campo. El desarrollo del capitalismo agrario y agroindustrial, especialmente el dedicado a la exportación de nuevos productos, ha provocado un notable crecimiento del proletariado rural, empleado por las haciendas y los contratistas que se están haciendo cargo de la producción. Gran parte de estos obreros no viven en el

campo, sino en las ciudades medianas y pueblos de la zona rural. Viajan por la mañana a trabajar en la empresa agrícola, como si fuera una fábrica, y retornan por la tarde al pueblo. Este tipo de vida cotidiana —además de la relación de producción— los acerca más al proletariado urbano que al campesinado.

El crecimiento del proletariado rural, que también ha cambiado en cuanto a su composición de sexo ante la masiva integración de la mujer a las empresas capitalistas, no sólo facilita la alianza obrero-campesina, sino que también permite una mayor difusión de políticas de colectivización. Por consiguiente, en el campo latinoamericano ya no sólo es factible plantear la tarea democrático-burguesa de reparto de la tierra, sino también la tarea socialista de colectivización, a través de la socialización de las empresas agropecuarias de mayor desarrollo capitalista.

El cambio de la composición de sexo en las labores agrícolas asalariadas es relevante en las nuevas agro-industrias de exportación. En Chile, por ejemplo, la fruticultura —que bordea el 20% de las exportaciones agropecuarias— ocupa decenas de miles de mujeres en labores que antes se consideraban masculinas, aunque la mayoría de las trabajadoras son para las labores de temporada, cuyas faenas duran unos cinco meses al año. Ximena Aranda sostiene que sólo en la zona de Putaendo “La superficie en parronales ha crecido en 6.000 hectáreas, lo que significa una demanda de mano de obra de cerca de 25.000 trabajadores. Igualmente se han ampliado las plantas de tratamiento. Se estima que existen veinte embaladoras y seis plantas mayores o procesadoras. Esto ha aumentado el número de empleos femeninos; solamente en los parronales trabajan alrededor de 5.000 mujeres durante la temporada (...) La proletarización de la mujer aparece como una exigencia esperada en un marco de pobladores ru-

rales de proletarización reciente. Esta condición de proletarización reciente está avalada tanto por el número de migraciones de los hombres jefes de hogar —migrantes de retorno— como por residir en la periferia del pueblo, en poblaciones de emergencia y campamentos”.*

En Colombia, en la década del 70 se inicia el auge de una nueva industria de exportación no tradicional: las flores. En 1978 se exportaban 26.000 toneladas de flores por un valor de 53 millones de dólares, mediante el trabajo de 25.000 operarios, de los cuales la mayoría eran mujeres. Al principio, las mujeres eran reclutadas en las zonas agrícolas de la Sabana de Bogotá. Pero después “algunos empresarios se vieron en la necesidad de reclutar mujeres urbanas que eran y siguen siendo transportadas desde Bogotá hasta los cultivos”***

En esta industria capitalista de flores, las obras de infraestructura son realizadas por los hombres, especialmente los sistemas de riego, construcción de invernaderos y preparación de la tierra. “En la producción y el cuidado permanente de la flor se emplea casi exclusivamente mano de obra femenina, excepción hecha de la fumigación que es efectuada por unos pocos varones. Las mujeres entonces desbotonan, encauchan, peinan, cortan, seleccionan y clasifican la flor (...) En síntesis, las mujeres ejecutan las actividades que implican una mayor destreza manual (...) Esta mano de obra femenina, a pesar de transferir una habilidad manual, no es considerada calificada; además, se la atribuye con un pago inferior a su equivalente masculino dentro de la industria”**** demás estaría decir que la supervisión del trabajo es siempre hecha por los hombres. “La reciente participación de la mujer campesina en el marco laboral —sostiene Alicia Eugenia Silva— y con ella su separación de la parcela, está configu-

* Ximena Aranda B.: “El díptico campesino — asalariado agrícola”, en Magdalena Leon: *Las Trabajadoras del agro*, ACEP, Bogotá, 1982, tomo II, pp. 162 y 163.

** Alicia Eugenia Silva: *De la mujer campesina a la obrera florista*, en Magdalena Leon: *La realidad Colombiana*, op. cit., t.I, p. 34.

*** Ibid., t I, p. 35 y 36.

rando una nueva forma de trabajo doméstico cuya organización y ritmo se encuentran subordinados a la jornada laboral capitalista”.*

Este cambio en la composición de sexo en los trabajos agrícolas asalariados ha tenido un fuerte impacto en las relaciones intra-pareja, consolidándose el proceso de autonomía e identidad de la mujer en su larga marcha por la conquista de derechos igualitarios.

La transformación en la composición de sexo del proletariado también se está dando en las industrias de explotación, como es el caso de México con las maquiladoras o plantas de ensamblaje de artefactos eléctricos y electrónicos, plásticos y juguetes. Las empresas transnacionales contratan mayoritariamente mujeres para estas maquiladoras por el tipo de trabajo minucioso que requieren: “Las mujeres contratadas por las maquiladoras fronterizas (estado Juárez) o por plantas de ensamblado semejantes no compiten contra el proletariado no calificado varonil, simplemente porque las operaciones que aquellas se han de realizar, de alguna manera, diseñadas para un contingente de trabajo con características ‘femeninas’ (...) Desde esta perspectiva, las mujeres no forman un ejército de reserva industrial a no ser que este término se aplique en relación a ellas mismas (...) La sofisticación tecnológica y de diseño tienden a centralizarse en los países hegemónicos, mientras las operaciones tediosas y mal remuneradas pueden ser exportadas a zonas periféricas o semiperiféricas como la frontera mexicana (...) Este proceso revela cierta tendencia hacia la ‘femenización’ del proletariado internacional”.**

Las maquiladoras también se han asentado sólidamente en Costa Rica a partir de 1980 en el área de la química, electrónica, textiles y agroindustria, con un grado de pro-

*Ibid., t. I, p. 41.

** María Patricia Fernández: *Las maquiladoras y las mujeres en ciudad Juárez, México, para-dojas de la industrialización bajo el capitalismo integral*, en Magdalena León: *Sociedad, subordinación y feminismo*, ACEV, Bogotá, 1982, t. III, p. 149 y 150.

*** Laura Guzman Stein: “La industria de la maquila y la explotación de la fuerza de trabajo de la mujer: el caso de Costa Rica”, en revista “desarrollo y Sociedad”, CEDE, Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, N° 13, enero 1984, p. 172.

ductividad casi similar al de los Estados Unidos. La absorción de mano de obra femenina en dichas maquiladoras ha determinado un aumento de la mujer en el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) de un 14% en 1950 a un 26,3% en 1982, según la Encuesta Nacional de Hogares. Las mujeres, especialmente entre los 16 y los 22 años, trabajan en dos turnos; también hacen trabajo a destajo y “a través de los contratos con cooperativas o empresas autogestionarias de mujeres”.*

Finalmente, cabe destacar el crecimiento de las capas medias asalariadas en el sector de las industrias de exportación, que requieren personal especializado en computación, maquinarias electrónicas, contabilidad, telex, etc. Una vez más es necesario remarcar la distinción entre la pequeña burguesía —propietaria de algún medio de producción o de comercio— y las capas medias que sólo viven de la venta de su fuerza de trabajo. Este nuevo contingente de asalariados —que indudablemente forman parte de la clase trabajadora y no de la pequeña burguesía— está realizando en algunos países acciones conjuntas con los obreros de la misma empresa. Este cambio en el comportamiento del sector de empleados se debe a que su sistema de trabajo ha cambiado. Las grandes oficinas, en las que se concentran centenares de empleados, se parecen cada día más a las fábricas. Ha desaparecido el trato paternalista del viejo patrón sentado en su escritorio al lado de la secretaria, afianzándose la relación impersonal con los altos jefes y ejecutivos.

El caso argentino: la viga maestra de la política económica del gobierno de Alfonsín

La composición política ha critica-

do el Plan Austral en los aspectos relacionados con la política monetarista y crediticia, la inflación, la privatización y el curso recesivo de algunas áreas de la economía. Además de su estrategia negociadora sobre la deuda externa, nosotros creemos que la columna vertebral de la política económica del gobierno de Alfonsín es el estímulo creciente a las industrias de exportación no tradicionales.

Aunque con retardo respecto de otros países de América Latina, como Brasil y México, las industrias de exportación comenzaron a implementarse en Argentina durante el gobierno de Onganía.

El anterior modelo de industrialización por sustitución limitada de importaciones, con una débil composición orgánica del capital, signada por la preponderancia del capital variable, fue paulatinamente reemplazado —aunque no agotado ni menos eliminado— por otro, que puso el acento en las inquietudes de punta (automotriz, petroquímica, metalmecánica), de acuerdo a la nueva división internacional del trabajo. Así se profundizó la asociación del capital criollo con el capital monopólico extranjero, especialmente norteamericano, para implementar el nuevo tipo de desarrollo industrial dependiente.

Al margen de las diferencias que tengamos con la política económica que ha preconizado y preconiza Aldo Ferrer, nadie podría desconocer que fue uno de los primeros en percibir este proceso en el mismo momento que ocurría, advirtiendo sobre la “gravitación creciente de la empresa extranjera, a partir de principios de la década de 1950, cuando las industrias dinámicas adquieren el papel hegemónico en el sector industrial y en el conjunto de la economía nacional (...) es el núcleo de desarrollo en torno al cual se articula el sistema de decisiones de asignación de recursos, el cambio tecnológico, la acumulación de capital, la distribución del ingreso y el reparto del poder económico”.*

* Aldo Ferrer: *La economía argentina, Fondo de cultura económica, 8a. Edición, México, 1973, p. 272.*

** J. Abot, M. Abramson, M. Chorno, E. Fariña y otros: *El poder económico en la Argentina, CICSO, Buenos Aires, 1973, p. 14.*

Al desarrollismo de la llamada industria “nacional” de tipo liviano o ligero, elaborada de artículos de consumo popular, le sucedió el desarrollismo industrial dependiente del capital monopólico destinado a “modernizar” —ya entonces— la producción argentina y adaptarla al nuevo modelo de acumulación capitalista mundial. En 1963 las ramas industriales altamente concentradas —que en gran medida pertenecían al tipo de industria dinámica emergente— producían el 59,4% del total, siendo extranjeras en su mayoría.** Su hegemonía se consolidó con la inversión de 300 millones de dólares anuales, de aquel entonces, durante el gobierno de Frondizi.

Esta tendencia industrial se aceleró bajo el gobierno de Onganía, que redistribuyó una parte sustancial de la renta nacional en favor de la burguesía industrial criolla asociada al capital extranjero.

Esto explicaría en parte la presión de la burguesía agroexportadora para que otros sectores militares reemplazaran a Onganía, que de hecho fue continuista de Frondizi en cuanto a la política económica.

Ese giro industrial preparó las condiciones para el despegue del modelo de acumulación basado en las industrias de exportación no tradicionales, que del 6% de las exportaciones en la década del 60 pasaron al 25% a mediados de los años setenta.

Según Víctor Testa —uno de los primeros economistas en detectar el estímulo a las industrias de exportación— en 1967 “Krieger Vasena modificó las paridades cambiarias de manera de favorecer las exportaciones de productos industriales (...) luego, esa política se continuó con mayor énfasis a través de los incentivos tributarios a la exportación (...) los reintegros impositivos que hizo el Estado entre 1966 y 1971 equivalen al 12% del desequilibrio general de la Tesorería en ese período, y lo que es más sintomático al 32% de la inversión física realizada por el Estado nacional en el mismo lapso. Es decir

que el Estado ha soportado un enorme sacrificio financiero en los últimos años, retardando o renunciando a inversiones impostergables en la infraestructura económica y social para impulsar las exportaciones industriales”.* El mismo autor sostiene que a pesar de los decretos favorables a la inversión extranjera, promulgados por los gobiernos de Frondizi y Onganía, el promedio de capitales ingresados del exterior no pasó de 50 millones de dólares anuales entre 1958 y 1972, de lo cual deduce que “las empresas extranjeras lograron apoderarse de una parte sustancial del aparato productivo nacional casi sin aportar dinero”.**

En diciembre de 1976 decía un ensayista del Suplemento Económico de “Clarín” que los exportadores extranjeros más importantes “abarcan los ramos automotriz, curtiembre, siderúrgico, máquinas de oficina, químicos y farmacéuticos”.*** El mercado de estos productos industriales —a los cuales habría que agregar grasas, aceites, pieles, material de transporte, textiles y alimentos procesados— estaba constituido en lo fundamental por los países latinoamericanos. Fue la época del despegue de las empresas agroindustriales, petroquímica, automotriz y metalmecánica. En 1973 sólo diez firmas controlaban el 30% de las exportaciones industriales, de las cuales cuatro eran extranjeras.

Este proceso tenía su contraparte: la importación casi indiscriminada de artículos manufacturados. El modelo de exportación-importación, ya analizado en páginas anteriores, provocó en la Argentina la quiebra de numerosas industrias que trabajaban con uno de los mercados internos más importantes de América Latina. Este fenómeno se agravó, bajo el tercer gobierno peronista, que borró con una mano lo que había promovido con la otra durante su primera gestión en cuanto al fenómeno de la industria de sustitución de las importaciones. Mas los tiempos habían

* Víctor Testa: *Aspectos económicos de la coyuntura actual (1973-75), Cuadernos de CICSO, Buenos Aires, 1976, p. 42.*

** *Ibíd.*, p. 19.

*** “Clarín”, Bs As. 19 de diciembre de 1976

**** Víctor Testa: *Aspectos... op. cit.*, p. 42.

cambiado y era obligatorio plegarse a la “lógica” del capital transnacional.

En el estudio de coyuntura de los años 1973 y 1975, hecho por Víctor Testa, se afirma el énfasis del gobierno Juan Perón-Isabel Perón respecto de la industria fue puesto en los productos de exportación, pero el balance arroja como resultado que “el incremento de las exportaciones se correlaciona directamente con un incremento de las importaciones por parte de las mismas empresas promocionadas hasta anular totalmente el posible efectivo para la balanza comercial. Esta última conclusión coincide con las sospechas de que las empresas multinacionales están dispuestas a exportar desde los países en desarrollo, pero sólo en la medida que obtienen suficientes privilegios impositivos y cambiarios (...) Los planes oficiales (del tercer gobierno peronista) se limitaron a mantener y perfeccionar el programa de incentivos tributarios, a apoyar las misiones y a aumentar el monto del crédito disponible para estas operaciones” ****

Si bien es cierto que la burguesía agraria fue capaz de entremezclarse con la industrial durante el proceso de sustitución limitada de importaciones, los cambios generados por la nueva división internacional de trabajo promovieron el surgimiento de una nueva burguesía industrial asociada al capital monopólico, con el auge de las industrias de exportación, el papel creciente del capital financiero y las importaciones masivas de artículos manufacturados y de bienes de capital.

Estas nuevas fracciones burguesas, estrechamente ligadas al capital estatal, aceleraron la crisis de hegemonía de los terratenientes, contradicciones interburguesas que estuvieron en la base de los reiterados golpes militares y de la inestabilidad política, sin que se definiera con nitidez el sector hegemónico en el bloque de poder. Este empate intralase en relación con las diferentes vías de

acumulación tuvo un correlato político que por momentos pareció tener un ganador bajo Onganía —la burguesía industrial emergente— pero que generalmente terminó también en empate. La crisis de conducción política de la clase dominante y sus partidos pretendió ser superada a través de golpes militares que, en definitiva, sólo aplastaron las expresiones democráticas del país, sin solucionar las referidas contradicciones, porque en la base de esa crisis de dirección estaba el fracaso del proyecto desarrollista, tanto populista como autoritario.

La política económica de la Junta Militar: comandada por Videla, tuvo un eje central, el endeudamiento forzoso, tipos de cambio fijos, tasas de interés altas para atraer capitales extranjeros, valorización artificial alta del peso en relación al dólar. Era la época de oro de la "Patria Financiera". El tipo fijo de cambio desalentó la producción de las industrias de exportación no tradicionales, estimulando las operaciones especulativas. En 1980 las exportaciones disminuyeron en un 3,9% en pesos constantes de 1970. "La evolución de las importaciones era creciente, con valores que superaban los mil millones de dólares cada mes, mientras las exportaciones señalaban una clara tendencia a la baja"*

Efectivamente, la política económica de Martínez de Hoz propiciaba la importación masiva de productos manufacturados extranjeros, como parte del modelo exportación-importación que las transnacionales habían impuesto desde mediados de la década del 70; pero no se alcanzaron a desarrollar con plenitud las industrias de exportación. En tal sentido, el plan económico de la Junta Militar cojeaba de una pata. Y se quedó cojo de las dos cuando en 1982 sobrevino la crisis de la banca mundial. Restringidos los créditos a nivel mundial, la política económica del "endeudamiento forzoso" se vino al suelo.

El experimento dejó a la Argentina en una de las situaciones económicas más graves de su historia, con un aparato productivo casi obsoleto, como resultado de un bají-

simo nivel de inversión que apenas superó el 10%, cuando lo mínimo requerido es el doble. La industria bajó su producción en un 3,2% entre 1976 y 1982, disminuyendo del 27,7% al 22,4% su participación en el producto global. La inflación batió records mundiales, mientras los salarios bajaban en tobogán al punto de que la participación de los asalariados en la redistribución de la renta nacional descendió del 49,3% al 30,8% entre 1976 y 1981. La deuda externa aumentó de 8.279.500.000 en 1976 a 44.438.000.000 dólares en 1983, pagándose 17.800 millones de dólares en concepto de intereses. La fuga de capitales fue de tal envergadura que por momentos sobrepasó al total de la deuda externa. Entre 1977 y 1982 salieron del país por ese concepto 15.300 millones de dólares, además de 8.600 millones en gastos militares y otros negocios especulativos no registrados, entre otros los usuarios de la "plata dulce". Los militares que habían tomado el poder para dar un ejemplo de austeridad y honradez resultaron ser los estafadores del siglo.

El Estado, no militar sino burgués gobernado por los militares —de acuerdo a la teoría que sabe hacer la distinción entre Estado y gobierno— se hizo cargo de las siderales deudas contraídas por los empresarios privados nacionales y extranjeros; ese mismo estado que se vanagloriaba de haber terminado con el tradicional intervencionismo económico; un Estado que bajo la dictadura militar jugó aparentemente un papel decimonónico en cuanto a dejar de hacer, dejar pasar, pero que en los hechos siguió administrando empresas, estableció las reglas del juego financiero y los tipos de cambio, fijó arbitrariamente los salarios, abrió las aduanas a los artículos foráneos y, en definitiva, se hizo cargo de la mayor deuda contraída por la Argentina a través de toda su historia en apenas media docena de años.

La victoria de Alfonsín en octubre de 1983 constituyó un rotundo pronunciamiento del pueblo contra las atrocidades de

los militares, un voto masivo por los derechos humanos, un plebiscito contra el autoritarismo y un corte político con las tendencias corporativistas que habían predominado desde el golpe de Uriburu en 1930. Los partidos recuperaron funcionalidad en su carácter de representantes de las clases o de fracciones de ellas, que anteriormente se expresaban casi de un modo exclusivo a través de las Instituciones. Sin embargo, éstas han quedado intactas, como ha podido verse en el peso de la Iglesia Católica, el empresariado y las Fuerzas Armadas que presionaron con éxito para la aprobación del "punto final". Las corporaciones patronales siguen la disputa por imponer su hegemonía en el bloque de poder.

El sector burgués ligado a las industrias de exportación tradicionales parece estar ganando la punta en la alianza con el capital financiero. Este avance estaría expresado en el lanzamiento de la segunda fase del Plan Austral a principios de febrero de 1986. Alfonsín escogió entonces el sector de las industrias de exportación para convertir "la estabilidad en crecimiento". Su ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille, prometió 400 millones de dólares de créditos a estas industrias, manifestando que los adquirentes de las empresas del Estado que se piensan privatizar "deberán adoptar medidas orientadas a elevar el nivel de eficiencia y realizar las inversiones necesarias para producir a precios semejantes a los que prevalecen en los mercados internacionales.*

Expresó, asimismo, que con este estímulo crediticio se esperaba un aumento de 500 millones de dólares de las industrias de exportación, para llegar de ese modo a fines de 1986 a un total de 2.000 millones de dólares por concepto de exportación de este sector vital de la producción. Días después, el secretario de Industria y Comercio Exterior, Roberto Lavagna, fijó algunos criterios para las industrias que quieran acogerse al plan de créditos, aunque reconoció que las elevadas tasas de interés seguían siendo una traba para el despegue. Prometió una disminución



Dragones de Buenos Aires
(1772)

de ellas y una reducción de las retenciones que se hacen a las exportaciones agropecuarias e industriales.

La mayoría de las instituciones representativas del empresariado se pronunció a favor de estos planes. El titular de la CGE, Jorge David, estimó que el discurso de Sourrouille "contempló todas las medidas que nuestra institución solicitó al presidente Alfonsín".* En el mismo sentido se expidió el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Eduardo de la Fuente, y el presidente de la Confederación General de la Industria, Rafael Kohanoff. La opinión favorable de las provincias fue expresada por el gobernador peronista de La Rioja, Carlos Menem: "La política de exportaciones anunciada es muy importante. Esta política posibilitará el crecimiento de las economías regionales, la eliminación de las retenciones y permitirá que las

* Jorge Schvarzer: *Argentina 1976-81: el endeudamiento externo como pivote de la especulación financiera*, CISEA, Buenos Aires, p. 31.

* "La Razón", Buenos Aires, 7 de febrero de 1986.

producciones del interior puedan competir con éxito en el mercado internacional”, opiniones que expresan que el Peronismo Renovador no tiene una política económica alternativa a la del alfonsinismo.

Uno de los sectores más críticos del empresariado fue el Consejo Argentino de la Industria, que nuclea fundamentalmente a pequeños y medianos empresarios, al manifestar que el plan gubernamental “descuida los aspectos referidos a la recuperación del mercado interno” y beneficia solamente a los grandes empresarios de las industrias de exportación. También se mostraron disconformes la Confederación Agraria de Buenos Aires y La Pampa, por intermedio de su presidente Héctor Orbea, y el titular de la Federación Agraria Argentina, Humberto Volando, por estimar que dicho plan era insuficiente en relación a las demandas y necesidades del sector agropecuario.

El 4 de setiembre de 1986 el gobierno otorgó nuevos privilegios a las industrias de exportación mediante la aprobación de un “paquete promocional” condensado en tres decretos: el N° 1553, denominado “Proyecto Argex”, que “relaciona la capacidad de importar temporariamente insumos libres de derechos y de autorización, a un acuerdo de exportación no menor a tres veces el valor del insumo”. El N° 1554 que establece: “cualquier mercadería podrá importarse temporariamente al país sin abonar derechos, tributos, impuestos y gravámenes, en tanto sean introducidas para recibir un perfeccionamiento industrial con la obligación de ser exportadas luego a otros países dentro de los 360 días”. Y el N° 1555, que dice a la letra: “los explotadores de mercaderías manufacturadas en el país, nuevas, sin uso, tendrán derecho a obtener la devolución total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos en las distintas etapas de producción y comercialización, así como los que hubieran pagado por la previa importación para uso o

consumo de toda o parte de la mercadería que se exporte para consumo a título oneroso”.*

Una de las condiciones para efectivizar estos privilegios es el compromiso de los beneficiarios de entregar un balance anual positivo entre exportaciones e importaciones en una relación de tres a uno. En compensación, el Ministerio de Economía hará una devolución hasta de un 5% de los derechos pagados por la importación de determinadas maquinarias, equipos, instrumentos y aparatos. El decreto 1553 sobre devolución de impuestos para productos a exportar se aplicará sobre tres listados de mercaderías, correspondiéndole la devolución en porcentajes del 15, del 12,5 y 10 por ciento.

Para lograr estos objetivos, Lavagna insistió en una cena organizada el 4 de setiembre del año pasado por la CGE y la CGI, con asistencia de la UIA, en que “el esquema de crecimiento pasa por la apertura exportadora, la ampliación de espacios económicos comunes y la modernización tecnológica del aparato industrial”.** El titular de la CGE, Jorge David, aplaudió las medidas, reconociendo que también beneficiaban a las pequeñas y medianas industrias, sobre todo por los créditos y la participación en la integración económica con Brasil.

En enero de 1987, en un intento por desmentir ciertos roces que al parecer tuvo con el secretario de Hacienda, el mismo Lavagna declaró que se habían solucionado los problemas para la entrega de los 120 millones de australes a los industriales exportadores, y no 80 millones como había dicho Brodersohn.***

El 28 de enero de 1987, el ministro de Economía, Juan Sourrouille, anunció nuevas medidas para el financiamiento externo de inversiones destinadas a incrementar las exportaciones: el Banco Central autorizaría a las entidades financieras para que otorguen avales sobre obligaciones negociables emitidas por las empresas privadas, eliminando to-

* “El Tiempo Argentino”, Buenos Aires, 5 de setiembre de 1986.

** Ibid, p. 10.

*** “El Clarín”, 21 de enero de 1987, p. 19.

das las restricciones. El régimen de Financiamiento de inversiones para incrementar las Exportaciones (FIDEX) permitirá a los acreedores externos amortizar una proporción de sus créditos con lo producido por las exportaciones adicionales que genere el proyecto de inversión que financien, proporción que no podrá exceder del 35% de las divisas adicionales. En una entrevista concedida al diario “Clarín”, Sourrouille manifestó: “Los recursos externos podrán ingresar al país como préstamos o bien como aportes de capital”, apresurándose a aclarar que “este mecanismo no tiene nada que ver con la capitalización de la deuda externa...”*

Las críticas de la oposición de centro-izquierda y de izquierda se han centrado en los planes de privatización del gobierno, lo cual no sería incorrecto si se comprendiera que la viga maestra de la segunda fase del Plan Austral es la promoción de las industrias de exportación no tradicionales, como la petroquímica, la metalmecánica, la agroindustria, la celulosa y otras de mayores posibilidades en el mercado mundial. La privatización está al servicio de este plan de crecimiento que sólo será “para afuera” y no “para adentro” como ocurrió con el proceso de industrialización por sustitución limitada de importaciones de las décadas de 1930 a 1960.

Ha pasado más de un año del lanzamiento de este plan y las metas propuestas por el gobierno no se han logrado todavía. Las posibilidades de incrementar las ventas de las industrias de exportación han chocado y siguen chocando con las barreras proteccionistas establecidas por los Estados Unidos y Europa Occidental. Precisamente, una de las principales peticiones que ha hecho Alfonsín en sus frecuentes viajes al exterior es que se abran los mercados para las industrias latinoamericanas. Más aún, el gobierno arguye que no será posible pagar los intereses de la deuda externa si no se obtienen más divisas por vía de las industrias de exportación, fenómeno que no podrá efectivizarse si se mantiene el neoproteccionismo de los países altamente

industrializados.

Contradictoriamente, la política de estímulo a las industrias de exportación no tradicionales provino de las mismas transnacionales, luego del reajuste realizado hace más de una década en cuanto a los lineamientos centrales de la división internacional del trabajo. Por consiguiente, la privatización planteada por el gobierno argentino está en relación directa con esa estrategia de acumulación y es funcional a las necesidades de asociación del capital criollo privado y estatal con las transnacionales, siguiendo la “lógica” implacable del capital. Quienes se hagan ilusiones acerca de un retorno a la política de sustitución de importaciones para desarrollar la industria liviana que trabaja con el mercado interno, quedarán fuera de la “lógica”.

La puesta en marcha de esta política de promoción de industrias de exportación suscitará hondas repercusiones en el campo laboral, acelerando la tasa de desempleo por la sofisticada tecnología empleada en ellas. Además presionará constantemente por la devaluación de nuestra moneda, ya que a los exportadores les conviene pagar con moneda desvalorizada los salarios y otros gastos, a pesar de los intentos gubernamentales de mantener el Austral artificialmente sobrevaluado.

Ha provocado, asimismo, roces con los industriales que trabajan con el mercado interno en torno a la redistribución de los créditos del Estado. Al igual que en otros países latinoamericanos en los que se han implementado estos planes, la industria liviana está condenada a la crisis permanente, a menos que se restrinjan las importaciones de los artículos y se establezcan medidas proteccionistas, hecho muy difícil de ocurrir puesto que la política económica del gobierno de Alfonsín constituye un paquete global, cruzado por el modelo exportación-importación, impuesto por las transnacionales, y estrechamente ligado al pago y la capitalización de la deuda externa.

En el fondo, la llamada “moderniza-

* Ibid, 29 de enero de 1987, p. 14.

ción" alfonsinista tiene directa relación con la "lógica" del capital financiero internacional, definición trascendente que debieron saber los que en un tiempo no muy lejano fueron marxistas. Su "Ciudad Futura" —lejos de ser ecológicamente sistémica— está edificada sobre bases altamente contaminadas por el compromiso del radicalismo de "modernizar" el país, que casualmente coincide con el estímulo a las industrias de exportación no tradicionales, según los impone la "lógica" del capital en esta fase de mundialización de la economía.

De todos modos, estamos a la espera de que estos futurólogos demuestren su consecuencia democrática, socializando el co-

nocimiento acerca de la actual renegociación de la deuda externa y llamando decididamente a un plebiscito, como el del Beagle, para que mediante el ejercicio real de la democracia —que no es sólo votar por los candidatos a dirigir las instituciones burguesas sino fundamentalmente el autogobierno, la autorepresentación y la autogestión en los movimientos sociales y toda la sociedad civil— el pueblo argentino se pronuncie sobre la deuda externa y las consecuencias económicas y sociales que tendrá para el proceso de liberación de Argentina y para sus trabajadores la implementación a todo vapor de las industrias de exportación no tradicionales, asociadas al capital financiero internacional.

LA CLASE DOMINANTE Y EL ESTADO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

* Alberto Wiñazky

Desde el año 1958 (Gobierno de Arturo Frondizi), la historia de los gobiernos civiles en la Argentina se convierte en la historia de su adaptación pasiva a los dictados de los sectores hegemónicos de la burguesía. Asimismo se producen una sucesión de políticas públicas, generosamente anunciadas pero nunca ejecutadas, y la entrada y salida de altos funcionarios identificados con la fracción dominante de la burguesía quienes procuran "modernizar" las estructuras económico-políticas mediante una creciente integración al mercado mundial y una mayor concentración del capital. Prevalece en esta postura la lógica individual sobre la colectiva de amplios sectores de la burguesía que disminuye la fortaleza de los partidos burgueses y dificulta la mediación de la acción gubernamental, haciendo problemática la actividad del gobierno de la sociedad.

Esta situación combinada con una distorsionada estructura productiva tiene un profundo impacto en la realidad política y social, ya que produce una falta de homogeneidad en los sectores dirigentes al mismo tiempo que impide que el estado sea el garante y organizador de la sociedad capitalista.

Este fraccionamiento de la sociedad burguesa¹ hace que el estado reduzca su control ideológico sobre los sectores subordinados y la ramificación de los intereses particulares resulten cada vez más irreconciliables entre sí al no poder "fortalecer" la instancia central de sus decisiones. Al no operar según un criterio funcional común, la cúpula del estado tiene que poseer poderes tanto más omnipotentes que le permitan seguir imponiendo la mínima coherencia al conjunto de la sociedad. Los golpes de estado que recurrentemente afectan la vida política e institucional de la Argentina se inscriben dentro de éstos parámetros.

De este modo llegan a cristalizar en los aparatos del estado, en el ciclo histórico de la lucha de clases, relaciones sociales que asumen una existencia material que hasta cierto punto son independientes de la política y de las relaciones de clase existentes. Teniendo en cuenta que el estado es la expresión de un conjunto enormemente complejo de relaciones de clases, esta situación complica su organización y debilita los distintos aparatos afectando en forma significativa su

* *Economista - Movimiento Al Socialismo*

posición en cada dimensión del tiempo histórico social. Por otra parte y dado que el estado opera simultáneamente como expresión de dominación de clase y como ejecutor de las tareas sociales que le impone la fracción dominante, su debilidad lo hace entrar en contradicciones entre esa dominación y las relaciones de clase existentes.

Esta contradicción entre las necesidades del sector hegemónico de la burguesía y la debilidad crónica del aparato estatal tiene su punto culminante durante la dictadura militar resultante del golpe de estado de marzo de 1976. Ya en el régimen instalado diez años antes, en junio de 1966 (interregno del presidente-general Onganía), la coalición que aborda el poder² intenta, excluyendo fundamentalmente a los sectores populares, "el desarrollo socio-económico" y la eliminación de los "enemigos internos", estableciendo nuevas reglas de juego a través de una alta concentración económica y de una brutal represión, todo en beneficio de las fracciones monopólicas de la burguesía.

Pero en marzo de 1976, la realidad política de la Argentina es aun más compleja. Sus estructuras fragmentadas y muy diferenciadas hacen que la función mediadora del estado se torne conflictiva y el manejo de la sociedad, —ante las continuas demandas sociales y el avance de los grupos guerrilleros—, resulte de difícil implementación para una fracción burguesa que no puede garantizar el desenvolvimiento de la sociedad capitalista. El descenso de legitimidad del gobierno peronista, severamente cuestionado por su total falta de cohesión y solidaridad interna, la caótica situación política, la crisis económica³ y la embestida de la clase trabajadora⁴ que intenta recuperar parte del despojo salarial producido como consecuencia del rodri-gazo, hacen que la caída de Isabel Perón se constituya en un requisito ineludible para frenar el avance del movimiento obrero⁵ y estabilizar la dominación burguesa.

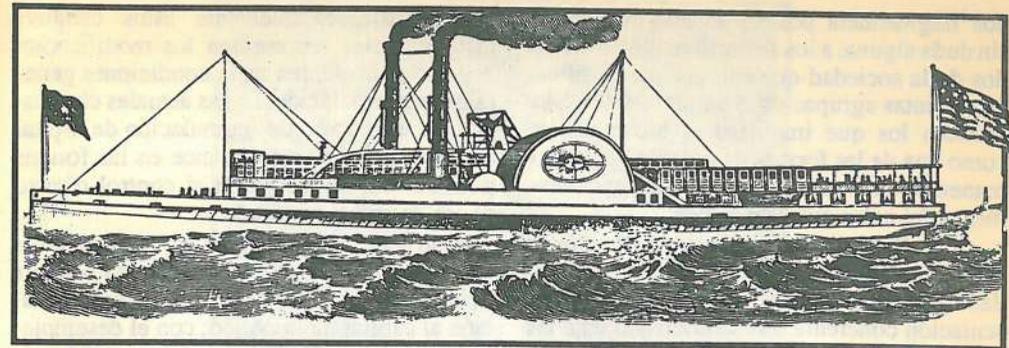
El golpe de estado de 1976, concretado por la fracciones dominantes locales y el capital financiero internacional, trata esencialmente de eliminar o por lo menos disminuir

el poder social de los trabajadores. Al mismo tiempo quiere destruir su fuerza política, única capaz de transformar una sociedad arcaica y reaccionaria como la Argentina.

A partir de entonces se suceden profundas reformas económicas con las cuales la clase dominante ensaya una serie de soluciones que responden, en lo fundamental, a la lógica individual de los distintos grupos de presión. De este modo, el particularismo más salvaje se constituye en "las orientaciones básicas de los operadores económicos, llevando a una verdadera redefinición de roles e intereses, como fue el caso de la gran parte de la burguesía industrial, que con gran capacidad de reacción adaptativa se convirtió a actividades comerciales y de especulación financiera, en muchos casos salvándose individualmente, pero contribuyendo colectivamente al derrumbre final del proyecto militar restaurador"⁶.

Según estas afirmaciones, para la burguesía industrial la especulación financiera a la que desenfadadamente se dedicó buena parte de la burguesía es producto de la reacción adaptativa y además el golpe militar de 1976 incluye un proyecyo restaurador, cuyo fracaso se debe imputar a la fragmentación de la representaciones de la propia burguesía. Entonces y dado que esto responde al individualismo y a la división de los intereses de este sector, las demandas resultan diferenciadas y contradictorias haciendo compleja y difícil la tarea del estado.

Como consecuencia observan que la concentración del poder político en manos de los militares (situación que se presentó en forma aguda durante la última dictadura militar), implica cierto grado de riesgos implícitos y que ese poder discrecional puede ir también en contra de sus propios intereses. Por lo tanto comienzan a poner especial atención en los sistemas de representación que responden a la organización de los intereses de los distintos sectores de la burguesía en función de la máxima coherencia entre las cuestiones ideológicas, políticas y económicas. Esto significa que las distintas fracciones de la burguesía consideran que la defensa de sus patri-



monios tiene que involucrarlos y comprometerlos en primera persona... Es así que desde 1983, pero especialmente desde la aparición del "Plan Austral" la burguesía busca a través de sus diversas asociaciones en las que se agrupa, redefinir los intereses particulares en un denominador común, para de esta forma incidir activamente sobre las políticas generales y no colocarse en una posición defensiva frente a eventuales propuestas del estado.

Es a partir de este momento que el estado comienza a arbitrar en favor del gran capital en forma concluyente, tanto nacional como multinacional, siempre en perjuicio de los trabajadores y de las pequeñas empresas. De esta forma los "capitanes de la industria" inician la participación directa en la conducción del holding de empresas públicas cuyas características fundamentales son: a) reestructuración de las empresas del estado y su posible traspaso a manos privadas; b) la estrecha vinculación de estos nombres⁷ con los sectores más concentrados de la economía y con las grandes compras del estado y c) el retiro voluntario de los trabajadores estatales.

Por otra parte es dable advertir que esta conjunción de empresarios y estado no es lineal, a pesar del discurso que pontifica sobre la acción colectiva del empresariado, ya que la integración del directorio provoca ciertos conflictos con los sectores o grupos económicos no concentrados que ven cómo el control del estado va quedando en manos exclusivas del gran capital.⁸

La política que los "capitanes" intentan concretar desde el directorio del holding

tiene tres aspectos fundamentales: "...las grandes empresas dependientes de Obras y Servicios Públicos, que solo pueden privatizarse en áreas y servicios periféricos; las empresas del área siderúrgica y petroquímica en las que se avanzará hacia la privatización por vía de las inversiones de capital nacional y extranjero, y las empresas en quiebra absorbidas por el Estado que deberán ser devueltas al sector privado".⁹

El holding no solamente decidirá sobre el traspaso a manos privadas de importantes empresas del estado sino que también tiene facultades para definir políticas de precios y contrataciones de manera que muchos de sus miembros que se encuentran relacionados con los grupos que proveen bienes y servicios al estado se encuentran en condiciones de decidir activamente sobre el tema.

De manera que el intento de retirar al estado de la actividad empresaria desprendiéndose de la empresas que más interesan al gran capital monopólico; permitir la competencia y la libre entrada de nuevos oferentes en el mercado; el arancelamiento de los servicios sociales; la liberalización de los mercados, etc., responden en líneas generales a viejas aspiraciones del capital monopolista, que ahora desde el manejo directo de dichos resortes del estado intentan implementar en beneficio de los grandes grupos económicos.

El caso del holding de empresas públicas pretende ser un ejemplo del comportamiento de la burguesía industrial en la Argentina en esta nueva etapa. Cuando ésta manifiesta que su representación debe ser lo me-

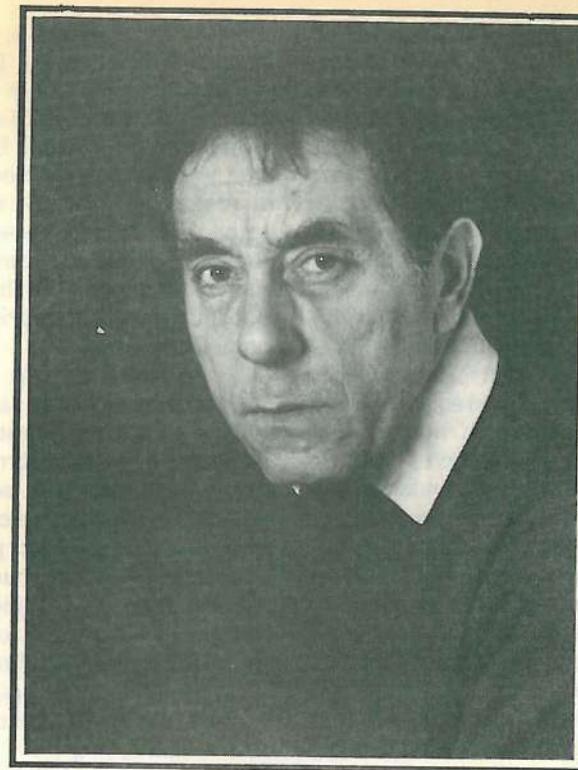
nos fragmentada posible se está refiriendo, sin duda alguna, a los sectores más concentrados de la sociedad que son los que dominan las distintas agrupaciones empresariales. Son también los que impulsan el bipartidismo, como una de las formas de asegurarse la permanencia en el seno del poder independientemente del color que éste asuma.

Pero es indudable también que la fragmentación de los fundamentos de la sociedad no permite que haya un sistema de representación coherente. Por el contrario ante las demandas de una mayor legitimidad formal, las ideologías oficiales solo atinan a poner "parches" en los puntos neurálgicos, tratando de suplir las diferencias de la legitimidad material. Tampoco pueden relacionar los intereses económicos más concentrados con determinadas formas institucionales: según la coyuntura política los mismos sectores favorecen unas veces al gobierno militar, otras a una democracia formal e incluso algún inten-

to populista. Simplemente estos cambios institucionales representan las modificaciones que se presentan en las condiciones generales de acumulación. En las actuales circunstancias, el proceso de acumulación de capital va de la mano con un avance en las formas políticas burguesas y con el control directo de los aparatos del estado.

Ante este modelo de país, que pretende hacer eficiente la actividad económica a través de la iniciativa privada; con total subordinación al capital monopólico; con el desempleo y la disminución del salario; con el incremento permanente de la deuda externa y el pago de los intereses a la banca usuaria, los trabajadores y las fuerzas de izquierda deben ser el eje del proceso que tienda a unificar el sistema productivo. Pero este debe hacerse sobre la base de la socialización, es decir, sobre la base del control colectivo del sistema de producción por parte de los productores asociados.

- 1 *Militares, altos funcionarios públicos, empresas multinacionales quienes contaban inicialmente con el apoyo de un numeroso sector de la clase media urbana.*
- 2 *Como reflejo de la crisis que desde cinco años antes golpea a todo el sistema capitalista.*
- 3 *Que coincide con el fortalecimiento de toda una corriente antiburocrática en distintos gremios.*
- 4 *La acción de las Comisiones Coordinadoras, los sucesos de Villa Constitución, etc.*
- 5 *Requisito indispensable para aumentar la tasa de ganancia.*
- 6 *Boletín Informativo Organización Techint N° 235, octubre-noviembre-diciembre 1984, pág. 102.*
- 7 *Manuel Madanes, Nicolás Gallo, Hector Massuh, Javier Gambos, etc., La Nación, 6 de diciembre de 1986.*
- 8 *Especialmente con la Federación Agraria Argentina, el Consejo Argentino de la Industria y la Confederación General Económica.*
- 9 *El Periodista, N° 123 del 16 al 22 de enero de 1987, pág. 12*



IN MEMORIAM

No es fácil explicar por qué Julio Sciesler (Julio Huasi) se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. No vamos a caer en la mojigatería de la crítica del suicidio. En la sociedad que vivimos, el suicidio es criticado como un delito porque nadie puede ser propietario de su cuerpo, hacer uso de él es transgredir lo que es norma. Hiciste con tu cuerpo lo que te pareció -era tu derecho- pero sin dudas, tenías que estar muy jodido para tomar esa decisión. En esta sociedad, frente a la violencia que por todos los poros irradia el Estado para la constitución de un determinado perfil productivo, el suicidio no es una explosión, sino que más bien es una implosión.

¿Por qué, Julio?. Afectivamente estabas con problemas, y de eso no podemos

hacernos cargo. Empero, si tenemos responsabilidad -mucho y en muy distintos grados- sobre dos cuestiones que eran una, como unidad, en un tipo como vos: tu trabajo y tu práctica política. Si hay veces que callarse es mentir, esta es una de esas veces. No eras un tipo nada fácil de tratar. En eso, coincidimos lo que te conocimos. Sin embargo, tuviste muy serios problemas para trabajar en lo tuyo. Muy pocas puertas se te abrieron. Puertas que algunas quedaban semi-entornadas, porque no te mimetizabas "modernizándote". Así viste como te iban haciendo a un lado en lugar, en dos, en tres... Entonces, a no equivocarnos en el vizcachazo. Del enemigo está muy claro lo que se puede esperar, pero de parte de muchos de los compañeros, hay al-

go que es lo básico y faltó en la dosis necesaria: solidaridad. Es muy probable que no hiciste mucho para que te ayudáramos, pero tampoco nadie se preocupó precisamente en exceso por revertir esa situación. ¿Cuántas veces, simplemente, nos sentamos para escuchar lo que tenías adentro? Te quedaste solo, he ahí el problema. No en vano dejaste como testimonio las felicitaciones de Julio Cortazar para quien tu último libro, "Asesinaciones", era "el más importante de la poesía argentina de todos estos últimos años".

Dejaste esas felicitaciones a modo de testamento-reproche, como aquel que dice: "vieron, esa era yo, y ustedes no me daban pelota". Punto por aquí. Por otra parte, estaba tu salud deteriorada, tus problemas personales y esa cosa tan terrible (cuál que no sabemos?) que hay en esta sociedad para que tipos como vos se hayan ido. Problemas sobre los que hay que reflexionar y plasmar en propuestas concretas de solidaridad, para que todos sepamos salir al cruce ante problemas de igual índole. Tuviste una larga y brillante carrera periodística en América Latina y en España. Fuiste un internacionalista a veces

obligado por el destierro, pero otras, las mejores de tu práctica, por libre decisión. Pero lo más importante en ese andar: fuiste poeta, y de los muy buenos. Tu entierro fue un despelote: a lo Julio Huasi. El nombre que adpaste y por el que casi todos te conocíamos. El desgarrado tipo que tocó una chacarera arriba de tu tumba, en un cementerio judío donde te enterraron como vos no hubieras querido, es quizás el símbolo de que a su manera, quedan muchos tipos con firmeza de palabra. Como vos.

Arreglaste una vez con un amigo, que como buen poeta, cantaran y tocaran la guitarra en el día de tu entierro. Así fué, a pesar de que el cantor le prohibieron que lo hiciera. Esperó que todos se fueran y cumplió: sonaron las melodías en el medio del cementerio. La práctica fue: prohibido prohibir. Los de acá, con tu muerte tomamos más conciencia de todo lo que nos falta por crecer, para evitar implosiones como la tuya. Aunque quedate tranquilo hermano, que después de muertos te acompañaremos para aportar a un mundo más fraternal en la tierra, el cielo o el infierno.

Hasta la próxima, Julio.

Julián Lemoine